

La frontera de fronteras  
**PUTUMAYO**

*Violencia, narcotráfico y guerrilla*



*Salomón Cuesta Zapata*  
*Patricio Trujillo Montalvo*

# La frontera de fronteras **PUTUMAYO**

*Violencia, narcotráfico y guerrilla*

*Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM)*  
*Abya Yala*

Quito-Ecuador  
1999

**PUTUMAYO**

la frontera de fronteras violencia, narcotráfico y guerrilla

*Salomón Cuesta y Patricio Trujillo*

1a.Coedición                      Fundación de Investigaciones Andino Amzónicas (FIAAM)  
Santa Prisca y Pasaje Ibarra. Edificio Gómez Oficina 504  
Telefax:(593-2) 572-629  
e mail: fiaam@pi.pro.ec

Ediciones ABYA-YALA  
12 de Octubre 14-30 y Wilson  
Casilla: 17-12-719  
Teléfono: 562-633 / 506-247  
Fax: (593-2) 506-255  
E-mail: admin-info@abyayala.org  
editorial@abyayala.org.  
Quito-Ecuador

Diseño Gráfico:                  Abya-Yala Editing  
Quito - Ecuador

Impresión:                         Docutech  
Quito - Ecuador

ISBN:                                9978-04-557-0

Impreso en Quito-Ecuador, 1999

## PRESENTACIÓN

### MARGINADOS Y ETERNOS PERDEDORES

*Segundo E. Moreno Yáñez*

En la segunda mitad del año en curso (1999) las noticias de prensa, especialmente de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, predicen, sin documentación confiable, que el área de conflicto colombiano guerrilla, ejército y paramilitares se ampliará hacia las fronteras venezolanas y ecuatoriano-peruanas. En el Ecuador las regiones amenazadas serían las zonas septentrionales de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Para entender mejor estas lúgubres predicciones es importante señalar que en la larga historia de los movimientos guerrilleros colombianos, en ningún momento, su expansión se ha acrecentado como ahora y su financiación indirecta, gracias al narcotráfico, pocas veces ha estado tan asegurada. La estructura de la violencia en Colombia no permite distinguir a cabalidad los tres factores, a saber, el sistema de la narcoindustria, las fuerzas insurgentes calificadas como izquierdistas y las denominadas fuerzas de autodefensa campesina, más comúnmente paramilitares.

Ya en 1993, los autores del presente trabajo, Salomón Cuesta y Patricio Trujillo, conjuntamente con Jorge Almeida Cádena, elaboraron un “Diagnóstico preliminar” sobre el tema de la violencia en la región fronteriza del Putumayo. Los procesos sociales, políticos y simbólicos señalados hace seis años se mantienen dentro de los mismos parámetros detentados entonces. Pocos

años antes, es decir hacia finales de la década de 1980, como ponen en relieve los autores de “Tempestad en la Amazonia ecuatoriana” (Ciesa, Quito, 1992), los temas de violencia y el narcotráfico eran poco relevantes o quizá estaban todavía ausentes del horizonte nororiental ecuatoriano. Como verdaderos generadores de impactos negativos aparecían la actividad hidrocarburífera, a la cabeza, seguida del cultivo y procesamiento de la palma africana y, en tercer lugar, la deforestación y actividades agropecuarias de los colonos e indígenas. El tráfico de estupefacientes, precursores y otros productos químicos se daba a pequeña escala, aunque ya entonces era conocida la migración temporal de mano de obra ecuatoriana a las plantaciones de coca situadas en la Amazonia colombiana. No es posible prescindir en este breve análisis de la presencia de emigrantes colombianos en los asentamientos urbano-rurales del nororiente ecuatoriano, obligados por la inestabilidad social y política en su país, debido a la presencia guerrillera en varios departamentos de Colombia y especialmente en el del Putumayo.

Salomón Cuesta y Patricio Trujillo pretenden, en esta obra, mantener los mismos parámetros válidos en 1993, y dar prioridad a la visión de la población vinculada a la trama económica y política de una típica zona de frontera. En los antecedentes de este libro, ofrecen, como meta, “proporcionar elementos críticos sobre el proceso que vive el Putumayo ecuatoriano”, oferta que a lo largo de las páginas se cumple a perfección; no así el segundo objetivo: desvirtuar la “paranoia informativa” que ha circulado en diferentes medios de prensa, “en donde se predice una virtual ampliación del área de conflicto guerrillera - paramilitar hacia la frontera con el Ecuador, en especial hacia las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos”. Incluso para un lector superficial del presente trabajo queda en claro que, aunque hay una “inflación paranoica” en los medios de comunicación, es real el peligro de que amplios sectores de la población ecuatoriana sean

obligados a insertarse en una dinámica de violencia similar a la que vive Colombia pero, al mismo tiempo, subordinada en ella.

Esta aseveración no significa desvirtuar el enorme interés de los “halcones” norteamericanos y sus aliados latinos en intervenir, no solo con asesores, consejeros y armamento, sino con bombardeos y tropas en territorio colombiano. La política intervencionista de los Estados Unidos de América se ha repetido a lo largo de la historia republicana de sus vecinos del sur, aunque en sus últimas intervenciones y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, han buscado por lo menos un apoyo nominal y jurídico de organismos internacionales, o de un grupo regional de países. La posición común que busca Washington es formar un “frente común” con los países fronterizos con Colombia, e incluso una “asociación hemisférica” para, en una primera etapa, aislar a la guerrilla y desactivar el narcotráfico colombiano y, posteriormente, realizar una intervención militar conjunta. Después de la trágica experiencia en el Vietnam los Estados Unidos utilizarán estas alianzas para ellos proponer los planes políticos y militares y entregar una abundante ayuda armada, mientras sus “países aliados” pondrán su sangre, sudor y lágrimas, para luego caer en mayor miseria.

Los episodios actuales confirman la validez de esta predicción para un futuro no lejano. La gira del Director de Política Antinarcóticos, Barry Mc Caffrey, por cuatro países sudamericanos, realizada en agosto de 1999, ha sido la ocasión para advertir a sus gobiernos sobre la amenaza a la que está sometida Colombia por la agresión coaligada del narcotráfico y de los grupos militarizados. A lo anterior se debe añadir el nerviosismo actual, que pretende transformarse en “paranoia”, de los políticos norteamericanos respecto a la actitud de escasa colaboración del presidente venezolano Hugo Chávez y de su disposición a dialogar con las FARC porque, según su opinión, ellas “tiene el poder colombiano”.

A pesar de la mayor o menor participación del Ecuador en el sistema de producción y del narcotráfico, está claro que nuestro país se ha vinculado al denominado “triángulo amazónico” o ECUPECO (Ecuador - Perú - Colombia), sistema que se remite a un complejo económico internacional, cuyas principales ganancias están en los mercados consumidores del Primer Mundo. El papel de los territorios del Putumayo ecuatoriano, dentro de este sistema es, como en el “período cauchero”, ofrecer mano de obra temporal y barata, servir de paso a los narcotraficantes y producir alimentos y bienes de infraestructura que, al ser comercializados en Colombia, permiten usar sus propios territorios para el mantenimiento de plantaciones de coca y marihuana. En alguna ocasión, la región ecuatoriana del Putumayo ha servido como zona de refugio y descanso a los perseguidos en el otro lado de la frontera.

Esta inserción dentro de una macrodinámica no puede ser comprendida solo desde el punto de vista económico y menos todavía político. La interacción de los diversos actores demuestra una articulación a un sistema económico regional y a sus manifestaciones de conflicto y violencia; todo lo cual está integrado dentro de una percepción de la población en un nivel simbólico y de común identidad a ambos lados de la frontera política. Los imaginarios de la zona de frontera amazónica involucran tanto a las poblaciones aborígenes como a los campesinos colonos, quienes emigraron desde otras regiones de Colombia y Ecuador y se asentaron a lo largo de la región en distintos períodos del presente siglo. En ambos lados de la frontera habitan campesinos colonos e indígenas que mantienen relaciones familiares y de comercio, similitudes lingüísticas y visiones culturales compartidas; su destino frente al narcotráfico y la violencia también es común, pues se encuentran atrampados entre los fuegos cruzados de los paramilitares, narcotraficantes, tropas del Estado y grupos guerrilleros. De aquí se desprende la necesidad de conocer y aceptar



como válida la percepción de la población involucrada y no exclusivamente aquella de los actores externos: objeto que se ha propuesto este trabajo, particularmente en los acápites que incluyen entrevistas con una muy alta comprensión humana.

Causa consternación verificar, como lo hacen los autores, que el poblamiento y colonización de la Amazonia se ha dado históricamente bajo el signo de la violencia. El período de la recolección del caucho, la explotación petrolera y la narcoindustria han sido largos momentos en los que la fuerza de las armas y la arbitrariedad fueron y son elementos fundamentales en el control social, político y simbólico de ese espacio. Este juego social, y no solo las condiciones ambientales, explica la fragilidad de los grupos humanos condicionada bajo un patrón de permanente crisis. Estos grupos han sido permanentemente explotados, mientras sus riquezas han financiado a las grandes empresas capitalistas y transnacionales.

Nuestros políticos, los estrategas militares y los medios de comunicación deben darse cuenta que una “guerra contra las drogas”, o contra la “narcoguerrilla”, es una guerra, en la cual los únicos perdedores son los pobladores de aquellas regiones marginadas del Estado, y de que jamás será vencida en las regiones productoras sino únicamente en los pueblos consumidores. Ante la posibilidad de que la violencia que vive la zona del Putumayo colombiano se traslade al interior de la región fronteriza ecuatoriana, es importante impedir, con todos los medios al alcance, su expansión internacional, lo que jamás justifica una represión propugnada por el Estado, ni la apertura de nuevos espacios de guerra con la intervención de tropas ecuatorianas en territorio colombiano. Aunque los planes de gobierno se modifiquen y abunden las “ofertas” norteamericanas para sacar al país de la crisis, a condición de una alianza militar para intervenir en otro Estado soberano, todas las fuerzas políticas, la sociedad ci-

vil y la opinión pública en su totalidad deberán trabajar mancomunadamente para negarse y oponerse a una intervención armada más allá de nuestras fronteras. Los “Salvador Boys” del Pentágono, desconocedores de la Historia, han transformado en dogmas su interpretación de conflicto y posterior proceso de paz de la República de El Salvador, al aseverar que solo la escalada militar norteamericana evitó el triunfo del Frente Farabundo Martí y obligó a la guerrilla a una negociación. Ante este ejemplo, los ecuatorianos debemos preguntarnos: ¿qué perdieron los Estados Unidos en esta guerra civil centroamericana?, ¿cómo terminó El Salvador?, ¿quién puso el sufrimiento y los miles de cadáveres? No nos dejemos confundir por quienes, después de haber defendido sus propios intereses, jamás repararán la destrucción, el sufrimiento y la pobreza generados dentro de pueblos hermanos.

*Quito, agosto de 1999*

## ANTECEDENTES

Este estudio, proporciona generalidades sobre la dimensión del narcotráfico en los países andinos y la inserción del Ecuador en esta industria. En el mismo se presentan algunos de los factores que condicionan los distintos niveles de conflicto y violencia existentes en la región de la ribera sur del Putumayo (Ecuador). Allí se encuentran situaciones *sui géneris*, tanto por la presencia de actores ligados a la narcoindustria, contestación armada colombiana (insurgencia o subversión desde el discurso de las instancias estatales colombianas), paramilitares (colombianos y ecuatorianos), fuerzas de seguridad estatal (colombiana, ecuatoriana), agenda de seguridad norteamericana, intereses industriales petroleros y población en general atrapada en un enfrentamiento abierto entre los actores mencionados; cuanto por un desconocimiento tácito de la dinámica social, económica y cultural que allí se desenvuelve, resultado de la información parcial y deformada originada desde los medios de comunicación y por la ausencia de trabajos integrales y multidisciplinarios generados desde los ámbitos académicos.

Este desconocimiento que conlleva diversos juicios de valor vinculados con erradas interpretaciones de los factores históricos, políticos, económicos y simbólicos que condicionan a la dinámica zonal, la cual está relacionada con esferas intra-regionales (Putumayo, amazonia ecuatoriana), inter-regionales (zonas andinas y de la cuenca amazónica), e internacionales (países vinculados a la región andina, cuenca amazónica y aquellos países industrializados que se abastecen de los distintos productos extraídos de la zona, de carácter legal e ilegal). Lo cual marca un sistema de dependencias e interdependencias de carácter com-

plejo, que configura problemáticas, que supera el simple análisis localista de los fenómenos y que pueden ser detectables en dinámicas que vinculan la historia de flujos y reflujos migratorios (ocupación y vaciamiento poblacional) de la amazonia, la configuración de los estados nacionales y las economías de enclave o extractivistas que han ocurrido en la amazonia ecuatoriana, peruana y colombiana en los últimos cien años, a saber.

Desde una óptica simplista, muy difundida, la solución de las diversas problemáticas existentes se reduce a la aplicación sistemática de estrategias de control policial y/o militar, satanización y represión de la población inserta en la trama de violencia. Posición que deforma el análisis de los fenómenos que allí ocurren. En tal sentido las políticas de acción o intención que se puedan implementar en la zona se tornan deformantes ya que los distintos actores involucrados no son diferenciados y se les homogeniza en el plano delictivo. Para la población atrapada, entre el fuego cruzado de los varios actores armados, esta homogenización degenera en una vinculación tácita a una espiral de enfrentamiento construida desde la legalidad e ilegalidad. Escenario en el cual, las opciones de la población se remiten a la inserción en la trama de violencia tomando partido de uno u otro bando armado, al desplazamiento o al refugio, al intentar salvaguardar sus Derechos Humanos: para este caso concreto, el derecho a la vida.

Las problemáticas de la zona de frontera, desde la perspectiva de los sectores urbanos ecuatorianos principalmente, se incrementa debido a la información fragmentada y los juicios de valor enunciados, en mayor o menor proporción, que se difunden a través de los distintos medios de comunicación y de opinión. Medios informativos que, sin mayor o ningún conocimiento debido, de los procesos que se desarrollan en la frontera colombo—ecuatoriana, ayudan a construir una imagen falsa de la situación política, económica y social de los distintos actores, al argumentar la

criminalidad de la industria del narcotráfico en torno a premisas morales, las que no ponderan los procesos que allí ocurren. Desde aquellas reflexiones, la única política de acción posible en la región es: el incremento sistemático e indiscriminado de estrategias policiales, las mismas que en las actuales condiciones de inestabilidad de la zona, solo ayudarían a disparar de manera exponencial los niveles de conflictividad y violencia.

Por otro lado, en los últimos años, en el Ecuador y en la Región Andina, este panorama informativo (deformado, escaso o fragmentado) de los procesos de conflictividad, violencia y los diversos actores políticos y económicos vinculados con la misma se ha visto incrementada por la carencia de acercamientos desde la perspectiva académica a la problemática de la violencia y la ideologización de la misma en espacios que antes privilegiaron el estudio integral del fenómeno, debilitamiento o desaparición de los espacios académicos vinculados al análisis de actores políticos altamente conflictivos: contestación armada (guerrilla, insurgencia, subversión), narcotráfico, paramilitares y Fuerzas Armadas y como ellos se articulan en el proceso de violencia, en las agendas (internas y externas) de los distintos países vinculados.

Para el caso ecuatoriano, este espacio fue ocupado en su momento por la FLACSO—Ecuador (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), la cual proporcionó una visión regional de la violencia en los Andes y la red de actores vinculadas a la misma, principalmente desde la óptica de las Ciencias Políticas con trabajos como el de Alexei Páez (1990) *Violencia y Narcotráfico en la Región Andina*, quien caracterizó al problema en términos de proceso, superando el análisis situacional de la coyuntura, al proponer salidas posibles vinculadas a la hermenéutica social; Adrián Bonilla (1993) *Las trágicas paradojas de la fidelidad. La política ecuatoriana en la internacionalización del narcotráfico*, trabajo que revela la irónica vinculación del Ecuador en el contexto del narcotráfico frente a los Estados Unidos, la cual sobre-

dimensiona el problema en busca de ventajas desprendidas de dichas relaciones, lo que no hace más que evidenciar el bajo peso específico del país en el sistema internacional; Bruce Bagley, Adrián Bonilla y Alexei Páez (1991), editores, de *La Economía política del narcotráfico*, texto que empata con la línea de reflexión de los textos anteriores; y desde una óptica más amplia de las distintas formas de conflicto y violencia que se dan en Ecuador el trabajo editado por Julio Echeverría y Amparo Menéndez—Carrion (1994) *La violencia en los Andes. El caso ecuatoriano*. La FLACSO condujo este espacio de reflexión académica, no obstante, desde el debilitamiento económico y político de la institución, los niveles de análisis han tomado distintas prioridades.

Otro acercamiento a la problemática ha sido desde los Derechos Humanos con publicaciones de divulgación y concienciación de la problemática de la frontera como el Informe Misión Sucumbíos (1992) editado por una serie de organizaciones ecuménicas y laicas vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, y otros esfuerzos informativos de menor magnitud sin la trascendencia de la publicación mencionada; de aquellas instituciones auspiciantes, muchas de esas organizaciones han abandonado el país. En el plano del trabajo institucional, el caso más importante fue la defensa frontal de Monseñor López Maraño, Obispo del Aguarico, a los denominados *11 del Putumayo*, frente a las arbitrarias y erradas acusaciones de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a indios y campesinos amazónicos acusados de “guerrilleros de finca”, luego a la emboscada, a efectivos policiales ecuatorianos, realizada por las FARC en la zona de Peña Colorada en el río Putumayo en 1992, en un incidente confuso que todavía no ha sido plenamente aclarado por autoridades ecuatorianas.

Otras, publicaciones como el de Adriana Rossi (1996), *Narcotráfico y Amazonia ecuatoriana*, texto que, lastimosamente, no contextualiza de forma adecuada la problemática que ella se

plantea describir con la utilización de datos que al criterio de los autores del presente trabajo son errados y basados en informaciones que no corresponden a la Amazonia ecuatoriana. Nelson Romero (1990) en su texto *Las Plagas de América: Narcotráfico y deuda externa* realiza un esbozo de las tendencias del narcotráfico en el Ecuador, esfuerzo interesante pero que no justifica sus fuentes, sobre todo aquellas que arrojan datos cuantitativos. En el caso de los dos textos mencionados integran un conjunto de datos y sus aparentes justificaciones anclan en la especulación.

A lo largo de la década del ochenta, con el apareamiento de nuevos actores violentistas<sup>1</sup> se dan a luz estudios sobre las diferentes manifestaciones de la “violencia” en la Colombia contemporánea, entre los más relevantes se tiene a: Eduardo Pizarro (1995.), Alejandro Reyes (1988), Mark Chernick (1990), Adolfo Molano (1987), quienes desde la “violentología” (esfuerzo multidisciplinario, que toma elementos de Ciencias Políticas, Antropología, Sociología y Psicología Social, Etnopsiquiatría entre otros insumos teóricos y académicos) proporcionaron elementos críticos para el entendimiento de los procesos de violencia.

A través de la violentología, la problemática se academiza, pretende dar pautas hermenéuticas que proporcionen insumos que van más allá del diagnóstico, en una constante búsqueda de los sentidos que genera la violencia, ubicando de manera crítica las distintas posiciones de los agentes y actores sociales protagonistas. Propositiones frescas, o por lo menos más ajustadas a la magnitud del fenómeno, han contribuido a matizar la problemática colombiana y su efecto centrífugo, al superar elaboraciones previas, que de una u otra manera estuvieron atravesadas de conceptos sesgados por cargas morales y juicios de valor orientados a legitimar y salvaguardar el espacio de poder de aquellos grupos y/o individuos involucrados.

En Perú los “senderólogos”, trataban de explicar y analizar la experiencia terrible del fanatismo del Sendero Luminoso (SL), y las respuestas igualmente brutales por parte del Estado peruano a este desafío. En esta línea ocupan un lugar privilegiado los estudios de Carlos Iván Degregori (1990), Degregori y Grompone (1991) y Gustavo Gorriti (1990), autores que en sus trabajos logran introducirse en la estructura simbólica y organizativa del SL, análisis desde una perspectiva académica que no estuvo errada, estos estudios coincidieron con la estrategia de Fujimori para desarticular al SL a partir del arresto y confinamiento de Abimael Guzmán o “Presidente Gonzalo”.

Finalmente, desde la formación antropológica de los autores del texto que se presenta, el trabajo de María Victoria Uribe (1996), *Matar, rematar y contramatar*, quien en sus descripciones sobre las variantes del homicidio y el proceso ritual que éste engloba, proporciona pautas para entender a la violencia, como una estructura profundamente inserta en el imaginario de los actores, al evidenciar elementos que permiten hablar de una “cultura de la violencia”. Posición extremadamente compleja, ya que está en el debate, si la violencia es sustancial o consustancial al hombre. Desde la APEP (1990) la salida es tajante (moral y teológicamente sustentada): la violencia es consustancial al ser humano.

Sobre los procesos de violencia que vive la frontera norte del Ecuador se encuentran referencias parciales en textos como: *Mama coca* (Hennman, Antony, 1992), *Coca Nostra* (Castillo, Fabio, 1991), *Putumayo* (Comisión Andina de Juristas, 1993), *La Irrupción del Paraestado* (Palacio, Germán, Comp., 1990), *Colonización, Coca y Guerrilla* (Jaramillo et al., 1989), *Pacificar la Paz* (Comisión de Superación de la Violencia, 1992). Estos documentos publicados, describen cómo la frontera norte del Ecuador se articula al sistema de la narcoindustria desde la década del



ochenta y a la dinámica socioeconómica en general de la frontera sur de Colombia.

El trabajo que se presenta, tiene sus raíces en el estudio que data de 1993: *La violencia en el Putumayo. Diagnóstico preliminar* (Almeida, Cuesta y Trujillo), el cual abordó la problemática de la violencia desde la óptica de la Antropología y en este sentido se dio prioridad a la visión de la población vinculada en la trama económica y política de la frontera norte. Al momento, 1999, los procesos sociales, políticos y simbólicos, que se desarrollan en el Putumayo se mantienen en los mismos parámetros que se describieron en aquel entonces. En el desarrollo del texto, los autores, señalan los cambios de énfasis en las estrategias, proyectos políticos y económicos de los actores involucrados.

En tal virtud el presente trabajo matiza la información recolectada en 1993, a la luz de los cambios ocurridos en los últimos años y a la sistematización de información de campo recopilada por los autores a lo largo del mismo periodo. Su meta es proporcionar elementos críticos sobre el proceso que vive el Putumayo ecuatoriano; que al mismo tiempo desvirtúen la paranoia informativa que los distintos medios de comunicación han circulado, desde la publicación del artículo “*Nación Violencia Política*” aparecido en Semana # 778 de marzo 31 de 1997, en donde se predice una virtual ampliación del área de conflicto guerrilla—paramilitares hacia la frontera con el Ecuador, en especial hacia las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, y posteriormente las declaraciones conexas de Carlos Castaño a raíz del asesinato del diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD) Jaime Hurtado, producido en febrero de 1999. Crimen presuntamente cometido por sicarios colombianos, contratados por los paramilitares, debido a la vinculación de Hurtado con la guerrilla (FARC).

Sin embargo, todos estos acontecimientos generaron una verdadera inflación paranoica, que pretendía insertar al Ecuador en una dinámica de violencia similar a la que vive Colombia, coincidente con la profunda crisis económica que atraviesa Ecuador y el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en lo referente a la seguridad externa del país y posterior a la última delimitación de la frontera común entre Ecuador y Perú.

*Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas  
(FIAAM)*

# 1. INTRODUCCIÓN

Ecuador está inserto en el sistema de la narcoindustria, sin llegar a los niveles críticos en lo referente a desestabilización de la seguridad interna y adverso clima social de Colombia. No obstante, el narcotráfico es parte integrante de la Agenda de Seguridad Nacional de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FF.AA.) y como tal es un problema cuyo tratamiento se integra a las órbitas de control e influencia de los organismos internacionales y a la agenda de seguridad norteamericana específicamente.

La marginal participación ecuatoriana en el sistema “cocaína”<sup>2</sup> (Páez, 1990), está sujeta a variaciones y modificaciones, las que están matizadas por las contingencias de la política interna de los distintos países involucrados y los requerimientos situacionales de la política internacional en relación con lo que se ha denominado “*guerra contra las drogas*” (Bagley, 1992).

Posición ecuatoriana, aparentemente, lejana frente al narcotráfico y a las problemáticas desprendidas: producción, procesamiento, exportación, violencia social y política, corrupción, lavado de dinero y consumo interno entre otras variables desprendidas de la actividad ilícita. Lejanía, que debe ser preservada, mediante la implementación de mecanismos expiatorios, los que están en función de magnificar el problema y el alineamiento frontal en la problemática, asumiendo tratados y convenios que ni los países en donde la narcoindustria es un problema gravitante lo han asumido (Bonilla, 1993).

Esta estrategia inflacionaria tiene como fin integrarse a los potenciales beneficios derivados del tratamiento preferencial en

exportaciones, ayuda y asesoría a las fuerzas de control, ayuda económica y más. Y sobre todo presentarse frente a la opinión internacional y a la nacional como un Estado atacado por problemas ajenos, y como tal ejercer el legítimo derecho de defensa frente al asedio: tanto de los agentes externos cuanto de los posibles focos internos que se vinculen a tal amenaza.

Al Ecuador se lo ha caracterizado en lo que va de esta década por una relativa tranquilidad y estabilidad de su sistema social y político, frente a la de sus vecinos. Sin embargo, esta caracterización parece carecer de elementos críticos que expliquen adecuadamente las particularidades, singularidades y continuidades con los países fronterizos. En lo que respecta al *ítem* narcotráfico, al país se lo presenta como una suerte de víctima atrapada entre las perversas ambiciones de los narcotraficantes peruanos y colombianos. En lo referente a la violencia política peruana y colombiana (principalmente), el tratamiento es similar y se la expresa como una confrontación maniquea, lucha entre el bien y el mal.

En este contexto, a pesar de la mayor o menor participación del Ecuador en el sistema coca-cocaína, el territorio ecuatoriano está vinculado al denominado “triángulo amazónico”. El triángulo amazónico o triángulo ECUPECO (Ecuador—Perú—Colombia) (Romero, N., 1990), el cual se refiere a una zona específica en el sistema de producción coca—cocaína (Páez, 1990). Sistema que se remite a un complejo económico que involucra al sistema financiero internacional y a mercados consumidores de Europa y EE.UU. Alfredo Castro Escudero (1997) señala que en el negocio del narcotráfico (específicamente cocaína) intervienen un número estimado entre 500 y un millón de personas en el mundo, la narcoindustria sería una de las empresas ilegales más exitosas del planeta, compitiendo, en ganancias, con el tráfico de armas e incluso con industrias legales como la petrolera (a nivel mundial).

Las puntas del triángulo corresponde a: Perú, básicamente especializado en la producción de hojas de coca y elaboración de pasta básica de cocaína, Colombia encargado de la refinación hasta obtener clorhidrato de cocaína y el Ecuador como entrada de precursores químicos necesarios para el procesamiento del alcaloide (Páez, 1990 y Romero, 1990). Entre otros productos: acetona, querosene, sosa cáustica, cemento, gasolina, ácido clorhídrico, etc. Armas, municiones y elementos de apoyo logístico en general son componentes importantes para mantener el sistema narcoproductivo.

Si bien desde los inicios de la década del noventa ésta caracterización ha variado en lo formal, debido a las intervenciones de los organismos de control de los distintos estados, tendientes a erradicar sembradíos de coca, atacar las vías de transporte, golpes a los carteles del narcotráfico, a sus sistemas de reproducción económica y las modificaciones que se han sucedido por estas acciones: la problemática continúa y su resolución a mediano y largo plazos es impredecible.

El “triángulo amazónico” se mantiene en sus vértices relativos, la zona del Putumayo representa el baricentro, punto neurálgico del sistema económico regional de la narcoindustria para Colombia, Perú y Ecuador. En lo fundamental esta analogía geométrica permanece y su importancia está en aumento, condicionada por los procesos sociales y políticos asociados al narcotráfico, procesos políticos de los tres países, las estrategias unilaterales y multilaterales en el control del tráfico de narcóticos, y la prioridad que los Estados Unidos (EE.UU.) dan a la zona.<sup>3</sup>

En la actualidad, para las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el control de la zona es prioritario y se prevé, que en el futuro cercano, la importancia de esta se incremente considerablemente. Debido a que la institución armada resignifica los enemigos externos e internos y sus funciones inherentes a la seguridad na-

cional. Proceso desprendido de los acuerdos de límites alcanzados entre Ecuador y Perú, los mismos que delimitaron la frontera común y redujeron las probabilidades de enfrentamiento militar entre los dos estados y modifica las prioridades de su agenda diplomática.

Para Perú, la zona limítrofe al Putumayo colombiano se integra a su política de guerra contra las drogas. Proceso, aparentemente exitoso que persigue reducir a cero los cultivos de coca hasta el año 2010. Los éxitos militares alcanzados en contra de los grupos contestatarios (SL y MRTA)<sup>4</sup> y los acuerdos de límites alcanzados con Ecuador reorienta las capacidades de las fuerzas de control y seguridad peruanas a zonas consideradas vulnerables para su seguridad interna.

Para Colombia la intervención en la zona se integra a su estrategia global de paz, la cual vincula la problemática del narcotráfico y la desmovilización de guerrilla y paramilitares ([www.cajpe.org.pe/narco.htm](http://www.cajpe.org.pe/narco.htm)). Escenario de alta conflictividad debido a la presencia de actores altamente violentistas, los que en su dinámica e interacción vinculan a extensos sectores rurales, redes sociales e intereses económicos de carácter internacional.

En el caso de Colombia la extensión de cultivos de coca se han incrementado, Perú ha logrado reducir los mismos, las vías de salida de la pasta básica de cocaína (PBC) y clorhidrato de cocaína (cocaína) se han modificado, las vías de abastecimiento de precursores han variado, para el caso de la zona del Putumayo y la zona de frontera amazónica de los tres países (Colombia, Ecuador y Perú), no obstante, la dinámica narcoproductiva mantiene su importancia superlativa. En este escenario, los problemas derivados del narcotráfico atraviesan todos los espacios sociales, políticos y económicos, acentuados por las relaciones de violencia social y política colombiana.

La narcoindustria trasciende las fronteras nacionales de los países de la región andina, afectando y sirviéndose de los grupos humanos que allí se asientan, para lo cual se utilizan instrumentos de diversa índole (legítimos o ilegítimos), integrados al quehacer político, económico, cultural y religioso, de los contextos determinados. La producción y procesamiento de sustancias ilícitas confluye con otros procesos (guerrilla y contrainsurgencia), diseñando un intrincado panorama de problemas políticos (Uprimmy y Vargas, 1990). El resultado más evidente de este enfrentamiento es la radicalización de la violencia, creando una trama social que de manera soterrada o de forma abierta aliena los derechos de una significativa población.

La conflictividad que se manifiesta como resultado de esta dinámica tiene en Ecuador su mayor expresión en la franja fronteriza colombo—ecuatoriana (provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos) y especialmente la zona del Putumayo (Ecuador), lugar convergente de las dinámicas de la guerra interna colombiana y los efectos centrífugos desprendidos del sistema económico regional (con características hemisféricas) de la narcoindustria.

Nuevos escenarios de conflicto son las provincias de Esmeraldas y Carchi (Ecuador) y el departamento de Nariño (Colombia). El conflicto entre paramilitares (grupos de autodefensa campesina), Estado y guerrilla amenaza expandirse hacia el sur de Colombia: regiones con bajas condiciones sanitarias y de acceso a servicios. Y el Putumayo, específica y especialmente, sería uno de los objetivos estratégicos a ser “conquistados” para detener a la guerrilla. Estrategias bélicas que afectarían al territorio ecuatoriano: Estado, fuerzas de seguridad y población.

Entre otros datos se tiene que, para abril de 1997; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían 64 frentes guerrilleros en operación<sup>5</sup>. Por su parte el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contaba con 30 frentes activos. Los paramilitares o grupos de autodefensa movilizaron recursos (eco-

nómicos y humanos) igualmente importantes. La violencia abarca 622 municipios, más de la mitad de los existentes en Colombia, con una capacidad de tecnología militar altamente especializada y sofisticada. En esta trama de conflicto es prioridad para el Ejército colombiano y para las autodefensas “reconquistar” la zona del Putumayo, donde los guerrilleros han consolidado posiciones económicas y políticas. (Violencia Política, Revista Semana, Edición # 778, Bogotá, abril, 1997)

La dinámica presentada, grafica una situación de alta conflictividad social y política debido a los condicionantes axiológicos y económicos, que rodean a la narcoindustria, a la seguridad interna y externa de los estados, y una amenaza latente al sistema internacional vigente después del fin de la Guerra Fría. En esta perspectiva los enfoques que se hacen de esta dinámica han privilegiado los análisis desde las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales. En tal sentido el trabajo que se presenta abarca la problemática desde la percepción de la población involucrada y más que nada intenta plantear interrogantes que deben ser contestadas desde la participación integral de los actores involucrados.

Las posibles soluciones e intervenciones en la zona, superan los esfuerzos del solo diagnóstico, o la ejecución de políticas represivas y/o policiales. En ambos lados de la frontera habitan campesinos e indígenas quienes mantienen, similitudes lingüísticas, relaciones familiares, de comercio, visiones regionales y culturales compartidas y están atrampados entre los fuegos cruzados de paramilitares, Estado y guerrilla.

En este trabajo se pretende describir la inserción del Ecuador en la narcoindustria a partir de indicadores, que refieren a las acciones en contra del narcotráfico ejercidas por los países andinos, y cómo esta macrodinámica construye los imaginarios de la zona de frontera amazónica, específicamente la zona del Putumayo. La información que se presenta en la elaboración se concentra en datos cualitativos recolectados a los distintos actores y agentes sociales que interactúan en la región y cómo estos



se articulan al sistema económico regional de la narcoindustria y a las distintas manifestaciones de conflicto y violencia que se desarrollan en el lugar.

En la medida de los datos disponibles, se intenta describir el imaginario de la población, el cual no es prioritario en otros análisis. Población, que independientemente de su grado de articulación con las distintas órbitas de conflicto en la zona, se encuentra atrapada en el fuego cruzado, producido entre los distintos frentes conflictivos que pugnan por el control económico, político y simbólico de la zona. Otras ópticas describen un gran continente conflictivo, en el cual el contenido es humano y no está concentrado solamente en el territorio colombiano, sino que éste produce efectos no controlados en el Ecuador, ya sea por problemas de: desplazamiento y/o refugio, imperativos de política internacional que construyen las necesidades de los organismos de interdicción ecuatoriana, efecto multiplicador económico y fundamentalmente imaginarios desprendidos del sistema de violencia integrado activamente a la frontera común.

La zona de estudio se encuentra localizada: entre la ribera sur del río Putumayo y la ribera norte del río San Miguel, zona que está comprendida en el cantón Putumayo, junto a las áreas de interacción del noroccidente, cantón Nueva Loja y el sur del municipio de Puerto Asís (Departamento del Putumayo) en el lado colombiano. Esta zona de la amazonia ecuatoriana y colombiana forma parte de la cuenca hidrográfica de los ríos Putumayo y San Miguel (Diagnóstico Regional, 1989). La ecología corresponde a la foresta húmeda tropical (ver Diagnóstico de la provincia del Napo: Tomo I, Tomo III, 1988).

La población que se asienta en la zona son individuos indígenas y campesinos-colonos. En el caso de los campesinos no adscritos como indígenas son migrantes, quienes se asentaron activamente en la zona a lo largo de distintos momentos en el transcurso del siglo. En el caso de los indígenas las etnias presentes son sionas, cofanes y quichuas orientales. Los quichuas orientales en Colombia son identificados como inganos.

Los datos aquí presentados son el resultado de una serie de acercamientos con los pobladores del sector. Esta información ha sido recolectada principalmente en las poblaciones de Lago Agrio, Palma Roja, Puerto El Carmen del Putumayo, La Punta (Ecuador); y Puerto Ospina, Puerto Asís, Orito, La Hormiga, La Dorada, San Miguel (Colombia) en el período de abril a mayo de 1992, enero y mayo de 1993, abril y septiembre de 1995, agosto y diciembre de 1997 y enero y febrero de 1998 con una serie de personajes representativos, que fungieron de informantes calificados<sup>6</sup>, información que se ha organizado, buscando un empare y relación lógica con los acontecimientos registrados en otras instancias que no es la oralidad.

#### Notas:

- 1 Neologismo utilizado para designar los procesos en que la violencia se inserta drásticamente en los procesos sociales, tomando magnitudes patológicas (Páez, A., 1990); término utilizado en este sentido por la mayoría de autores que tratan e indagan acerca de la violencia.
- 2 El complejo productivo coca cocaína se refiere a todo el proceso de la narcoindustria que va desde la siembra de la hoja de coca, la cosecha, refinación y distribución del clorhidrato de cocaína.
- 3 Orientada a la erradicación de extensas zonas de cultivo de hojas de coca (cocales), el desmantelamiento de laboratorios, desarticulación de las bases sociales involucradas en el sistema coca-cocaína y la desmovilización de grupos armados, los que se integran al proceso de la narcoindustria de manera operativa.
- 4 El gobierno de Fujimori desarticuló, en 1992, la cúpula de Sendero Luminoso con el arresto de Abimael Guzmán (Presidente Gonzalo); en 1996 el MRTA asalta la residencia del Embajador del Japón en Lima, varios diplomáticos y funcionarios de Estado son tomados como rehenes, Fujimori responde con un operativo que rescata a todos los cautivos y elimina físicamente a todos los subversivos involucrados, una de las bajas del operativo es Julio Serpa Cartollini el número uno del MRTA; julio de 1999 es detenido el Comandante Feliciano el segundo de Sendero Luminoso.
- 5 De estos frentes 22 tendrían como objetivo sitiar Bogotá. (Revista Semana, Edición 778, Bogotá, abril 1997) o ([www.w/semana.com/](http://www.w/semana.com/)).
- 6 La representatividad de estos informantes calificados, tuvo como criterio: el papel que desempeñan en la comunidad los individuos específicos, ya sea como líderes de las organizaciones de campesinos o indígenas, o por ser hombres o mujeres que por su edad han estado presentes en la mayoría de sucesos que han modificado la zona o por la plena identificación de los informantes en el complejo económico regional de la narcoindustria.

BUFON:

¡Atento Amo!

*No enseñes todo lo que tienes ni digas todo cuanto sepas,  
prestando menos de lo que poseas, usa el caballo y no las piernas,  
no creas todo lo que dicen, tampoco todo lo que veas, si permaneces en tu  
casa no arriesgas todo lo que llevas; déjate de bebidas y de putas y tendrás más  
de veinte por veinte.*

*(William Shakespeare, El Rey Lear, Oveja Negra, Bogotá, 1983, P:151)*

## 2. EL PUTUMAYO

El proceso de colonización en esta zona ha condicionado y dinamizado el actual perfil sociocultural de la población. El mismo que se remonta hacia fines del siglo pasado y principios del presente, en donde grupos de colombianos llegaron a las riberas del río Putumayo a trabajar en la explotación del caucho. Estas fueron épocas, cuando las empresas transnacionales emplearon gran cantidad de mano obra para la extracción de este producto. Algunos de los padres y abuelos de los informantes, llegaron por estas épocas entre 1900 y fines de 1920.

La industria del caucho y la presencia de agentes vinculados a la misma transformaron la economía y las relaciones sociales de la zona, la que recibió una masa de individuos colombianos, peruanos y ecuatorianos en busca de trabajo y altas expectativas de lucro (Cassament, 1988; Rivera, 1987). Otro grupo se asienta en la zona del medio Putumayo (colombiano) a principios de los años treinta después de la guerra entre Perú y Colombia por el trapecio de Leticia en 1933 (Comisión Andina de Juristas, 1993; Comisión de Superación de la Violencia, 1992).

Al declinar la demanda del caucho amazónico en el mercado mundial a partir de mediados de la década de 1900, este de-

ja de ser el eje principal de la economía monetizada (Cassament, 1988; Rivera, 1987); produciéndose una colonización temporal, que implicó una suerte de “vaciamiento” social de la región por parte de los colonos, que regresan a las zonas centrales y abandonan la periferie amazónica. Sin embargo, esa colonización temporal deja lista una infraestructura de comunicaciones y una red de poblados que son funcionalizados posteriormente para otros momentos de penetración estatal, sobre la base de la explotación de nuevos recursos y del desarrollo de políticas de colonización diseñadas desde el Estado (Molano, 1987).

Puerto Asís (Colombia) es fundado en 1912, como lugar de avanzada de frontera, centro misionero católico (capuchino) y como punto de colonización (Comisión Andina de Juristas, 1993). En 1924, Puerto Asís se convirtió en base militar del Ejército colombiano, con un destacamento que contó con aproximadamente 1000 hombres, factor importante en la ulterior colonización y poblamiento de la zona (Corsetti, 1987), que activó la rotación demográfica, tanto en el lado colombiano como en el ecuatoriano:

Por ejemplo, uno de los informantes ecuatorianos afirmó que su padre, de origen colombiano, luchó en la guerra con el Perú, y que su familia está en el Putumayo ecuatoriano desde principios de los años treinta; éste mantiene relaciones laborales, de parentesco, con individuos residentes en el Departamento de Nariño y Putumayo (Colombia) y con las provincias de Napo, Sucumbíos, Carchi y Pichincha (Ecuador).

La guerra con el Perú (1933) acarreó, el comienzo de una vinculación más estable entre la nación colombiana y la zona, en el sentido geográfico, económico y político administrativo. El Gobierno colombiano dio inicio a una prolongada colonización que tuvo como fin fortalecer la frontera (Jaramillo et. al. 1989). Desde entonces comenzaron a formarse nucleamientos pobla-

cionales, produciéndose paulatinamente olas migratorias de colonos que ocuparon estas tierras, denominadas “baldías”.

El comercio entre Colombia, Perú y Brasil se ve incrementado por la facilidad de la transportación fluvial, esto contribuyó a una bonanza en la zona, lo que produjo la creación de “pequeños imperios” exportadores de caucho (Cassament, 1988). Las compañías caucheras estaban directamente relacionadas con los mercados internacionales a través de las distintas vías fluviales que desembocan al Amazonas y por este al Atlántico y a los puertos de ultramar. El referente de civilización de la población —aquella que se encontraba en los niveles más altos de la pirámide de mando y control— era Europa, no los centros políticos que se hallaban en los Andes o en el Pacífico (ver: Cabodevilla, 1994, 1996).

El grupo humano inserto en la extracción del caucho (colonos, mercenarios, militares, indios, misioneros, aventureros, científicos, empresarios-industriales, entre otros) conformaron las bases sociales, políticas y jurídicas que, posteriormente a la segunda década del siglo XX y a lo largo del siglo, han condicionado para la determinación y sanción positiva de las actuales fronteras nacionales (líneas imaginarias) entre Ecuador, Colombia y Perú.<sup>1</sup> No obstante, en el mismo proceso se prefigura una red cultural, social, económica y política intra y extra regional que tornan difusas o relativas la existencia de dichas fronteras nacionales políticamente constituidas e internacionalmente reconocidas. Relaciones que lastimosamente no son elucidadas adecuadamente por los agentes y actores con capacidad de decisión que intervienen en la amazonia.

De esta forma la zona del Putumayo, en lo referente a su composición humana, cambió radicalmente. La presencia de estas compañías caucheras con características de enclave ocasionó que, por un lado, atrajo a familias que se especializaron en la ex-

tracción y producción de la resina provenientes de zonas amazónicas y de la cordillera quienes ocuparon los niveles más altos de la pirámide social; por otro lado la inclusión, desplazamiento, trasplante de poblaciones indígenas en condiciones casi esclavitud (Cassament, 1988), quienes, en conjunto, movían la maquinaria extractivista, la que proporcionó el impulso fundamental para la industria mundial del momento.

El desarrollo, auge y caída de la industria del caucho significó un corte histórico, pues, representó los primeros encuentros reales (metodológicamente hablando en lo que corresponde a los inicios del siglo XX) con los indígenas de la zona, quienes rápidamente son incluidos en este trabajo y explotados en extremo. Posteriormente estos, los indígenas, optaron por retirarse “*monte adentro*” (selva adentro) y demarcar su frontera con los “*blancos*” (Testimonio trabajo de campo, Pañacocha, 1997), ocupando nuevas zonas de la geografía amazónica que reconfigurarían sus territorialidades, estatutos de adscripción y autoadscripción étnica, vinculación con las redes monetizadas y recomposición de sus referentes identitarios.<sup>2</sup> Situaciones que se expresaron en la reducción de la población a niveles mínimos. La caída del precio internacional del caucho descalabró la economía de la zona, las empresas caucheras desaparecieron y de igual forma el soporte social y político que se reprodujo a su interior.

Para muchos de aquellos individuos, el campo de acción de las empresas estuvo en territorio ecuatoriano entre Napo y el Putumayo. Es entonces, que estos antiguos trabajadores caucheros buscaron otras alternativas de reproducción sociocultural, política, y económica para su supervivencia: Mientras un grupo abandonó la región emigrando nuevamente a diversos puntos de la geografía colombiana o ecuatoriana, otros se fueron posesionando poco a poco de tierras de la riberas del Putumayo y del San Miguel, empezando una lenta colonización en la zona.

Las vías de intercambio comercial abarcaban toda la red fluvial del Putumayo hasta su desembocadura en el Amazonas, el río Aguarico hasta su desembocadura en el Napo, el Napo hasta el Amazonas, vías fluviales que representaban un tramado de comunicación que permitía la dinámica comercial, social y política de la zona. Por vía terrestre los senderos y trochas existentes entre el Putumayo y Aguarico. Red comunicacional que se desmonta a partir de la caída del mercado cauchero y posteriormente con la guerra Colombia—Perú (1936) y la guerra Perú—Ecuador (1941), en el último caso obligó a comerciantes y terratenientes de nacionalidad colombiana, asentados sobre el bajo Napo y bajo Aguarico, a ubicarse definitivamente en lo que hoy es territorio colombiano (Pto. Asís, Pto. Ospina), no obstante, la red fluvial, aunque en menor escala, continuó como eje fundamental de intercambios de bienes y servicios, sociales y vitales e influencia simbólica a nivel zonal.

En este circuito económico lo que hoy es el territorio ecuatoriano se integraba a esta dinámica abasteciendo de productos agrícolas: arroz principalmente, y carne. Además de contribuir con el tráfico de mano de obra, es decir indios que eran capturados en lugares tan lejanos como el alto Payamino, quienes eran transportados en condiciones inhumanas para ser negociados en los mercados adonde acudían los barones del caucho para coleccionar más personal necesario para el funcionamiento de la empresa. Los indios capturados, sin derecho de inventario, se homogeneizaron lingüísticamente en un proceso perverso de reconfiguración identitaria.<sup>3</sup>

En el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, se fundaron poblados que por años quedaron inadvertidos por las autoridades ecuatorianas, en su mayoría formados por colombianos. Los respectivos flujos y reflujos migratorios, en el lado colombiano históricamente han girado en torno de las “bonanzas” de producción, como la quina, caucho, petróleo, coca, pro-

cesos que de hecho están influyendo a la parte ecuatoriana en aspectos de su movilidad económica, social y política. La lógica de la explotación cauchera resultó apta para la conformación de poblaciones al límite de la legalidad, que posteriormente se refuncionalizarán en la narcoindustria. Otra etapa migratoria a la región de ciudadanos colombianos, comienza a producirse en los últimos 40 años; provocada principalmente por la violencia que se inicia en ese país, situación que se vuelve mucho más comprometida en estos últimos 20 años.

En la actualidad, entre la zona de Lago Agrio y toda la ribera del Putumayo existe un alto número de colombianos indocumentados (Comisión Andina de Juristas, 1993; Informe Misión, 1992). Estos han pasado la frontera en su mayoría por las arbitrariedades de que son objeto por parte de militares, y sus antagónicos (narcos y guerrilla), esto a partir de 1984 aproximadamente, la que se vuelve frontal esa guerra no declarada.

Durante los ochentas, surgen los empresarios del comercio de la cocaína como una nueva burguesía pujante, que logra reconocimiento económico y social relativo, pero que es desplazada como decisor o partícipe de la decisión política. Análisis como los de Murillo (et. al. 1991) explican cómo estos grupos (regionalmente situados) se activan políticamente, intentando penetrar institucionalmente en el sistema político (inicialmente) y luego trazando una estrategia parainstitucional, con lo que integran nuevo factor centrífugo con un tremendo potencial expansivo, en razón de los recursos que controlan, su expansión como propietarios tradicionales y el encuentro que tienen con los grupos armados de izquierda que operan en zonas de alta conflictividad agraria (Páez, 11/1991:10-11).

El Ejército colombiano como filosofía de su estrategia de seguridad nacional tiene una de las visiones anticomunistas más rígidas, su misión es contener las luchas sociales que se han ex-



presado de manera contestataria en las últimas cuatro décadas a esto se une la presencia de la narcoindustria, chocando tres grupos de actores políticos, pues no hay que olvidar al grupo elitario al cual están legitimando las instancias de fuerza estatal (Páez, 1990; Villamizar, 1991).

Punto importantísimo de la colonización en los últimos 20 años coincide con el inicio de la “bonanza” petrolera en Ecuador, lo que lleva a la región nuevos colonos ecuatorianos, quienes por la perspectiva de cambio y la crisis económica y ecológica particular de los lugares de origen deciden intentar experiencias de colonización. A partir de 1972, la migración a la provincia del Napo (hoy dividida en Sucumbíos, Napo y Francisco de Orellana) toma dimensiones inesperadas por la posibilidad de percibir salarios superiores a la media nacional.

Existen otros factores de movilidad social que se suman a este auge de colonización pionera como son: la escasez de la tierra resultado de la emergencia de minifundios, a partir de la modernización de la hacienda (migrantes de Pichincha, Bolívar, Tungurahua y Chimborazo principalmente); las sequías ocurridas en las provincias de Manabí, Loja, Guayas en la década del 60 al 70; y, una política de Estado orientada a incluir aquellas tierras al sistema económico nacional, con el consiguiente ejercicio de soberanía por parte de los organismos estatales.

La migración de colombianos al Ecuador está sancionada positivamente a partir de los distintos acuerdos binacionales, relaciones económicas entre los países y fundamentalmente por las relaciones inter e intrasociales entre las poblaciones asentadas a lo largo de la frontera común, las que son de carácter: productivo, cultural, parental, laboral y otros. fuertemente integradas a través de lazos simbólicos.

Se pueden señalar algunos momentos migratorios de colombianos hacia el Ecuador hasta antes de 1993 metodológicamente identificables en el tiempo:

i) El poblamiento de la amazonia ecuatoriana a partir del conflicto con el Perú de 1941. Conflicto inscrito en un reordenamiento de las fronteras de los estados nacionales. Pues, la potencialidad económica de la región era ya muy conocida y se refuncionalizaría en momentos dados. Estos imperativos se adaptaron a los requerimientos geopolíticos del momento. El resultado del conflicto es el poblamiento y creación de fronteras vivas tímidamente realizadas a partir de 1941.

ii) Importante momento migratorio es aquel que coincide con el periodo conocido en Colombia como el de “la violencia” (Informe Misión, 1992). Violencia política, desarrollada principalmente en el centro colombiano, que provocó la muerte de aproximadamente 200 mil víctimas e indujo a la movilización y desplazamiento poblacional a otras regiones. La zona del Putumayo recibió a un conjunto de migrantes pauperizados, quienes buscaban tierras para integrarlas a la agricultura, por la imposibilidad para acceder a estas en sus lugares de origen debido a la concentración de las mismas en un reducido grupo poblacional; estos migrantes provenían de sectores urbanos y su periferia (Comisión Andina de Juristas, 1993).

iii) La tercera asociada con la explotación petrolera de la década del setenta en el oriente ecuatoriano, en lo que hoy es la provincia de Sucumbíos, que constituyó la creación de nuevas plazas de trabajo y la utilización de mano de obra calificada colombiana. Pues, en la zona colombiana existían trabajadores con experiencia petrolera pertenecientes a la Compañía Texaco que operaba en el Departamento del Putumayo. La dinámica de colonización implementada a partir de la década del cuarenta tomará nuevo ímpetu desde los sesentas con la exploración petrolera; y

desde los setentas con la explotación del hidrocarburo (estructuras petroleras de importancia se descubren en 1963 en Orito –Colombia— y en 1967 en Lago Agrio –Ecuador—, TCA, 1989). En el Putumayo se identifica la presencia de compañías petroleras desde inicio de la década del cincuenta (Chávez, 1994).

iv) A partir de 1984 como efecto de la violencia política resultado del control de extensas zonas del Putumayo por parte de narcotraficantes la población colombiana migra hacia territorio ecuatoriano, en donde la lógica económica y relaciones sociales y culturales se han subordinado a la racionalidad del negocio de la coca (Informe Misión, 1992).

A partir de la década del noventa la guerrilla asume mayores espacios de control en la región, desplaza el poder formal de los narcotraficantes, imponiendo directrices de control social y político. Influencia que va en ascenso desde la segunda mitad de la década del noventa. La guerrilla toma el control de la zona, los requerimientos de la narcoindustria hacen que se incrementen las extensiones de los cocales, para lo cual se requiere mano de obra, lo que provoca un nuevo reordenamiento poblacional y la inversión de la migración pues esta ya no es mayoritariamente de norte a sur.

## **2.1. El Colono-campesino de la amazonia norte ecuatoriana**

Las actividades extractivas en la foresta húmeda tropical ecuatoriana ha implicado el traslado de grupos humanos, diversos y heterogéneos, procedentes de zonas deprimidas de la Sierra y la Costa ecuatoriana. Muchos de estos migrantes con experiencia previa de colonización en zonas de foresta tropical e individuos procedentes de países limítrofes asentados específicamente en las franjas fronterizas con presencia más antigua que

la de ciudadanos ecuatorianos (Chávez, 1994; Corsetti, 1987), quienes ejercieron su derecho a colonizar las tierras baldías (Barsky, 1988; Ley de Reforma Agraria, 1991). Estos juntamente con las empresas de carácter extractivo, diseñaron un nuevo espacio en donde se compitió y compite por recursos con las poblaciones étnicas amazónicas.

El espectro socioeconómico de los “colonos” conjugada con la debilidad de los suelos de la mayor parte de la amazonia, implantó una lógica de producción que tenía como principal elemento la transformación del bosque tropical y la competencia por territorio con los grupos locales (Ley de Reforma Agraria, 1991), esto contribuyó al desplazamiento de los grupos étnicos en una primera fase del contacto (Cabodevilla, 1994, 1996, 1998).

La característica principal de la economía de la amazonia ecuatoriana es de enclave, en donde el ápice de la pirámide se encuentra fuera de la región y hasta supera las fronteras nacionales. La interrelación de los diversos grupos de control y la base socioeconómica se da por medio de patrones y/o caciques, zonal y localmente localizados que ejercen el papel de intermediarios políticos y económicos (muchas veces este papel es asumido por el Estado).

No obstante, existe una diferencia entre las poblaciones de campesinos y/o colonos y las poblaciones étnicas, caracterizada por los distintos perfiles simbólicos y la articulación a redes de apoyo social diverso.

- En el caso de las poblaciones étnicas, las redes de apoyo se encuentran insertas en grupos nacionales, internacionales y transnacionales de carácter conservacionista, ambientalista, ecologista, así también cuentan con el apoyo

económico de organismos internacionales, ONG's y otras organizaciones.

- Los grupos de colonos y/o campesinos, mantienen una imagen deteriorada a la vista de las empresas ecologistas y conservacionistas, por considerarlos afuncionales e irruptores en un medio ecológico que no les pertenece. Sin embargo, muchos grupos han emprendido un rápido proceso de “amazonización”, alzándose como actores dentro de una nueva geografía amazónica.

En las actuales circunstancias estas poblaciones pugnan por una mayor participación política y económica de la región. Sin embargo, este incremento de su participación y protagonismo, no implica su independencia o acumulación de poder. Esta participación se da en niveles de pequeña escala, los que de ninguna manera acarrearán un cambio en las condiciones estructurales, sino que más bien legitiman las condiciones de disimetría social o desigualdad estructural dentro del espectro socio-económico nacional y dentro de la segmentación social de las heterogéneas poblaciones amazónicas.

La participación política ve limitada en el caso de los colonos campesinos por los bajos niveles de organización social y política que ellos poseen, los que giran en torno a su ética de autopromoción y esfuerzo individual. De esta manera se personalizan los conflictos y se asumen como error individual la carencia de recursos o la inaccesibilidad a ellos (simbólicos, políticos, económicos), por lo que las instituciones políticas y administrativas son raramente culpadas.

Los que realmente se consolidan son pequeños grupos de poder vinculados a organizaciones políticas, a organismos internacionales de ayuda, quienes rápidamente se convierten en inter-

locutores entre las poblaciones locales y sus demandas, no obstante, su real representación siempre se encuentra cuestionada.

La inserción de los colonos de primera generación en el contexto amazónico es total. Existe una segunda y tercera generaciones (y en algunos casos hasta cuarta generación) de individuos nacidos en la zona mencionada. Para estos la amazonia está internalizada en todos los niveles de socialización (educación formal y aquella dada en sus núcleos familiares, culturales y sociales de reproducción), sus referentes simbólicos giran en torno a la dinámica.

Esta población ha superado el estadio de individuos pioneros que no mantenían relaciones sociales profundas con su medio, el proceso de conformación, reproducción y fisión familiar se ha dado en la zona por dos o tres generaciones con las implicaciones que se desprenden del proceso: construcciones singulares y particulares en el ordenamiento de su organización familiar, social y política, a pesar de la heterogeneidad de los migrantes (provenientes de distintas provincias, pisos ecológicos, heterogeneidad dialectal, étnica, religiosa, fenotípica, entre otras).

Construcción de signos eficientes que les integra al entorno, desarrollo de un fenotipo característico de la zona, integración de diversos dialectos y expresiones idiomáticas, préstamos lingüísticos (quichua, cofán secoya, siona, colombianismos, anglicismos, etc.) que caracterizan al habla, con el consiguiente desarrollo de cinéticas y proxémicas propias; así como desarrollo de poéticas propias de la zona que integran las esperanzas y desesperanzas y la inevitable descripción del medio geográfico en el cual se están desarrollando.

En cuanto a la poética, se puede mencionar el sinnúmero de composiciones musicales que describen a la zona: como ejemplo evidente son la música y letras de las canciones de By-

ron Caicedo, cantante y compositor de música que describe la zona, habitantes, comportamiento; en suma describe una forma de ver el entorno local, nacional e internacional desde la perspectiva del habitante amazónico;<sup>4</sup> o el éxito de los “vallenatos”, los cuales alegremente describen determinadas formas de socialización violenta.

El gusto por estas dos formas musicales atraviesa el carácter étnico de los grupos humanos: igualmente oyen campesinos o indígenas (quichuas, secoyas, sionas, shuar, huaorani). Esta convergencia de gustos, más halla del éxito comercial de los ritmos mencionados, expresa elementos socioculturalmente comunes e integrados para estas poblaciones, los que superan los estatutos de procesos de cambio lingüísticos, cambio cultural o a formas de adscripción y autoadscripción.

Homologías, analogías, paralelismos, convergencias, brechas y diferencias culturales entre indios y campesinos es un punto a ser analizado con mayor profundidad y rigor académico y no solamente a partir de las diferencias étnicas, los niveles de vinculación a los circuitos monetizados o las diferentes formas productivas, no obstante, para el caso que nos ocupa, la población de la amazonia norte integra una serie de elementos que los identifica y que indica un tramado social que integra la variable étnica y no la excluye.

Es necesario recalcar que existen obvias diferencias socioculturales entre las poblaciones indias y las no indias, e incluso entre estas últimas se encuentran particularismos e incluso singularismos, no obstante, para el caso que nos ocupa se debe señalar que existen continuidades sociales que se han sancionado culturalmente en un mismo entorno socioambiental.

**Notas:**

- 1 La célebre casa Arana tuvo en la zona del sur del Putumayo su campo de acción privilegiado. (Trujillo, J. 1992). En la relación que Cassament (1988) hace al Parlamento inglés en 1911 dice que el poder alcanzado en la zona por la casa Arana no solo se debió a las dimensiones económicas de la empresa cauchera, sino a una deliberada intención del Gobierno peruano para replegar a pobladores y empresas colombianas (caucheras) a la ribera norte de este río, en la mencionada relación se asume que la ribera sur del Putumayo estuvo ocupada por colombianos y que la función, entre otras, de los Arana era el de recuperar e integrar de hecho aquel territorio a Perú.
- 2 La referencia a las poblaciones amazónicas son difusas y parciales sujetas a mal interpretaciones, alteración o arbitrariedades en lo referente a la adscripción, filiación lingüística, ubicación de las mismas (ver: Carbajal, 1992). Específicamente desde finales del siglo XIX y principios del XX las industrias extractivistas reconfiguraron las relaciones interétnicas, modificando las formas de autoadscripción e incluso fueron las que, aparentemente, precipitaron la desaparición de grupos poblacionales nativos. (Se encuentran referencias sobre este proceso en Cabodevilla, 1994, 1996 y 1998, a pesar de su sesgo misional el cual tiene que ser discriminado).
- 3 “La captación quichua de espacios no tradicionales en la provincia del Napo se debe a dos factores principales: 1.) a la práctica de enganche a la leva forzada, que caracterizó épocas pasadas como la del caucho, en la que explotadores de esta resina, por su cuenta o a través de contratistas, llevaron a grupos de nativos de la zona de Tena—Archidona y de Loreto—Avila—Payamino hacia el Napo aguas abajo o hacia la zona del Putumayo—San Miguel.” (Diagnóstico de la provincia de Napo, Tomo II, 1988: 103-104).
- 4 En la poética de estas canciones se evidencia el ambiente campesino del migrante amazónico y las urbes se presentan como un elemento alejado del horizonte simbólico del habitante común.



*[...]Nos hemos encontrado de nuevo. En la vuelta de la marea.  
El huracán vuelve pero la marea ha cambiado.  
(J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, Tomo II,  
Las dos torres, Minotauro, Barcelona, 1997, p: 118)*

### **3. COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR ASPECTOS RELEVANTES**

La situación ecuatoriana contrasta con la de Colombia y Perú, países que se enfrentan a luchas internas producidas a través de movimientos que se los califica de subversivos y/o guerrilleros, que tuvieron su base en sectores agrarios, tanto en el Perú (Páez, A., 1990) como en Colombia (Molano, A., 1986). Estos movimientos encontraron nuevas dinámicas con el apareamiento de la narcoindustria y el ejercicio del concepto de seguridad interna de sus propios estados (Páez, A., 11/1991).

Grupos en constante fricción que afectan el funcionamiento y dinámica social de la región e influyen en el comportamiento político del país. En esta sección se identifican los aspectos más relevantes de Ecuador, Perú y Colombia en lo referente a su funcionamiento político y económico general, sin llegar a profundizaciones las referencias que se presentan el contexto la región inmediata en la que, el Ecuador está inserto.

Estas puntualizaciones proporcionan materiales para diferenciar los distintos procesos políticos y en específico como estos están vinculados a las dinámicas de conflicto y violencia asociados con la irrupción de grupos armados de carácter contestatario, ideológicamente alineados con las diversas corrientes de izquierdas y la respuesta dada por los respectivos estados.

### **3.1. Colombia**

Las guerrillas colombianas son el resultado de un proceso histórico estructural en donde se han generado diversos grupos de contestación armada, que atienden a proyectos políticos y reivindicativos propios. De esta forma Pizarro (1990) no habla de la guerrilla colombiana, sino de las “guerrillas colombianas”, y los clasifica en tres grupos: La guerrilla societal (busca un espacio de reconocimiento ante y en la sociedad), guerrilla partisana (como el brazo armado de un grupo político) y guerrilla militar (la que pretende la toma del poder). Al parecer, en Colombia los movimientos armados como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional) y EPL (Ejército Popular de Liberación) no son simples movimientos que contestan las políticas estatales, sino que ellos pretenden la toma del poder y ligan de una u otra manera las características de los tres tipos de guerrilla.

La violencia colombiana y el apareamiento de grupos armados data de los inicios de la década del cincuenta. Estos grupos estuvieron ideológicamente adscritos a corrientes liberales. Ellos empiezan su accionar en zonas como Tolima, los que paulatinamente transformaron su perfil ideológico hacia el comunismo, proceso de cambio que alcanza hasta el fin de los años sesentas. Los mismos que dieron origen a las FARC.

El foquismo y el guevarismo impactaron durante los setentas mediante diversos grupos (ELN-EPL), los cuales tienen presencia importante hasta nuestros días; durante los setentas las condiciones de exclusión orillan a sectores radicales de la ANAPO (Acción Nacionalista Popular) a formar con disidentes de las FARC y el grupo M-19. Otro componente de la violencia es aquel asociado a las luchas étnicas de los indios Paese, la cual lleva a la formación del “Quintín Lame”. Factor común del origen de estos grupos armados son las condiciones de exclusión espacial, polí-

tica, social y económica vinculados a las escisiones políticas y sociales de los sectores agrarios en función de la dinámica política local y micro-local, las mismas que forman parte de procesos más amplios, pero que no pueden ser explicados en relación a una macrodinámica (Pizarro, 1990; Páez A., 11/1991 y 1991).

A fines de las décadas del ochenta y noventa el M-19 se desmoviliza y se integra a la lucha política legal. Los grupos armados de izquierda que funcionaron en la clandestinidad, aparentemente, entraron en un proceso de “deslegitimización”, la acción política de los mismos sufrió un desgaste y su perfil se asociaba con grupos bandolerizados, no obstante esta situación, en la práctica estos incrementaron poder, capacidad de acción y fortaleza económica, demostrada en las conversaciones de paz.

Un hecho peculiar, en la dinámica política colombiana fue la vinculación de Ernesto Samper con dineros del narcotráfico para financiar parte de la campaña electoral que le llevó a la Presidencia de Colombia. Hecho que produjo escándalo de características internacionales, la destitución de Botero, ministro de Defensa y en su momento responsable de la campaña electoral. Por otro lado los EE.UU. suspendieron de por vida la visa a Ernesto Samper. Ello condujo a que en la población aparezca un sentimiento de humillación nacional.

Con el “Proceso de Paz” iniciado a principios del 99 en Colombia, se sanciona positivamente el estatuto de guerrilla militar, existiendo un reconocimiento implícito, por parte del Gobierno de Pastrana, del alto peso político de los distintos grupos insurgentes, de su poder acumulado en las distintas zonas de la jurisdicción del Estado. Esto evidencia al declarar una zona “despejada” de 42 mil kilómetros bajo el control de las FARC, denotándose una debilidad tácita de las Fuerzas Armadas y del aparato del Estado en sí mismo. Lo que no es otra cosa que reconocer oficialmente la existencia de los “paraestados” (Cfr.: los distintos artículos de Palacio (Comp. 1990) y las “múltiples soberanías” (Cfr.: Chernick, M., 1990) en competencia por acumular poder y como tal en constante competencia por controlar los

distintos recursos. Las FARC, incluso, luchan por ser reconocidos como fuerza beligerante.

En Derecho Público internacional se establece que si un Estado acepta el carácter beligerante de un grupo armado, el conflicto armado dejaría de ser “**interno**” y se convertiría en “**conflicto armado internacional**”. Esto entraña la prohibición de aplicar el orden jurídico interno del país en conflicto para el procesamiento de los prisioneros de uno u otro bando. Los fiscales y jueces colombianos no podrían acusar ni juzgar a los guerrilleros que fueran capturados. El Código Penal sería inaplicable para ellos. El reconocimiento de beligerancia significaría que los guerrilleros encarnan un proyecto de Estado. La comunidad internacional estaría obligada a permanecer neutral hasta que la “pugna de legitimidades” (guerrilla-Estado) sea resuelta por las armas. El grupo beligerante, por cuenta de ese carácter, adquiere subjetividad internacional particular, lo cual quiere decir que puede solicitar y obtener privilegios e inmunidades diplomáticas. Además de contar con la facultad reconocida internacionalmente para celebrar tratados internacionales y comerciar lícitamente, incluso armas, con otros estados (El golazo del canje, revista *Semana*, Edición 872, Santafé de Bogotá, 18/01/1999<sup>1</sup>).

A pesar de esta nueva actitud de Andrés Pastrana, desde la óptica de los actores que se aglutinan, protegiéndose en torno al Estado, las guerrillas son catalogadas como subversivas, incluso de terroristas y en muchos casos se emplea términos como “narcoguerrilla”, “narcoterrorismo” homologando los proyectos y actividades de ambos actores, para ubicar su actividad en el plano delictivo. En contraste, en los últimos años, la irrupción de los “paramilitares” en el complejo conflicto de violencia colombiano (aglutinados bajo la etiqueta de Fuerzas de Autodefensa Campesina) con el claro objetivo de hacer frente a la guerrilla. En el juego de poderes estos buscan acumular fuerza y ser reconocidos como actores políticos y legítimos portadores de un

sentimiento antiguerrillero y nacionalista. Los paramilitares afirman que ocupan el vacío dejado por las Fuerzas Armadas Colombianas y como tal asumen el papel de luchar y derrotar a la insurgencia, en vista de la inoperancia demostrada por las mismas.

Los paramilitares se enfrentan activamente a todos los grupos guerrilleros atacando en varios frentes, persiguiendo su debilitamiento sistemático, atemorizando a la población que apoya o se presume que apoya a la guerrilla o a quienes tienen vinculaciones con la izquierda. En estos enfrentamientos están atrapadas poblaciones y zonas enteras. Su objetivo siguiente sería atacar el bloque sur oriental de Colombia (departamentos de Nariño y Putumayo) bajo control de las FARC, zona que limita con el Ecuador (provincias de Sucumbíos y Carchi).

En este sistema de actores políticos vinculados a través del enfrentamiento abierto, se inserta el complejo económico regional de la narcoindustria, la misma que genera a su alrededor una maquinaria logística, financiera y política. Tal despliegue de recursos, al margen de la estructura legal, ubican a las organizaciones insertas en el narcotráfico en una peculiar posición. Como una “mafia” con elementos atípicos a la de similares organizaciones ubicadas en otras geografías (como la norteamericana). Esto es, alcanzar un reconocimiento y espacio abierto en el espectro político colombiano, intentando acceder a la toma de decisiones y control de poder (Kalmanowitz, 1991).

El control del complejo productivo coca—cocaína se lo ejerce en forma vertical por parte de la “narcoburguesía” colombiana (Cfr. Palacio y Rojas 1990). En su accionar condensa una serie de actores sociales que van desde el campesinado cocalero, pasando por especialistas en las diversas etapas de producción, hasta un sistema de fuerzas para-militares, necesarias para su funcionamiento (Castillo, F., 1991).

El narcotráfico se sirve de las bases campesinas, quienes representan el grueso de mano de obra (Palacio, 1990), para las

distintas etapas de la elaboración del clorhidrato de cocaína; y, de las guerrillas asentadas en tales zonas (Castillo, 1991), aunque este pacto de “colaboración” resulta inestable, y no siempre está explícita la forma cómo se desarrolla esta colaboración o aparente antagonismo: Los intereses económicos de guerrilla y narcotraficantes pueden coincidir, no obstante, sus intereses objetivos y fines políticos en apariencia son distintos (Rossi, 1996).

En su momento César Gaviria, ex presidente colombiano, respecto de la importancia del narcotráfico como elemento disruptor de las relaciones políticas internas de su país, decía:

*“El tráfico de drogas es más que un simple problema criminal. Si no ponemos obstáculos, el tráfico de drogas puede convertirse en el enemigo más formidable de la democracia colombiana [...] Los carteles han intentado minar nuestras instituciones democráticas pero han fracasado y continuarán fracasando” (Bagley, B., 1991:5).*

Estas declaraciones, realizadas en un marco de la política internacional, como Jefe del Gobierno colombiano, marcaban una pauta que iba más allá de su estrategia de política interna, pues ésta se allanaba a los requerimientos del sistema político internacional y a la política de “guerra contra las drogas” declarada abiertamente por Ronald Reagan (presidente de los EE.UU. desde 1980-1988).

Después de algunos años, el presente gobierno de Andrés Pastrana (1998-2003) mantiene la misma estrategia con la variante, que la guerrilla, especialmente las FARC, se consolidan como actores políticos. Uno de los objetivos en la administración Pastrana es pacificar Colombia, no obstante, esta negociación, en lo aparente, no es ceder posiciones desde el poder del Estado, sino que la guerrilla y el representante político del Estado colombiano compartan una misma mesa de negociaciones.

Esta situación se debe al poder acumulado por la guerrilla a lo largo de la lucha armada de los últimos cincuenta años, el

cual está acompañado de un poderío militar, el apoyo de las bases sociales en donde ellos accionan (a pesar del desprestigio en otros sectores colombianos por el perfil delincucional asociado a sus actividades y desgaste del discurso), y la autonomía económica proporcionada por los recursos provenientes de la sinergia funcional entre guerrilla y narcoindustria, ya que muchas de las zonas bajo su control se encuentran las áreas de producción de hojas de coca. Concomitantemente con lo mencionado, su poderío les permite, el control social e informativo sobre la población inserta en el territorio bajo su dominio.

Las Fuerzas Armadas ejercen la función de control y lucha contra el narcotráfico, pero las actividades de las mismas encuentran un amparo en ciertas esferas de los organismos antinarcóticos (Comisión de superación de la violencia, 1992 y Henman, A., 1992). Sin embargo, estos representan, a las instituciones del Estado y como tal defienden a las mismas. En colaboración con estas se encuentran los organismos antinarcóticos de los Estados Unidos quienes ven a la narcoindustria como una amenaza a su seguridad interna y a la guerrilla como los agentes que apuntalan a la producción y tráfico de cocaína y por el poder alcanzado por estos, como una amenaza regional que puede involucrar a países como Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil.

El narcotráfico es tema importantísimo en la agenda de la política internacional norteamericana. Las agencias antinarcóticos DEA (Drug Enforcement Agency), la Guardia Costera y la Unidad Antinarcóticos del Departamento de Estado, trabajan en colaboración con el Pentágono, CIA y el Consejo Nacional de Seguridad. Organismos que se concentran en estudios e implementación de estrategias que impidan la desestabilización política de la región por la intensificación del conflicto guerrillero aliado y/o parte del narcotráfico.

La preocupación norteamericana en la seguridad interna colombiana se expresa de distintas formas tales como la Certificación que da el Congreso norteamericano a los países que han

demostrado éxitos en la lucha por la erradicación de cultivos de coca y eliminar el tráfico de cocaína. Así se tiene que:

*[...] el 26 de febrero [1999] en la intervención de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, anunció la Certificación por seguridad nacional para Colombia, y el 19 de marzo, cuando el embajador Kamman presentó credenciales ante el presidente Ernesto Samper. Ambos hicieron referencia al tema guerrillero y a la necesidad de combatir la subversión en estrecha alianza con el narcotráfico, que amenaza la estabilidad del país [o] (¿Nuevo Vietnam?, revista Semana, abril, Edición 832, 20/04/1998<sup>2</sup>).*

Certificación por eficacia y efectividad en la lucha contra las drogas, que en estricto sentido Colombia no debería tener, ya que en 1998 en Colombia los sembradíos de coca se incrementaron y la guerra contra las drogas no ha tenido éxitos relativos. Declaraciones que marcan una diferencia discursiva y, aparentemente, un cambio de énfasis en la preocupación norteamericana con respecto a Colombia.

Desde la óptica de las distintas agencias de seguridad, la lucha contra las drogas se equipara con la lucha contra la subversión. Los términos guerrilla y subversión, se funden en uno solo “narcoguerrilla”; como tal, este es un problema que se resuelve en el plano delictivo y como estrategia: la solución es la implementación de políticas de acción de carácter militar y policial, en las cuales juega papel preponderante la interdicción y la represión. Lo que deja abierta la posibilidad que: la verdadera guerra no es en contra del narcotráfico sino contra la subversión. Hecho, que en el actual Proceso de Paz colombiano puede representar una realidad espinosa que chocaría con la visión geopolítica norteamericana.<sup>3</sup>

En la entrevista realizada a Barry McCaffrey (apodado el Zar antidroga de Norteamérica) por la revista Semana (colombiana) señala que:



*[o] El presidente Pastrana está tomando un riesgo para la paz. Para eso fue elegido. Pero eso no hace que yo deje de tener mucho miedo por el futuro. Después de 32 años en uniforme, uno aprende que solo se puede negociar cuando el premio y el castigo que enfrenta el oponente hace que sea lógico que éste trate de negociar y conseguir en la mesa lo que no pudo obtener en la guerra. Ahora, no veo por qué los guerrilleros están en la mesa. (¿Qué viene después de la certificación?, revista Semana, Edición 878, Santafé de Bogotá, 01/03/1999).*

En la misma línea de reflexiones la mencionada publicación dice que:

*[o] La ayuda militar [a Colombia] es estrictamente antinarcóticos, pero como dijo a Semana un alto funcionario del Pentágono, “si los guerrilleros interfieren en la labor de erradicación, se convertirán en blancos legítimos”. Los estadounidenses aseguran que las FARC ya no solamente prestan seguridad a los cultivos, sino que procesan y transportan la droga [o]” (Tiro al blanco, revista Semana, Edición 878, Santafé de Bogotá, 01/03/1999).*

De lo anterior se tiene que la narcoindustria ha estado bajo un proceso de formación y transformación en los últimos años, sujeto a las distintas estrategias de interdicción asumidas por los países productores y consumidores, lo que en unos casos ha reducido la extensión de los cicales (Perú, Bolivia) y en otros se han expandido (Putumayo colombiano).

En el caso peruano, el éxito se debe al control sobre su espacio aéreo, en el que la aviación militar ha derribado, en la zona amazónica, toda aeronave no identificada. Esto ha reducido considerablemente el tráfico de pasta básica de cocaína (PBC) y/o clorhidrato de cocaína a Colombia. El control de los corredores aéreos ha implicado que los traficantes busquen vías de tráfico alternativas, ya sea por la costa del Pacífico, Ecuador o Brasil, elevando sustancialmente los costos de operación y como

efecto inmediato, en las zonas de producción de hojas de coca y PBC, una reducción considerable de los precios de estos productos, significando un desestímulo para el incremento de cultivos. Además de la interdicción aérea, se han implementado programas estatales orientados a sustituir cicales por cultivos legales.

En Colombia, la extensión de cultivos de hojas de coca se ha incrementado (en 1998 el aumento con respecto a 1997 fue del 28%), problemática que confluye en el escenario de violencia protagonizado por las fuerzas de seguridad del Estado, movimientos insurgentes y fuerzas paramilitares. Este enfrentamiento ha logrado desalojar y/o debilitar la presencia del Estado en amplias zonas del territorio colombiano, para ser ocupadas por las fuerzas insurgentes, principalmente.

En este punto la producción de hojas de coca, refinación a clorhidrato de cocaína, cobro de “gramaje”<sup>4</sup> representa la principal fuente de ingresos para la guerrilla. Al estar estas zonas alejadas del control del Estado y las Fuerzas Armadas, y al ser la coca y cocaína fuente privilegiada de recursos, se ha incrementado la extensión destinada al cultivo de hojas de coca y se ha elevado la productividad de la misma. La zona más crítica en este punto es el sur oriente de Colombia, correspondiente al Dpto. del Putumayo, fronterizo con el Ecuador

### **3.2. Perú**

El uso de la hoja de la coca en Perú y Bolivia es inmemorial, cumplía y cumple un papel ritual y complemento en la dieta cotidiana de muchos pueblos de los Andes. Su cultivo se encuentra hondamente insertado en el horizonte simbólico del campesino peruano y boliviano. En el caso de los campesinos colombianos y ecuatorianos vinculados a esta actividad, la coca representa la posibilidad reivindicativa de acceder a mejores salarios y el ser denominado campesino-cocalero, el cual es un factor de identidad, tanto para los colombianos cuanto para los migrantes ecuatorianos que logran vincularse a esta actividad en la

zona fronteriza de la amazonia ecuatoriana o en zonas como el Alto Huallaga.

Desde 1890 se tiene referencia de laboratorios para el proceso y refinación de clorhidrato de cocaína en Lima y Huanuco (Henman, A., 1992), sin que ésta asuma las dimensiones delictivas y de crimen de lesa humanidad que se la asigna. Pero, no es hasta la segunda mitad de la década del ochenta, del siglo XX, que la producción de cocaína toma nuevas posibilidades, condicionada por las presiones de los países consumidores. Desde fines de los años sesentas la producción de cocaína de Colombia, ya había dominado el mercado de los Estados Unidos. Producción incentivada, por lo rentable de la actividad, que vertió recursos en todas las esferas de control, lo que de cierta manera facilitó su acelerada acumulación de poder (Ibid, 1992).

En Perú, la violencia giró en torno a movimientos contestatarios como el Sendero Luminoso y a partir de la década del ochenta, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y fuerzas parainstitucionales o paramilitares provenientes del narcotráfico. La contestación armada surge a raíz de la “modernización” del aparato productivo agrario. Esta se realizó en constante antagonismo con las élites de hacendados en el régimen militar de Morales Bermúdez, lo cual provocó el reordenamiento del poder y la posibilidad para acceder al mismo a sectores emergentes de campesinos.

No obstante, esos campesinos hoy son los protagonistas de los movimientos contestatarios, como resultado de la posterior alianza del Estado con los mismos bloques elitarios que en su momento fueron desplazados, pero que se reagruparon en un proyecto político-económico reaccionario (Degregori, C, 1990).

Movimientos como el SL que nacen de una falta de representatividad de los actores estatales en lo que se denomina el “trapecio andino” o “mancha india”.<sup>5</sup> Integrandos sus proyectos en referentes míticos y de carácter mesiánico (andino) que pretende aglutinar una conciencia mestiza (Ibid, 1990).

En el Perú, en general “lo indio” se adscribe a lo campesino tratando de no identificar al Perú sólo con lo indio y en particular los senderistas se oponen a integrar su proyecto político a un discurso “étnico”, pues esto sería considerarse un grupo de “mistas” absorbido por blancos, como por “indios” (Ibid, 1990).

En los casos anteriores el narcotráfico construye un complejo económico-geográfico Páez, (1990) lo denomina sistema productivo coca-cocaína, que integra la tierra por lo general amazónica, con escasa o ninguna presencia del Estado, e importantes sectores de población peruana y colombiana (en porcentaje más reducido), por lo general pauperizada y estigmatizada por el Estado.

En el periodo de gobierno de Fujimori (1990-2000), suceden en Perú hechos importantes en el enfrentamiento contra grupos armados contestatarios como: la captura de Abimael Guzmán, cabeza máxima de Sendero Luminoso (1992) lo que como efecto inmediato provocó la desarticulación de muchas de las células armadas y debilitamiento de la estructura operativa del SL; en 1996, el rescate de los rehenes retenidos en la residencia del embajador del Japón en Lima por miembros del MRTA, en el rescate eliminan al grupo de captores y a Julio Serpa Cartollini el número uno de dicha organización.<sup>6</sup>

Estos hechos clave condujeron al Gobierno peruano a una lucha frontal en contra del narcotráfico, pues, Perú mantenía una posición ambigua frente a la misma, pues años antes tenía como prioridad máxima el desmantelamiento de los grupos armados, como requisito previo para enfrentar el reto de la erradicación y la inserción frontal de las fuerzas de control y seguridad en la guerra contra las drogas.

La disolución del Parlamento en 1992 es otro hecho relevante, en el cual se esgrimió como argumento central la “corrupción” de dicha institución (Soberón, 1997). Suceso que no tuvo mayor objeción de los EE.UU. pues a pesar de los elementos de autoritarismo y de carácter dictatorial, ésta se justificaba en la

medida que le permitía a Fujimori acceder, aparentemente, a las herramientas para enfrentar al narcotráfico y continuar su lucha en contra de los movimientos armados.

### 3.3. Ecuador

En lo referente al Ecuador los procesos que se mencionan han afectado a su funcionamiento, sin embargo, respondiendo a situaciones históricas específicas, el Estado ecuatoriano se ha desarrollado en tal magnitud que le hace posible controlar, aparentemente, todos los sectores sociales. Sin embargo, es patente su limitado campo de acción en zonas de frontera y amazónicas en general, en donde la presencia del Estado es deformada y marginal.

Como consecuencia de lo anterior, el país se ha convertido en receptor de grupos humanos, que huyendo de las precarias condiciones de vida, en la que ellos se encuentran en sus lugares de origen, se refugian en zonas de frontera. La migración y colonización se ha complejizado por la disputa de la zona entre narcotraficantes (y todos los elementos que integran la narcoindustria), fuerzas contestatarias (catalogadas como guerrilla y/o subversión) y Fuerzas Armadas. Considerando, que la disputa planteada, más que excluir a uno u otro actor que interviene en la zona, puede presentarse como una presencia tolerante variable. Problemática que depende de la forma en que intervienen los diversos actores, al ser influenciados por las contingencias de la política y economía zonal y nacional o por condicionantes político-económicos de orden mundial.

La interacción de los distintos actores que compiten por acceder a recursos produce un clima de tensión que esconde una guerra sucia en la zona del Putumayo colombiano, como en el lado ecuatoriano, a partir de 1984 aproximadamente (Informe Misión, 1992). No obstante se puede afirmar que es 1988, el año en que se evidencian plenamente los actores en conflicto y las

poblaciones en condiciones críticas como son colonos-campesinos e indígenas.

Esta zona resulta clave para el estudio comparado de procesos que afectan a la macrorregión, pues es un punto donde convergen diversos intereses, por lo cual se disputa su control. Por estar en el triángulo amazónico y por su posición geográfica, el lugar se vuelve un punto estratégico para el control geopolítico. Al abarcar la zona del Putumayo ecuatoriano se intenta integrar perspectivas que cotejen de forma adecuada a los actores sociales y políticos que intervienen.

Ecuador a partir de la década del sesenta se integra a formas de organización regional como respuesta a las políticas desarrollistas. Consolidándose un cuadro regional, a partir de la década del setenta, con la formalización del Acuerdo de Cartagena y una identidad afirmada en la aparente independencia que proporcionó la condición de país productor de petróleo, la entrada de divisas en cantidades no conocidas antes, y su ingreso simultáneo a la OPEP.<sup>7</sup>

Posibilitando al gobierno de Rodríguez Lara, autodenominado como nacionalista y revolucionario, realizar un plan de industrialización que fue sancionado favorablemente por un virtual consenso por parte de los distintos bloques sociales. Este consenso incluyó la participación activa de los grupos dominantes tradicionales en los recursos generados por las exportaciones de petróleo.

Este marco de referencia construye una imagen de país progresista y con un nacionalismo revitalizado con pretensiones cosmopolitas, en donde sus habitantes se sentían orgullosos de su nueva posición internacional. Simultáneamente, se adecuaban las proyecciones mentales y los hábitos de consumo al nuevo ritmo de ingresos.

La clase media, básicamente la tecnocracia, alcanzó ingresos inimaginables pocos años atrás. Se prefigura una imagen del

Ecuador que se interioriza en los actores, principalmente en habitantes de los polos de desarrollo urbano (Quito y Guayaquil). Tratando de proyectar al resto del territorio estas percepciones, a través de las agencias gubernamentales principalmente. Simultáneamente se dan los pasos pertinentes para la modernización de la hacienda tradicional, se continúa y actualiza las leyes de Reforma Agraria, dando otro estatuto a los grupos allí asentados.

Esta nueva complementariedad entre los diversos grupos socioeconómicos fundada en una aparente etapa de bienestar (confort) trae como resultado la construcción de un ecuatoriano genérico en donde las disimetrías socioeconómicas se reordenan y resignifican en función de un excedente de recursos que en su momento era inagotable, una identidad que se construyó en función del acceso al confort.

No obstante, después del gobierno de Rodríguez Lara (1972-1976) el país comienza un proceso de endeudamiento agresivo, que obliga a reajustar las metas económicas. Comienza una etapa que marcará la vuelta a la democracia a partir de 1979, y todo el funcionamiento político-económico en la década del ochenta, que traerá como resultado el ordenamiento del país, hasta antes del reconocimiento de forma y fondo del Protocolo de Río de Janeiro, en los aspectos: económicos, políticos y de movilidad social.

A partir de la denominada “Firma de la Paz”, la cual tiene su antecedente inmediato en el último enfrentamiento armado con el Perú de 1995 (administración de Gobierno de Durán-Ballén). Esta etapa se encuentra atravesada por las negociaciones de paz, la supervisión de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos). Proceso que termina con la delimitación definitiva de la frontera común en el gobierno de Mahuad (1998-2002).

Simultáneamente, durante esta época se dio la destitución del vicepresidente de la República Alberto Dahik, acusado de

manejos dolosos con dineros de “fondos reservados”; sin embargo, de fuentes no confirmados el argumento de peso para su salida fue un desacuerdo en el manejo de la política económica, en función del costo generado como efecto del enfrentamiento armado, incrementando los problemas fiscales del país arrastrados desde la vuelta a la democracia en 1979.

Posteriormente el Gobierno de elección popular de Abdalá Bucaram y su destitución por corrupción, momento marcado por una intensa desestabilización política e inconformidad de las bases sociales y los grupos elitarios. Bucaram fue sustituido en el cargo de manera interina por Fabián Alarcón, en base a interpretaciones de la Constitución vigente de entonces, la causal de destitución fue por incapacidad mental, aunque, posteriormente fue condenado a prisión por irregularidades cometidas en su administración. Irregularidades que al tenor de la resolución del Congreso Nacional no era responsable, pues él estaba incapacitado mentalmente.

En los dos periodos de gobierno las negociaciones de “Paz” fueron lideradas por el frente diplomático. Uno de los actores fundamentales del conflicto limítrofe con el Perú, las Fuerzas Armadas, pierden el papel para el cual, a lo largo de los últimos sesenta años, estuvieron orientadas.

El gobierno de Mahuad atraviesa una severa crisis fiscal y financiera. El mismo que no logra adoptar un plan coherente, y se enfrenta a: inflación descontrolada, acelerada depreciación de la moneda frente al dólar y un persistente deterioro del sistema financiero. Las previsiones sobre la recuperación económica son remotas.

Existe un crecimiento de los hechos delictivos, aparentemente, en consonancia con la severa crisis económica que atraviesa el país. En los medios de comunicación en general la crónica roja y los hechos delictivos ocupan los espacios protagónicos de los noticiarios, concomitantemente a estos hechos las or-



ganizaciones sociales y gremiales se encuentran en constante protesta frente al Gobierno. Las medidas de ajuste económicas de marzo y julio de 1999 movilizaron a la población en diferentes zonas del país.

En este contexto los indios tuvieron un papel protagónico, con efectos políticos todavía no comprendidos en sus alcances y proyecciones. Por un lado obligaron a una revisión de las medidas económicas al ejecutivo, levantaron un sentimiento de solidaridad en las grandes ciudades, redes de apoyo político de diversas corrientes del espectro político nacional y por otro lado en las poblaciones de la Sierra, donde la población no india es la mayoritaria, provocando un efecto diametralmente opuesto al que ocurrió en las grandes ciudades.

La posición política de los indios se articula a la consecución, aparente, de objetivos políticos de alcance nacional, sin embargo, estos objetivos se presentan como móviles reivindicativos con características propias, los que se insertan en la necesidad de construir espacios simbólicos articulados a la reproducción social y económica, en ecologías altamente intervenidas y depredadas y con una elevada carga demográfica.

En este sentido el objetivo sería la búsqueda de nuevas tierras, las mismas que se hallan en propiedad de pequeños y medianos agricultores, lo que provoca y seguirá provocando conflictos y, potencialmente, resoluciones de carácter violento.

En el caso que nos compete, la amazonia ecuatoriana, el escenario podría ser aún más conflictivo, puesto que los grupos indios han logrado consolidarse como actores políticos gravitantes en el contexto nacional, regional e internacional. Ello conduciría a la ocupación de "territorios" extras a los ya legitimados (de hecho o de derecho). Proceso que iría en detrimento de poblaciones campesinas y de las áreas protegidas y de reser-

va. Como consecuencia: la ampliación de las territorialidades y/o territorios adjudicados a los indios acarrearía conflictos con los campesinos, interetnias y en algunos casos específicos intraetnias y; respuestas del Estado, no previsibles aún, en cuanto a la implementación de un marco jurídico que permita o impida esta ampliación, con el consiguiente despliegue del aparato de control que viabilicen sus respuestas.

**Cuadro 1**  
**Ecuador, Colombia, Perú: Aspectos relevantes**

	ECUADOR	COLOMBIA	PERÚ
Contexto político Fuerzas Armadas	Presidente constitucional Jamil Mahuad (1998-2002), asume el poder después de Fabián Alarcón, quien fungió de interino después, que el Congreso Nacional destituyó a Abdalá Bucaram por enajenado mental. Este proceso de cambio tuvo amplio apoyo de FEAA. Mahuad terminaría el proceso de paz entre Ecuador y Perú, lo que se convertirá en su mayor logro, posteriormente cuestionado por una agobiante crisis económica que vive la población.	Presidente constitucional Andrés Pastrana (1998-2003), asume el poder luego de un largo enfrentamiento del Gobierno de los Estados Unidos en contra del anterior presidente Ernesto Samper, a quien se le acusó de manejar dineros del narcotráfico en su campaña presidencial. Los EE.UU. llegaron a quitarle la visa de por vida.	Presidente constitucional Alberto Fujimori (1989-2000). Luego del autogolpe, es reelecto por segunda ocasión, y se convierte en uno de los presidentes latinoamericanos que más reformas ejecutara en su gobierno. Se destaca el mandato de Fujimori por eliminar a los grupos guerrilleros sendero Luminoso y MRTA, mediante la ejecución y apresamiento de sus máximos líderes. Esto genera un clima de paz propio para la inversión y la ayuda internacional, liderada por EE UU.
Guerrilla/paramilitares Presencia del Estado	Su actual función no está claramente definida después de la sanción de derecho del Protocolo de Río de Janeiro, la crisis económica que integra crisis fiscal y crisis financiera, debilita su capacidad de reorientación. No obstante, que la definitiva delimitación con Perú tuvo la aquiescencia de las FEAA existe una sensación que Ecuador cedió demasiado. En este nuevo orden de la seguridad externa, los militares han asumido algunas funciones de carácter policial interno.	Las FEAA. colombiana en este último año han tenido varios reveses frente a los grupos guerrilleros. Varios enfrentamientos resultaron desastrosos para el Ejército que terminó con muchas bajas. Esto condujo a que los procesos de negociación con la guerrilla de las FARC y el Estado se aceleren, pero a decir de las FEAA. en abierta desventaja para el Ejército y el Estado, sobre todo por el despeje de casi 20. 000 km2 en el departamento del Caquetá, que la guerrilla exigió al Gobierno de Pastrana pa-	En la actualidad reorientada debido a la firma de la paz con el Ecuador. Sin embargo asumiendo los roles encomendados por el Estado vinculado al control del orden interno y al narcotráfico. En este punto las FEAA. peruanas han tenido los éxitos más notables en el control de paso de pasta básica de cocaína hacia los laboratorios colombianos. Informes indican que todas las avionetas sin identificación que surcaron por la amazonia peruana fueron derribadas siendo vinculadas con narcotráfico.

**Cuadro 1**  
**Ecuador, Colombia, Perú: Aspectos relevantes (Cont.)**

	ECUADOR	COLOMBIA	PERÚ
Guerrilla/paramilitares	No existe presencia evidente de grupos armados contestatarios, hay referencia de la existencia de los GCP (Grupo de Combatientes Populares) con tendencia de izquierda, no obstante su aparcimiento coincide en los momentos de crisis política.	En Colombia la presencia de grupos guerrilleros se remonta a la época denominada como "La Violencia" (1945-1965), han sido más de 50 años en donde grupos bandolerizados, luego vinculados a la izquierda comunista se han ido fortaleciendo hasta configurar regiones regidas y controladas por la guerrilla. En la actualidad el principal grupo guerrillero son las FARC, seguido por el ELN y algunos grupos relacionados al EPL. Este panorama se complica por la presencia de las auto-denominadas Fuerzas de Autodefensa Campesinas o Paramilitares, grupos de derecha con abiertas relaciones con militares colombianos, en los actuales momentos en una guerra sin cuartel por el control de poder y de regiones controladas por la guerrilla.	Los principales grupos guerrilleros del Perú, Sendero Luminoso y MRTA, han sido desarticulados casi en su totalidad por las fuerzas del orden. En acciones espectaculares, han sido capturados o asesinados los principales líderes de estas organizaciones, el caso de Abimael Guzmán capturado en una casa de seguridad de SL en Lima y del comandante Cerpa Cartolini (MRTA), asesinado por comandos del Ejército en el rescate de rehenes luego de la toma de la residencia del Embajador del Japón en Lima por militantes del MRTA.
Presencia del Estado	Consolidado en sectores urbanos, muy marginal en regiones amazónicas.	Cuestionada en todos los sectores. Consolidada en los sectores urbanos y nula en zonas marginales en especial controlada por fuerzas beligerantes.	Consolidada en sectores urbanos, en las zonas rurales y marginales especialmente en el denominado "trapecio indio" y en la amazonia marginal y nula.
Corrupción/gobernabilidad	Ecuador es considerado como un país corrupto, en donde curiosamente ningún alto funcionario involucrado en actos de corrupción ha sido capturado o encarcelado.	La corrupción del Estado colombiano es relacionada a nivel internacional con el flujo de dinero manejado por los narcotraficantes.	En estos últimos años la administración de Fujimori logró consolidar una imagen de lucha en contra de la corrupción lo que ha favorecido al Perú en sus negociaciones económicas internacionales.

**Notas:**

- Este artículo a más de señalar las implicaciones del reconocimiento a las FARC de los 42 mil kilómetros, expresa el temor a que el conflicto con las FARC tome otras vías y la debilidad del gobierno de Pastrana.

- 2 En este artículo se recalca que: Colombia se ha convertido para EE.UU. en un problema hemisférico más parecido al de Bosnia que al de Vietnam y la preocupación que la intervención militar norteamericana se incrementa.
- 3 El concepto de “narcoguerrilla”-acuñado hace ya varios años por el embajador en Colombia Lewis Tambs- que es el que justifica la posición de quienes buscan militarizar la lucha contra las drogas.
- 4 Impuesto que la guerrilla cobra a los narcotraficantes por compartir zonas bajo su control, este puede ser en dinero, PBC o clorhidrato
- 5 Agrupa a los departamentos de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno, zonas de presencia armada.(Degregori, Grompone C., 1991).
- 6 En julio de 1999 la captura del Comandante Feliciano, la cabeza visible del SL, segundo en jerarquía después de Abimael Guzmán, según estimaciones del Gobierno peruano el SL estaría prácticamente eliminado.
- 7 La CEPAL, propone superar el subdesarrollo, con un Estado proteccionista que impulse el comercio internacional y propenda a la redistribución del ingreso. El acuerdo de Cartagena es una secuela de la dinámica propuesta por la CEPAL, otro de sus objetivos era afirmar la identidad socio-cultural de los estados. Parte de los principios cepalinos se imprimen en la OPEP, la cual busca reglas para controlar a las empresas multinacionales (Sonntag, H., 1989).

*El campo de la posesión abarca parte el campo del mesianismo. Primeramente ambos fenómenos se originan en una misma matriz de lo imaginario, la cual remite a la memoria colectiva, a las divinidades ancestrales y a los espíritus olvidados, que, sacando provecho de un cataclismo social, descienden a la tierra y llegan a obsesionar a poblaciones íntegras. Enseguida ambas imágenes y las mismas representaciones se utilizan para designar las personalidades mesiánicas y las personalidades poseídas, imágenes y representaciones que emplean, a su vez el esquema de la intrusión de las divinidades cabalgando. Por último los dos fenómenos parecen tan cercanos, que resulta difícil decir cuál fue el primero en el tiempo, si la posesión o el mesianismo [...]*

*(Françoise Laplantine, Las voces de la imaginación colectiva, Gedisa, Barcelona, 1977.: P: 125)*

## **4. VIOLENCIA Y PODER EN LA CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS (reflexiones teóricas)**

La violencia tiene varios estratos de manifestación dependiendo de los contextos histórico estructurales en que se desenvuelven los sujetos sociales. El concepto de violencia se presenta como autoevidente, pero éste tiene un carácter polisémico, que se le otorga desde la acción social, como desde la académica; es una noción no terminada de definir que debe ser comprendida en sus múltiples posibilidades de enunciación: como mal absoluto en sí; como valor positivo en relación a los objetivos (justos e injustos) que los actores defienden axiológicamente; como desviación o como mecanismo homeostático; como generadora de identidad, o como recurso de dominación. La dificultad principal radica en interpretar el apareamiento de la violencia en los diversos planos de la realidad: social (familia, delincuencia, género, grupos sociales, violencia política y otros).

Parece ser que la conceptualización más válida es desde el plano de discurso que constituye sujetos sociales, a partir de los

repertorios de acción que disponen los actores en el enfrentamiento político y en referencia a otros actores y el Estado. Acción que construye los sentidos internos (en lo referente a construcción de identidad) y sentidos externos (efectos políticos) que los actores otorguen al accionar violento (Páez, A., 1990). Es decir que la violencia se la puede asumir como un recurso instrumental según la perspectiva de Charles Tilly quien concibe a la violencia como una de las posibles formas de acción o recurso, en un repertorio de recursos posibles destinados a producir un efecto determinado. O como un factor de identidad, a decir de los planteamientos de Laclau y Mouffe (1987), que proponen la construcción discursiva de identidades al interior de los conflictos.

### **Elementos preliminares**

En la violencia intervienen múltiples variables que se interrelacionan en los diferentes componentes sociales y cada cual responde a procesos y contextos dados. La dificultad de interpretar el apareamiento de la violencia está acompañada de la diversidad de conceptualizaciones que obedecen a distintos paradigmas y modos de aprehender la realidad (desde la autorreferencia de los distintos actores que intervienen).

Sin embargo, la diversidad que ofrecen las distintas perspectivas de los actores involucrados, puede dar pautas para entender la procesualidad de la violencia y cómo estos la adoptan y resignifican en su cotidianeidad. Es decir una conceptualización a partir de procesos y construcciones de los discursos que construyen la autoadscripción de los individuos y cómo estos adscriben a los otros. Valor que dan los actores a la violencia como creadora de sentidos que generan un orden. Orden que se construye y deconstruye a medida de las necesidades, contingencias o constricciones del espacio (económico, político y simbólico).

En las reflexiones sobre la ley, el derecho o el Estado, se encuentra como factor común: la coacción, o más genéricamente la violencia (APEP, 1990). La coacción implica disimetría social, al imponer las concepciones de unos sobre otros. Los grupos sociales pueden internalizar aquello que quienes los someten le ofrecen por consenso, resignación, tradición, fuerza (Urbano, H., 1991). Pero se debe entender que el consenso, resignación y tradición son, elementos que en contextos y procesos específicos pueden tomar posiciones relativas pasando a ser instrumentos de fuerza. Pues en tales momentos, estos exteriorizan un discurso dominante. El mismo que refuncionaliza y readapta las tradiciones, parámetros de resignación y discriminan los signos eficientes para construir consenso desde la hegemonía.

La fuerza se puede entender como: la presión actual sobre una persona de naturaleza física o espiritual (que incluye lo psicológico, pero que es más amplia porque puede ser de naturaleza religiosa, valorativa, fenotípica, partidista, regional), cuyo efecto consiste en que esa persona actúe (u omita actuar) de manera distinta (en calidad o grado) a la que su voluntad persigue (APEP, 1990).

La violencia es un recurso más de los tantos disponibles, en particular con sus demandas hacia el Estado (Páez, A., 1990). La misma que no es beneficiosa de igual manera para todos los actores que se involucran, pues intervienen factores ideológicos que legitiman los patrones, expresiones de violencia y enmascara a la misma (Girard, R., 1983).<sup>1</sup>

Sin embargo, la violencia como opción parece ser que se da en todos los planos sociales y responde a una pauta de comportamiento. Entendiéndose a la cultura como una forma más de comportamiento humano (Barth, F., 1976). Comportamiento que incorpora y funcionaliza (interiorización de las distintas significaciones) las situaciones de conflicto, mediatizadas de procesos de socialización. Tales situaciones van presionando a

los individuos, hasta llegar a extremos en que las mismas induzcan a condiciones de “indiferenciación” (Girard, R., 1983).

Indiferenciación que se da en un plano simbólico, pues a pesar de existir entre grupos o individuos evidentes planos de clasificación y/o diferencias (sociales, políticas, económicas, etc.) estos se llegan a indiferenciar en planos de comportamiento al intentar acceder a un mismo recurso o recursos. Esta situación se construye entre grupos o individuos que se enfrentan, pues estos crean estrategias y signos para recomponer su horizonte simbólico. Estrategia adaptativa que permite a los grupos humanos enfrentarse adecuadamente a las constricciones del medio social y a las presiones de los actores específicos que controlan o pretenden controlar el espacio y los instrumentos y herramientas del poder.

### **Disputa de recursos**

Los recursos en disputa pueden ser de diversa índole, los mismos que se ubican en distintas categorías (económica, política, el poder como recurso escaso). Formándose así un triángulo de deseo, que se da en términos de identificarse uno de los grupos (o grupo), con las capacidades que el “otro” posee o quiere acceder. En tal competencia se dan las condiciones de indiferenciación que crea una situación de conflicto, al intentar acceder a recursos de variada índole. Al conflicto resuelto por la fuerza se lo llama violencia (Girard, R., 1983).

En este contexto de indiferenciación, los grupos están por clasificarse como posibles controladores del recurso. Una vez que éste ha sido absorbido por uno o varios de los competidores, por medio de la violencia (conflicto resuelto por fuerza), las condiciones de poder se refuncionalizan a los requerimientos del nuevo reordenamiento social en sus diversos aspectos: políticos, económicos y simbólicos. Volviéndose a generar mecanismos para mantener tal situación, ya sea por fuerza, consenso, tradición o resignación.



Al plantear de esta manera el aparecimiento de la violencia no se la categoriza como un recurso homeostático, ni definitivo. En la práctica los procesos de indiferenciación se confunden con la dinámica de la violencia misma. Punto en donde la separación entre causa efecto, diferencias entre sujeto y objeto de la violencia son simultáneos, adquieren autonomía, es decir, la violencia genera más violencia (APEP, 1990; Girard, R., 1983).

Los conceptos integrados anteriormente proporcionan elementos para interpretar el aparecimiento de conflictos y su resolución por la fuerza (violencia), en situaciones donde a los actores, aparentemente, se los puede homologar en una competencia por construir una identidad y una realidad en donde ella sea eficiente, como aglutinante o catalizadora del proceso.

Si bien la violencia en su conjunto puede tener objetivos políticos y de construcción o constitución de identidades sociales, grupales o individuales, en la práctica la aplicación de la fuerza en la cotidianidad de los actores involucrados no se la percibe como un acto planificado sino como una respuesta automática, que permite la supervivencia del individuo. Respuesta automática (en determinados espacios de interacción) atravesada por procesos de socialización y de la interiorización de los símbolos eficientes que justifican su accionar violento. La violencia se presenta como instrumento cuyo objetivo es la “paz y no la guerra” (Girard, 1983). Y a través de ésta, marcar “fronteras” intersociales y condiciones de diferenciación social, a pesar que ésta no sea racionalizada.

La violencia apunta a un reordenamiento o afirmación de un estatuto social que se halla amenazado. Reordenamiento que adquiere su propia dinámica y vuelve a causar nuevos conflictos, los que podrán o no, ser resueltos por la fuerza. Esto dependerá de los instrumentos y mecanismos que adopten, él o los grupos que condicionen el poder, en su interrelación con los grupos subordinados.

El conflicto entendido como la situación en la cual intervienen dos o más actores sociales y/o políticos al tratar de alcanzar ventajas relativas y/o absolutas, suscitándose choques de ideas o intereses. Esto produce incertidumbre por los resultados finales a los cuales llegarán. Ventajas relativas que se alcanzan y se las sanciona favorable o desfavorablemente, en función de asumir posiciones de consenso o disenso.

### **Representaciones colectivas**

Los distintos actores sociales y/o políticos al intervenir en la construcción de la realidad, hacen confluír una serie de construcciones y deconstrucciones históricas, de capacidades cognitivas y volitivas; desprendidas de su experiencia grupal y/o societal (Cassirer, 1974). Ellos alimentan situaciones que hacen reconocible a un grupo con respecto a sí mismo y con respecto a otros. En el proceso de contrastación y comparación intersocietal e intrasocietal pueden aparecer formas de fricción social. Las que están condicionadas por la manera de asumir ciertos estatutos de funcionamiento y los signos eficientes que aglutinen y cohesionen al grupo social en general, o a los distintos núcleos sociales que configuran dicho grupo. Este proceso de contrastación y auto-contrastación no es un proceso ideal exento de situaciones extremas (léase conflicto). En esta línea se debe entender que en el consenso, resignación y tradición son elementos que en contextos y procesos específicos pueden tomar posiciones relativas, pasando a ser instrumento de fuerza.

El criterio de poder es visto desde la perspectiva del “realismo del Estado”.<sup>2</sup> El poder se presenta como elemento funcional<sup>3</sup> a una organización social específica, orientada a dirigir las acciones de los grupos. Concomitantemente con la estructura del Estado, el “poder” ejercido a través de individuos se orienta a crear signos eficientes que legitimen los estatutos de control que se crean y conforman bajo un cuerpo represivo, jurídico y legislativo que configura el cotidiano de los individuos.

El poder como elemento constitutivo de toda acción social y de todo grupo no sólo es instrumento de represión, sino también positivo productor de conocimiento (Foucault, M., 1976), no es el poder por el poder. Así, en su forma de externalización e internalización tiene una característica dual, en relación al efecto que produzca en los diferentes actores. Esto implica que el poder está generando realidades (alimentado y generando ideologías en una relación dialéctica) que configuran lo cotidiano y en este sentido construyen las autorreferencias, delimitando franjas diferenciadoras entre los distintos grupos en contacto, así como los elementos necesarios para adscribir o autoadscribirse.<sup>4</sup>

Estas condiciones de subordinación aceptadas virtualmente por los distintos grupos (del sistema social) plantean una forma latente de “conflicto abierto”. Para tales objetivos se utilizan formas mitificadas de discurso como justificativo a posiciones de subordinación (disimetría social), interpretada o reinterpretada en relación de distintas maneras de asumir el cotidiano. Las cosmovisiones generales pueden o no ser percibidas por todos de igual manera. A pesar de existir formas particulares de interpretar esa realidad, en la práctica se puede dar una singularización de tales percepciones.

En virtud de esta procesualidad los distintos discursos, tanto los que legitiman los estatutos de subordinación cuanto los de hegemonía, generan procesos discursivos que cambian los referentes de significado. De esta manera los estatutos de subordinación que son aceptados consensualmente varían hasta alcanzar un nuevo estatuto del significante que se relaciona con formas de opresión (disimetría social) (Laclau y Mouffe, 1987).

En esta secuencia de valoración surge un problema, al intentar diferenciar en grado, entre conflicto potencial generado por la competencia de dos o más actores por un mismo recurso y el conflicto abierto, ya que ambas posiciones implican disimetría. Situación que obliga al cambio de una tolerancia variable a niveles de extrema conflictividad. Problemática que se expresa

en una real agresión o intergrupal o intragrupal (expresión fenoménica de la violencia).

Esta confusión de factores se da, pues la línea que separa los dos niveles es imperceptible en la práctica. Condiciones de hecho perceptibles en situaciones y contextos específicos precipitadas por razones de competencia grupal. Situaciones que pretenden cooptar o captar el acceso a recursos simbólicos, políticos, económicos y otros, o el recurso poder como elemento que condensa la multiplicidad de variables.

Desarrollos específicos que inducen a los grupos sociales, quienes asumen un estatuto de opresión, a competir en forma directa por los diversos recursos. Competencia que no prioriza necesariamente el factor económico como indicador de las condiciones de subordinación y/o opresión. Sin embargo, este puede ser el síndrome que construye como autoevidente a la violencia o conflicto abierto. Parámetros acompañados por la búsqueda de reconocimiento (social y/o político) ante el resto de la sociedad. Recurso instrumental que empuja a los grupos sociales y/o políticos a plantear exigencias directas al Estado (Tilly, C, s/f); o a formas institucionales que representan, sustituyen o se superponen al mismo.

Estas situaciones se remiten a espacialidades concretas caracterizadas por: a) Ser sociedades segmentadas, en donde los grupos adscritos y/o auto-adscritos a ese núcleo social aceptan de forma explícita o implícita las distintas formas de subordinación y estratificación socioeconómica (real y virtual), y b) el conflicto abierto si bien puede tener su génesis aparente en razones económicas, sus bases más profundas tienen que ser vistos en situaciones de estructuración y desestructuración simbólica o de discursos contendientes. Visto de otra manera se presenta como un factor de identidad (implícito en Laclau y Mouffe, 1987), pues existe una construcción discursiva de las mismas, al interior de los conflictos (Cfr. Páez, 1990).

## La violencia y sus símbolos

Así, los parámetros simbólicos, económicos, histórico-estructurales diseñan distintos elementos de respuesta social. Respuestas que pueden ser represadas por los grupos de poder, existiendo una continuidad entre el conflicto abierto y la máquina (“*routine*”) de control (Tilly, C, s/f). Configurándose un espacio construido en términos de: las presiones sociales hacia el Estado, y de las presiones de éste hacia los grupos subordinados a él. El conflicto puede plantear una bidireccionalidad de respuestas. Las mismas pueden ser alternadas por uno u otro actor social y político o ser simultáneas. De esta manera, la violencia se presenta como un recurso instrumental, como una de las posibles formas de acción o recurso social (entre otros), en un repertorio de recursos posibles y disponibles con el objeto de producir resultados determinados (Ibid).

Los distintos actores interactúan articulados a las órbitas de poder. Dicha interacción gira en virtud a constructos sociales que dirigen a los actores a percibirse a sí mismos y a los “otros”, en términos de sus derechos, privilegios y posesiones. Aunque, sus derechos sean mínimos, sus privilegios relativos o sus posesiones sólo tengan un estatuto virtual. Los grupos construyen instituciones (de género, sexuales, políticas, económicas, religiosas, gremiales, coetáneas, étnicas, etc.) que avalen un mínimo indispensable que les aglutine socialmente. Lo que les permitiría un posible acceso a espacios de reconocimiento frente al resto de la sociedad. Cuando se plantea la posibilidad de pérdida (por competencia intergrupal o intragrupal) de estos parámetros (políticos, económicos, simbólicos) de autovaloración provocaría reacciones defensivas y/o ataque. a través del empleo sistemático de la fuerza y/o coacción. Momento en que se hace evidente la violencia, cuando un conflicto es solucionado a través de la fuerza (Cfr. APEP, 1990; Girard, R, 1983). Esta focalización de la violencia; encuadrada en competencias por afirmar parámetros socioeconómicos, políticos, simbólicos; configura “sedes de conflicto” (Laclau y Mouffe, 1987). Estos espacios, que pueden ser reales o virtuales, ejercen presión sobre los distintos límites de

funcionamiento social. Esta presión social produce un efecto centrífugo que proyecta la violencia a otros grupos sociales y afecta a otras órbitas de poder. O en términos de Girard (1983) la violencia genera más violencia.

Situaciones de presión intersocietal e intrasocietal que integran a distintos constructos ideológicos que marcan límites relativos a los distintos grupos. Límites ideológicos que legitiman o enmascaran al conflicto. Comportamiento que incorpora las situaciones de conflicto, mediatizados de procesos de socialización (hábito y/o discurso) (Bourdieu, P., 1991). Tales situaciones van presionando a los individuos, hasta llegar a extremos que inducen a condiciones de “indiferenciación” (Girard, R., 1983). Indiferenciación que se da en un plano simbólico, pues a pesar de existir entre los grupos evidentes diferencias (simbólicas, económicas, étnicas, políticas) estos se llegan a indiferenciar en planos de comportamiento al intentar acceder a un mismo recurso o recursos (tangibles e intangibles). Simultáneamente se implementan estrategias y signos para recomponer sus patrones simbólicos y de percepción.

Estrategias que buscan aprehender una situación que está por clasificarse, de acuerdo a los intereses de los actores. La violencia en sí misma (en el sentido de Girard, Op. cit.) es una especie de situación liminal o “interestructural” (Turner, V., 1977), en donde los signos eficientes que revelan la identidad grupal y/o nacional se redefinen. Es una etapa de “ambigüedad” en donde la posibilidad juega un importante papel (Ibid). Posibilidad que se da en virtud de las vías que los actores podrían acceder para formalizar o superar los estatutos sociales adquiridos y su consolidación como actores concretos que intentan acceder a posiciones de decisión aparente y/o real. Los estatutos sociales se sacralizan (Sorel, 1978), se construyen referentes discursivos que legitiman las distintas posiciones de sujeto, que marcan un tiempo espacio distinto al anterior, pero que no es autoexplicado, sino que representa un punto de inflexión, continuidad con el sistema de valores y creencias anterior, el paso a través de una pro-

cesualidad discursiva, de la situación de subordinación a la de opresión, está constituyendo actores.

Condiciones que implica la construcción de “credos” justificativos de las distintas posiciones de sujeto, para lo cual se crean sistemas de referencia y razonamientos que lo apuntalan, el culto a los héroes y la proyección de caudillos que canalicen a otras instancias los “deseos colectivos” (Cassirer, E., 1974). Esto se configura en etapas de extrema crisis, etapas en las cuales ese caudillo podría tomar características mesiánicas y/o justificativos utópicos (Desroche, H., 1976; Laplantine, 1977).

María Victoria Uribe (1996: 30, 31) al cuestionarse sobre la violencia en Colombia en el periodo 1948-1964, proporciona reveladoras líneas de análisis aplicables a las actuales formas de expresión de la misma: La violencia desde la percepción de los actores no “es ciega ni ilimitada”, esta tiene objetivos precisos y se expresa mediante “códigos de comportamiento”, la violencia está vinculada con los valores y formas de identidad de una “Comunidad”. Formas de violencia desprendidas del contexto geográfico (nacional, regional y micro-local) al cual ellos defienden; vinculadas a las redes de solidaridad y parentesco que se disputan un espacio determinado, y al proceso de socialización de los individuos que configura lealtades, sentimientos de venganza y que retroalimentan conflictos. Factores que construyen la noción de su identidad en relación a la pertenencia a una geografía concreta y a los grupos de referencia que fungen de matriz social y a cómo estos fueron educados o condicionados en la percepción de su entorno.

Desde una visión teórica en lo referente a situaciones de crisis extrema, en las cuales los actores construyen simbólicos que constituyan actores en función de “esperanzas” que les cohesione como grupos, Laplantine (1977: 116) dice:

*[...] el mesianismo siempre supone, contrariamente a la utopía, un punto de apoyo retrospectivo y una invocación a la memoria mítica del grupo. Lo que es calificado de Rei-*

*no o de Revolución por sus partidarios remite al tiempo anterior a la colonización, anterior a la esclavitud, anterior a la división de clases sociales antagónicas; en una palabra anterior a la caída. Lo que se proyecta al futuro es la existencia arcádica o pueblerina de las pequeñas comunidades, es el estado edénico de la felicidad, al alcance de la mano [...]*<sup>5</sup>

En este proceso el victimario siempre representa una suerte de Mesías, quien cataliza la crisis, construye el nuevo orden o mantiene el *illo tempore* con los referentes espaciales y simbólicos de lo anterior. En esta línea el victimario asume un papel superior y hace de la violencia un mecanismo purificador, no obstante para alejarse de la víctima, éste le otorga a la misma una categoría deshumanizada, y a la violencia en sí le dota de elementos rituales que lo elevan a planos cuasi religiosos.

#### Notas:

- 1 El mito como condensador de ideologías que legitiman la violencia. Girard (1983: 12) menciona: “La relación entre la víctima actual y víctima potencial no puede ser definida en términos de culpabilidad ni de inocencia. No hay nada que ‘expiar’. La sociedad intenta guiar hacia una víctima ‘sacrificable’, una violencia que amenaza con herir a sus propios miembros, los que ella pretende proteger a cualquier precio.”
- 2 Si bien la presente elaboración teórica intenta acceder al entendimiento de la violencia o de las formas de violencias existente en una zona de relativa influencia del Estado, es necesario precisar que el Estado como forma de organización política, es el que dirige los comportamientos sociales, culturales y políticos de la misma.
- 3 “Lo funcional no califica como lo que está adaptado a un fin, si no lo que está adaptado a un orden o sistema” (Baudrillard, 1981: 71) Se califica al poder como funcional, pues el mismo no es exclusivo de un orden estatal. Existen otras formas de organización política en donde el poder se manifiesta por distintos mecanismos, percibiéndole implícita o explícitamente en esas organizaciones políticas no-estatales.
- 4 La cultura entendida como una forma más de comportamiento humano, que en el cotidiano va condicionando las adscripciones y/o autoadscripciones (Barth, F, 1976).
- 5 Subrayado en el original.



*El mal y el bien no han cambiado desde ayer,  
ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres.  
Corresponde al hombre discernir entre ellos,  
(J.R.R. Tolkien, *El Señor de los Anillos. Tomo II,  
Las dos torres*, Minotauro, Barcelona, 1997, p. 43)*

## 5. NARCOTRÁFICO

El procesamiento de la cocaína en los países andinos contiene dentro de sí una red de apoyo que va desde el conjunto de campesinos dedicados al cultivo de la coca, el cual se halla en los mismos parámetros que cualesquier otro tipo de producto agroindustrial, esto es fertilización, cuidado de plagas y control de calidad, procesamiento de la hoja hasta obtener el clorhidrato de cocaína y su distribución para el consumo interno de los países productores y exportación a los mercados europeos y norteamericanos.

El producto elaborado (cocaína) o semielaborado (PBC), se integra a un circuito de transporte intranacional e internacional, luego es almacenado en los distintos países vinculados a la narcoindustria, para su posterior distribución en los países consumidores. Los campesinos cocaleros (bolivianos, peruanos y colombianos) se encuentran en la base de esta pirámide industrial. Ellos pueden vender las hojas de coca secas a los agentes locales del narcotráfico o incluso mantener un laboratorio doméstico para el refinamiento de la hoja de coca hasta PBC, aunque es probable, que difícilmente estos cuentan con un laboratorio para refinar el producto, hasta cocaína.

En el caso del triángulo amazónico, los campesinos venden ya sea la hoja de coca o el PBC a los narcotraficantes zonales,

quienes compran los productos, ya sea para su almacenamiento, en el caso de la pasta básica o para su procesamiento, si son hojas. En este punto del proceso: en el caso de Perú el PBC es enviado hacia el territorio colombiano para su último refinamiento, procesamiento hasta clorhidrato *in situ* o es enviada a Lima en donde se estima que los narcotraficantes han desarrollado una sofisticada infraestructura de procesamiento, almacenaje y distribución.

Los químicos necesarios para el proceso son importados desde Europa. A pesar de las restricciones y controles de importación, estos llegan en la cantidad suficiente para abastecer las necesidades de la narcoindustria. Si bien hay precursores que no pueden ser sustituidos, la narcoindustria busca productos alternativos que se puedan incluir en el proceso sin alteraciones mayores del producto final, y de esta forma minimizar los controles de los organismos pertinentes. Este caso es el de la sosa cáustica o soda cáustica (NaOH), que en la zona del Putumayo es sustituido por cemento. Este producto es legal, no está sujeto a restricciones de ningún tipo, a no ser aquellas prohibiciones asentadas en los acuerdos binacionales de exportación importación (Ecuador-Colombia). Y en el caso de decomisos la pérdida económica es mínima, en comparación a los costos que significa la sosa cáustica.

A pesar de la dinámica del narcotráfico la mayor parte del PBC producido en Perú llega hasta Colombia para ser refinado y desde allí se distribuye a los mercados mundiales. No obstante, la estrategia actual de los narcotraficantes es modificar constantemente las rutas del transporte de PBC y buscar escenarios alternativos que dificulten el seguimiento del proceso y así reducir el riesgo a ser detectados.

En este numeral se pasa a describir las dimensiones de las plantaciones de las hojas de coca, los éxitos relativos en la gue-

rra al narcotráfico, en función del papel que: En el circuito de la narcoindustria el Ecuador se encuentra inserto marginalmente, no se puede precisar cuál es la verdadera magnitud de su participación.

Por un lado se conoce que este país está vinculado con el lavado de dólares, sin embargo, todos los datos disponibles apuntan a que esta actividad está sobredimensionada, y se ajusta lo que se ha denominado “inflación paranoica” (Páez, 1990). Esta inflación está guiada a insertarse plenamente a los beneficios económicos y políticos provenientes del apoyo de los EE.UU. a través de la “Certificación”.

Por otro lado a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana, según Romero (1990) se estima que existen siete vías de tránsito de precursores hacia Colombia, Rossi (1996) recoge de una u otra forma estos datos mencionando tres zonas críticas en la amazonia ecuatoriana: El San Miguel-Putumayo, provincia del Carchi y provincia de Esmeraldas. Estas líneas de paso, en función de los datos proporcionados por los dos autores mencionados están más allá de la hipótesis, a pesar de ello las fuentes proporcionadas son difusas, poco confiables o inexistentes.

Así se tiene que en el trabajo de Rossi (1996: 81), proporciona versiones sobre la existencia de cultivos en las zonas aledañas a la carretera Coca-Tigüino (vía Auca) y otras que dicen que los cultivos estarían camuflados selva adentro. No obstante, que la autora dice que, las informaciones son contradictorias, los organismos de control y medios de comunicación recalcan la peligrosidad de las zonas mencionadas, asociadas al narcotráfico.

Por observaciones directas en la zona comprendida entre la Vía Auca (Coca-Tigüino) y la vía Nueva Esperanza de Taracoa-Palanda (ramal de la carretera Coca-Nueva Esperanza de Taracoa) no se ha encontrado evidencia de cultivos de coca, el tra-

mado social de esta zona corresponde a campesinos propietarios de fincas de 40 ha. de promedio, quienes producen café (como principal producto). Se puede encontrar coca silvestre en las zonas donde la foresta no es intervenida y donde las condiciones ecológicas lo permiten, e incluso el aprovechamiento de esta con fines medicinales, de ahí a la existencia de plantaciones de coca en dimensiones lo suficientemente grandes para que estas sean rentables es otra.

Finalmente, desde las previsiones para 1999 de la Policía Nacional del Ecuador, el país pasaría a ser de simple zona de tránsito a productor, pues se han detectado laboratorios de alta capacidad de refinación, 500 kg. a la semana, según declaraciones del Comandante General de Policía, dadas en Washington-EE.UU. en el marco de la XVII Conferencia Internacional para el Control de Drogas. (*El Ecuador produce droga: Villarroel*, El Comercio, A6, 01/05/1999). Dichas afirmaciones pondrían en duda la “certificación” dada por los EE.UU. o por lo menos demostrarían falta de eficiencia por parte de los organismos norteamericanos responsables de dicha sanción.

En esta sección se ha incluido a datos sobre Bolivia, el objetivo de ello es aportar con elementos comparativos que ponderen y ubiquen de mejor manera la posición del Ecuador en el proceso narcoproductivo.

## 5.1. Plantaciones de coca

### Generalidades

En Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, según estimaciones de la Comisión Andina de Juristas y a través de datos parciales proporcionados por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs ([www.state.gov](http://www.state.gov)), el área de cultivos de

coca alcanza una extensión de 190.800 ha. Estos datos son proporcionados por los satélites espías de los EE.UU. y por los servicios de inteligencia de los organismos de control de los respectivos países (Cuadro 2., Gráfico 1 y Gráfico 2).

Las cifras para Bolivia y Perú muestran: para 1998 un decrecimiento porcentual del -17,39% y -25,87% respectivamente, Colombia un sustancial aumento aproximado del 28%, en relación a los reportes de 1997.

**Cuadro 2**  
**Hectáreas sembradas de coca en Bolivia,**  
**Colombia y Perú**

PAIS	1997	1998	± Δ%
BOLIVIA	46000	38000 <sup>1</sup>	-17.39
COLOMBIA	79500	101800	28.05
PERÚ	68800	51000	-25.87
ECUADOR	0	0	0
TOTAL	194300	190800	-1.80

Fuente: Comisión Andina de Juristas

Elaboración: FIAAM

Gráfico 1

Variación de hectáreas cultivadas de coca  
1997-1998

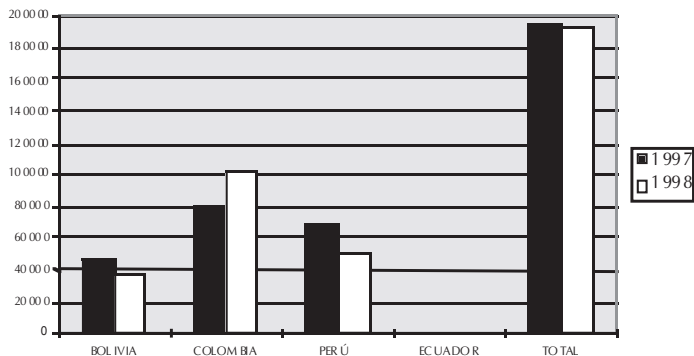
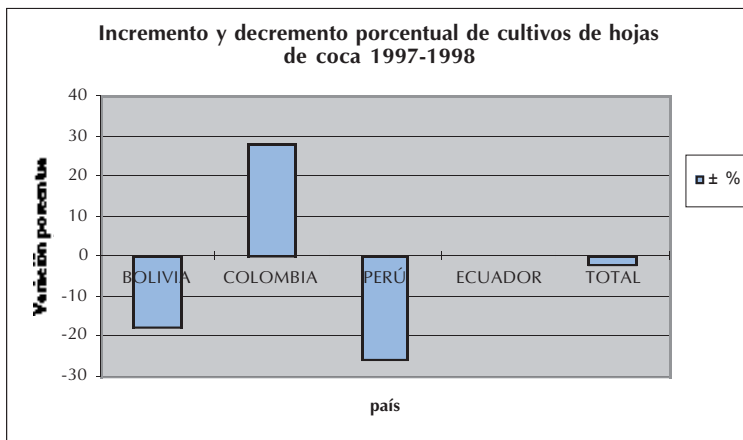


Gráfico 2

Incremento y decremento porcentual de cultivos de hojas  
de coca 1997-1998



Fuente: Comisión Andina de Juristas

Elaboración: FIAAM

Estas tendencias están condicionadas por los procesos políticos de los distintos países andinos, las estrategias de interdicción y la cooperación entre las distintas agencias antinarcóticos de los EE.UU. y aquellas pertenecientes a los países mencionados.

La reducción del área destinada a los cultivos ilegales es el resultado de los mecanismos de interdicción implementados a nivel regional; y en el caso colombiano, debido a las especificidades de la dinámica sociopolítica en la cual se halla inmersa. No obstante, a nivel total, hay un tímido éxito ponderado en una reducción global del 1.8% con respecto a 1997 (ver: Cuadro 1 y Gráfico 2).

## **Bolivia**

En el caso de Bolivia (cuenta actualmente con una extensión neta de 38 mil hectáreas), si la tendencia en la reducción de cultivos se mantienen, se espera que para el año 2002 los cultivos de coca destinados al mercado ilegal llegarán a cero, sin contar aquellos cultivos destinados al consumo “tradicional” y “ritual” de los bolivianos. Para Bánzer, jefe de Gobierno de Bolivia, la erradicación de los cultivos ilegales es un ejercicio de “Dignidad Nacional” frente a la comunidad mundial.

El “Plan Dignidad” necesita 952 millones de dólares americanos. De este monto el 84% (800 millones) son producto de donaciones y el restante 16% (150 millones) son cubiertos por el Estado boliviano.<sup>2</sup> Para alcanzar esta meta, 700 millones se dedicarán al “desarrollo alternativo”, más del 73% del monto serían destinados para ser invertidos en la población campesina involucrada en la producción de hojas de coca.

Sin embargo, los mecanismos de persuasión para que los campesinos erradiquen los cocales e implementen otros cultivos

no es claro. En este contexto, de sustitución de cultivos e implementación de políticas para el desarrollo alternativo, en 1998 ocurrieron enfrentamientos entre el Ejército boliviano y los campesinos cocaleros. Procedimientos que enfatizaron el uso de la fuerza y la represión a los grupos insertos en la actividad agroproductora. La opción actual, para los campesinos cocaleros, es aceptar la erradicación de los cultivos y las condiciones impuestas por el Gobierno o enfrentarse de manera abierta y en desventaja a los organismos y fuerzas de seguridad y control.

En este proceso, inicialmente los cocales son sustituidos por piñas y zanahorias y los campesinos dueños de las parcelas reciben compensaciones monetarias, pero los recursos pecuniaros que se desprenden de las nuevas actividades agrícolas son bastante menores a los obtenidos por la venta de las hojas de coca, y simultáneamente, las zonas de alta producción de hojas de coca (Chapare) dedicadas para la narcoindustria, son fuertemente militarizadas.

En el caso de los cultivos de coca destinados para el consumo tradicional, concentrados en la zona de las Yungas una extensión de 14 mil hectáreas. De las 14 mil hectáreas que existen actualmente, se mantendrían 12 mil hectáreas de manera legal (Ley 1008 de la República de Bolivia). Los cultivos excedentes tendrán que ser erradicados, pero a diferencia de la zona del Chapare, esta tarea estará a cargo de los mismos campesinos (ver Cuadro 3 y Gráfico 3).

Los escenarios que se esperan en los próximos años, según organismos antinarcóticos bolivianos y norteamericanos, son de alta conflictividad. Pues, a pesar de la existencia de una planificación (la cual incluye programas y proyectos específicos), la asistencia técnica y económica para el éxito de la erradicación, guiada a que la misma no sea traumática, no hay garantía de éxito. Y si esta planificación no alcanza los resultados esperados,

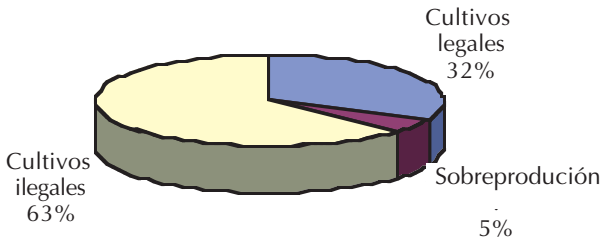


siempre existe la opción de utilizar la fuerza desde el Estado para cumplir las metas propuestas.

**Cuadro 3**  
**Extensión de cultivos de coca en la zona del Chapare (Bolivia)**

	# de hectáreas
Cultivos legales	12000
Sobreproducción legal	2000
Cultivos ilegales	24000
Total	38000

**Gráfico 3**  
**Cultivos legales e ilegales en Bolivia (1998)**



Fuente: Comisión Andina de Juristas

Elaboración: FIAAM

## Colombia

Colombia es el principal productor de coca en el mundo, produce el 53% de las hojas necesarias para alimentar el sistema. A partir de estas estimaciones la extensión que se calcula para Colombia llegarían a las 101.800 ha. La variedad de coca colombiana es considerada de bajo rendimiento. Sin embargo, estas son sustituidas con variedades de alto rendimiento procedentes de Bolivia y Perú (*Epadudu* y *Tingu María*), sobre todo en las regiones del sudeste colombiano (Putumayo y Caquetá).

Los campos cocaleros del Putumayo y Caquetá en la actualidad conforman un solo bloque, nuevos cultivos han aparecido al sur del departamento de Bolívar y en el norte de Santander. Cultivos que están acompañados de un sistema de soporte agroindustrial que garantizan abastecimientos futuros. Los datos proporcionados por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (1999) en sus cuadros estadísticos, en lo referente a la extensión de los cocales, no son confiables, pues la dinámica experimentada en 1998 ha superado sus previsiones. Extensiones de cultivos de opio y marihuana se suman al problema global de la narcoindustria.

La lógica de la narcoindustria sumada a la dinámica socio-cultural, política y económica desprendida de su proceso histórico socializado en la violencia de cincuenta años atrás, acompañada por la irrupción de actores altamente violentistas (narcotraficantes, guerrilla, paramilitares y Estado) ha configurado un escenario de institucionalidades y parainstitucionalidades, que pugnan por acumular poder, fenómeno expresado en la capacidad de controlar las diversas zonas y regiones de la geografía colombiana de manera cuasi soberana. Fragmentación que dificulta los esfuerzos para controlar el crecimiento de los cultivos ilegales.

Los esfuerzos de la administración de gobierno de Pastrana se han concentrado en las negociaciones de paz con la guerrilla (las FARC principalmente). Estas persiguen, relacionar, de manera coordinada, la lucha para erradicación de cultivos de coca, a las negociaciones de paz (Proceso de Paz). El éxito del Proceso implicaría la desmovilización de miles de guerrilleros y la inserción de estos y los campesinos cocaleros involucrados, en actividades productivas alternativas. En la medida que estas alternativas sean viables, el objetivo paz puede ser funcional y operativo.

La posición de los EE.UU. al respecto, emitida a través Peter Romero (funcionario del Departamento de Estado, EE.UU.) dice que: su país apoya la iniciativa de Paz de Andrés Pastrana, y en la medida que estas negociaciones alcancen el éxito esperado, su país contempla la posibilidad de verter una cierta cantidad de recursos financieros necesarios para que la erradicación llegue a buen fin. Sin embargo, este potencial apoyo está condicionado a que las FARC dejen de ser parte de los eslabones de la narcointustria, ya que estas fuerzas contestatarias están íntimamente ligadas al cuidado de plantaciones y laboratorios. (Semana..)

Independientemente del éxito o fracaso del Proceso de Paz en Colombia, los EE.UU siguen manteniendo sus estrategias, políticas y mecanismos de interdicción en la guerra contra las drogas. Argumentando como punto central que el tráfico de sustancias ilegales es un punto importantísimo para su seguridad nacional. Según Madeleine Albright, secretaria del Departamento de Estado de los EE.UU.:

*El consumo de drogas y el perjuicio que éste le causa a la sociedad norteamericana sigue siendo una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos. La reducción del tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos es un objetivo principal de seguridad nacional de la administración Clinton. La importancia de esta tarea es tan grande que no*

*puede subestimarse y no disminuirá hasta que haya desaparecido la amenaza que representa el comercio de narcóticos para nuestra seguridad nacional y nuestra salud pública. (Entrevista: Madeleine Albright, revista Semana, Edición # 872, 01/18/1999).*

Para la Secretaria de Estado, el narcotráfico no solo es un problema de seguridad nacional para los EE.UU., sino también para Colombia. Y en este mismo sentido respecto a las FARC, y aparte del éxito o fracaso de las negociaciones de Paz, dice tajantemente: [...] **los esfuerzos antinarcóticos bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, incluyendo la fumigación aérea, no son negociables y continuarán [...]**<sup>3</sup>

En este mismo sentido Benjamin Gilman, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de EE.UU., en una entrevista a la revista Semana afirmó que:

*Si las guerrillas están involucradas en tráfico de narcóticos nosotros no vamos a trazar una línea y decir estas guerrillas son las rebeldes que están combatiendo por la revolución y estas son las guerrillas envueltas en narcotráfico. Si están involucradas con el narcotráfico nosotros los vamos a tratar a todos igual. [...] Si ellos están produciendo y sirviendo de guardia a los narcotraficantes y ayudándoles a llevar tal oferta fuera de Colombia, nosotros vamos a apoyar los esfuerzos de la Policía para contrarrestarlos. (Entrevista: Benjamin Gilman, revista Semana, Edición # 858. 10/12/1998).*

La problemática colombiana del narcotráfico es simultánea con la violencia social y política, la paz no puede ser pensada en un solo sentido o excluyendo a ninguno de los actores involucrados. Sin embargo, los intereses o voracidades de las distintas órbitas de poder y las prioridades del control internacional an-

tidroga, pueden chocar en el proceso de negociación, lo que traería como secuela la intensificación de la violencia y en función de ésta, el debilitamiento de los organismos de control colombiano y ausencia de los mismos en extensas zonas de su geografía.

Situación política colombiana altamente explosiva, que se expresa en: el estado de guerra interna; el poder acumulado de la guerrilla y su confluencia violenta con el narcotráfico y paramilitares (grupos de autodefensa campesina). Para el Estado y los grupos de autodefensas su antagonista político-militar es la guerrilla. Los grupos de autodefensa están imbuidos de un discurso nacionalista y mantienen una posición ambigua frente al narcotráfico; elementos, que desde la perspectiva de la Agenda de Seguridad de los EE.UU. representa una amenaza de dimensión nacional y por las derivaciones políticas en el contexto regional un problema de seguridad hemisférica ante la amenaza de la irrupción de un movimiento de izquierda, combatientes activos supervivientes de la Guerra fría.

## **Perú**

En Perú se estima que para 1999 existen 51 mil hectáreas de coca (esta extensión implica 240 tm. de producción potencial de cocaína), con relación a 1997 hay una reducción del 25.87%. En el lapso 1995-1998 existe una reducción del 56% de la extensión de cultivos ilegales. Para 1995 se estimaron 115.300 ha., en 1999 los cálculos ponderan la existencia de 51.000 ha. Cuadro 4.- (Comisión Andina de Juristas, 1999; Bureau of International Narcotics Law Enforcement, 1999).

**Cuadro 4**  
**Reducción de cocales 1995-1998 y 1997-1998**

Año	Reducción # hectáreas	Reducción porcentual
1995	115.300	
1998	51.000	
Variación trianual	64.300	-55.76%
1997	68.800	
1998	51.000	
Total reducido	17.800	-25.87%

Elaboración: FIAAM

Fuente: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

De las 17.800 ha. fueron eliminadas: por erradicación 56.04% (9.975 ha.), el restante 43.96% (7.825 ha.) fueron abandonadas debido a las estrategias de interdicción y control, las que lograron bajar el precio de la hoja de coca y de PBC, por lo que el costo de producción de las hojas fue superior a los precios del mercado. En el plan elaborado en 1997, por el Gobierno peruano, se planteó eliminar el 50% de su extensión cultivada hasta el año 2001 y en 10 años eliminar el 100% de las plantaciones ilegales.

**Cuadro 5**  
**Reducción de cocales en Perú (1997-1998)**

	# hectáreas	%
Cocales erradicados	9.975	56.04%
Cocales abandonado	7.825	43.96%
<b>Total</b>	<b>17.800</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Bureau International of Narcotics and Law Enforcement Affairs

Elaboración: FIAAM

El programa de erradicación está acompañado de presiones constantes a las organizaciones narcotraficantes, infraestructura de transportación y al estricto y agresivo control del espacio aéreo, al interceptar o derribar toda aeronave sospechosa de transportar PBC o cocaína, lo que ha desembocado en una reducción de los precios de coca y como tal el abandono de las plantaciones por parte de los campesinos cocaleros y/o por los traficantes. Esta situación ha permitido que más campesinos se sumen a los programas de cultivos y desarrollo alternativos.

Sin embargo, a pesar de esta estrategia agresiva que para el Perú significa el reconocimiento internacional y principalmente de los EE.UU., por su eficiente lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, a más del incremento de recursos monetarios necesarios para financiar sus programas de interdicción y sustitución, en la práctica los precios por kilogramo de hoja seca de coca han tenido un repunte y los cocales abandonados son reactivados.

Por otro lado el éxito relativo en las acciones antinarcóticos estuvo acompañado por el desmantelamiento de los grupos armados peruanos SL y MRTA, quienes eran fuertes en las zonas cocaleras (Alto Huallaga), lo que ha permitido al gobierno de Fujimori concentrar a los organismos estatales de control hacia

la guerra contra las drogas. Para el Gobierno peruano, la prioridad en su momento fue dismantelar o eliminar a los movimientos armados peruanos, una vez cumplido este objetivo, pasaba a ser prioridad la guerra contra el narcotráfico (Páez, 1990). Es así que a partir de 1992, una vez que Fujimori se consolida en el poder, después de disolver el Congreso y con los éxitos militar y político, que representó la captura de Abimael Guzmán, 1992, y la consiguiente desactivación de SL, frente a la comunidad internacional sus logros se demuestran en función de lo obtenido a favor de la lucha antinarcóticos.

A pesar de los éxitos señalados, se han reactivado los cultivos abandonados, lo que implica que los campesinos retornaron a sus prácticas agrícolas, permite visualizar que los programas de erradicación y sustitución no son tan efectivos, lo que puede implicar un cambio en las estrategias de eliminación a través de la utilización de mecanismos policiales. Si bien los movimientos armados contestatarios, por lo pronto están desactivados o desarticulados, estos pueden reconstituirse nuevamente en las zonas cocaleras, lugar donde surgieron, en donde estos aparecieron y en donde se localizan bases sociales, que eventualmente les prestarían su apoyo a dichos grupos armados. En los próximos años el conflicto estará presente, si la sustitución de cultivos no representa una alternativa económica y políticamente válida para los campesinos.

## **Ecuador**

Ecuador, en lo referente al narcotráfico, en el contexto andino probablemente mantiene mínimas extensiones de marihuana, coca y opio, sin embargo, estas extensiones no se comparan con aquellas existentes en Bolivia, Colombia y Perú. Extensiones de cultivos ilícitos casi despreciables, en proporción. Según las agencias antinarcóticos de los EE.UU. y los organismos



especializados, el Ecuador se vincula al sistema coca-cocaína, en el abastecimiento de precursores químicos a Colombia por distintas vías ubicadas a lo largo de la frontera común; y, es país de tránsito de PBC hacia Colombia o al norte del Perú.

El territorio ecuatoriano sirve de puente para el paso de cocaína hacia los mercados internacionales, o ruta hacia Centroamérica, Méjico, Brasil, entre otras tantas líneas de flujo de la cocaína destinada a los mercados norteamericanos y europeos. Las principales vías para el transporte de PBC o cocaína son: la carretera Panamericana, los puertos de Manta y Guayaquil y los aeropuertos internacionales utilizados por traficantes de pequeña escala, quienes tienen como objetivo llevar la mercancía a Europa y Norteamérica.

## 5.2. Ecuador en los volúmenes de la narcoindustria

Desprendido de los datos de las extensiones de cultivos de hojas de coca, los organismos especializados dicen que los países andinos estarían en capacidad de producir una masa potencial de 555 toneladas de cocaína. De esta producción potencial, en 1998 fueron decomisados 118.62 toneladas. En porcentaje, se ha capturado aproximadamente el 21.40% del estimado de la producción global.

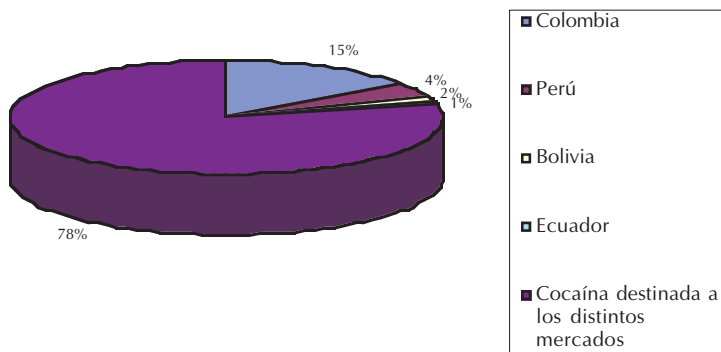
Ecuador en estas cifras ha capturado 3.9 t. de cocaína y PBC que en porcentaje representa el 0.7% del total de la producción estimada de cocaína (555 t.) y el 3.3% de las capturas a nivel regional (118.62 t.). Las capturas más significativas se han realizado en Colombia (70.8%), Perú (18.04%) y Bolivia (7.85%). A pesar de la masa capturada, el 78.63% se distribuye en los distintos mercados consumidores (Europa y EE.UU.), es decir un estimado de 436.4 t. que burlan los controles de los países andinos

**Cuadro 6**  
**Cocaína capturada 1998 en los países andinos**

	% con respecto a las capturas por organismos de control	% con respecto al total de producción estimada
Colombia	70.80	15.14
Perú	18.04	3.85
Bolivia	7.85	1.70
Ecuador	3.30	0.70
Cocaína destinada a los distintos mercados		78.63

**Gráfico 4**

**Cocaína enviada a los mercados consumidores versus capturas en los países andinos**



Fuente: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  
Elaboración: FIAAM

Los éxitos en la lucha contra el narcotráfico expresado en capturas de cocaína, arrestos, decomiso de precursores, erradicación de cocales, y más condiciona el nivel de ayuda económica a los países andinos, montos que están en consonancia con la importancia que los EE.UU. dan a la problemática del narcotráfico, dependiendo de la situación específica y el papel que desempeñan los estados involucrados en el sistema de la narcoindustria.

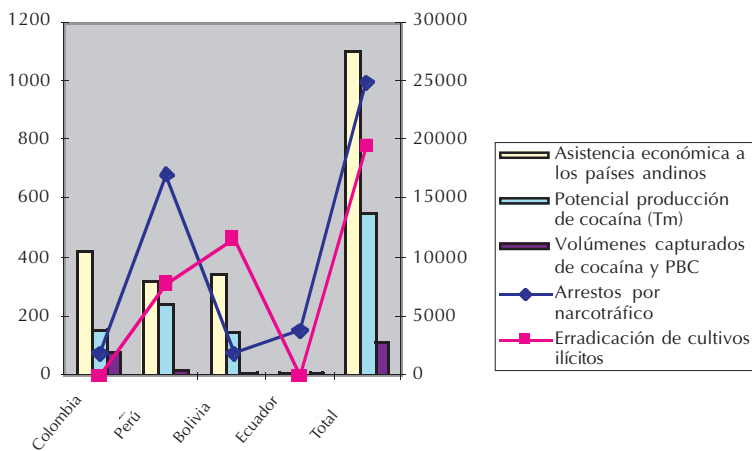
**Cuadro 7**  
**Relación producción potencial, asistencia económica**  
**y logros de interdicción (1998)**

	Colombia	Perú	Bolivia	Ecuador	Total
Potencial producción de cocaína (t)	165.00	240.00	150.00	.3	555.00
Asistencia económica a los países andinos (miles US\$)	43000.00	32000.00	35000.00	500.00	110500.00
Volúmenes capturados de cocaína y PBC	84.00	21.40	9.32	3.9	118.62
Erradicación de cultivos ilícitos	-	7825.00	11620.00	0.00 <sup>4</sup>	19445.00
Arrestos por narcotráfico	1961.00	17067.00	1926.00	3888.00	24842.00

Fuente: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  
Elaboración: FIAAM

**Gráfico 5**

**Eficacia en la lucha antinarcótica ; en los países andinos**



En función de los montos destinados a los países andinos, Colombia ocupa el primer lugar en importancia, la asistencia económica en 1998 alcanzó la cifra de 43 millones de dólares, decomisó 84 t. de cocaína y PBC. En cuanto a la erradicación, no hay cifras disponibles que se puedan ponderar adecuadamente, así se estima que por fumigación aérea se destruyeron alrededor de 36 mil hectáreas, no obstante, esta estrategia parece ser ineficiente. Por otro lado, para sostener que las campañas de erradicación de cultivos vía aspersión aérea de herbicidas son exitosas, se dice que los cocales crecieron en zonas en donde no se realizaron.

Los montos que se proyectan entregar hasta el año 2000 a los distintos países es directamente proporcional al cuadro general que estos países tienen respecto de la problemática narcotráfico, sujeto a previsiones y proyecciones realizadas por las agencias antinarcóticas. Es totalmente previsible que la asistencia crecerá en todos los países andinos, según cifras disponibles.

Crecimiento limitado, en proporción a los éxitos logrados por cada país, en erradicación, capturas y desmantelamiento en general del sistema narcoindustrial. Un indicador de la prioridad que el Departamento de Estado da a los países insertos en el narcotráfico es el Fondo de Emergencia para 1999, en el cual Colombia ocupa la prioridad, para el Ecuador no existe este rubro (Cuadro 8).

En esta perspectiva se observa según el Cuadro 8, que la prioridad para los EE.UU. es Colombia, pues este es el escenario donde el control político y las estrategias de interdicción escapan a la capacidad de acción del Estado colombiano. Desde la óptica norteamericana, quienes cuentan con todas las herramientas de evaluación, monitoreo y la capacidad operativa de intervención directa e indirecta en las zonas críticas tampoco pueden intervenir en ellas, pues la inalienable soberanía del Estado colombiano impide una intervención directa.

### **Cuadro 8**

#### **Asistencia económica: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (1998, 1999, 2000)**

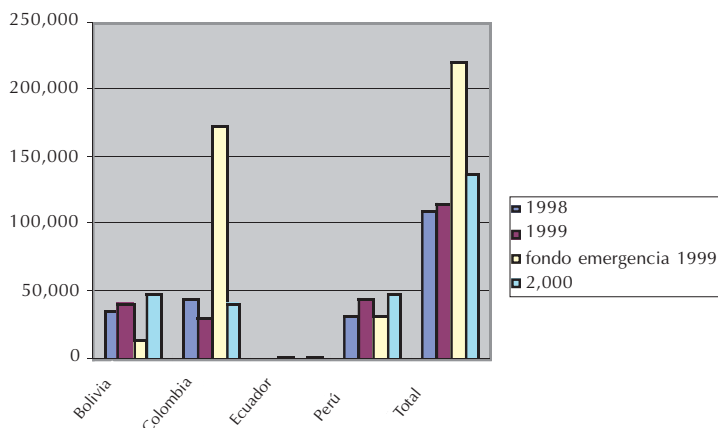
	1998 miles de US\$	1999	Fondo Emergencia 1999	2,000
Bolivia	35,000	40,000	14,000	48,000
Colombia	43,000	30,000	173,160	40,000
Ecuador	500	1,200	—	1,200
Perú	32,000	45,000	31,940	48,000
<b>TOTAL</b>	<b>110,500</b>	<b>116,200</b>	<b>219,100</b>	<b>137,200</b>

Fuente: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Elaboración: FIAAM

**Gráfico 6**

**Asistencia económica a los países andinos: 1998, 1999 y proyecciones al 2000**



En el caso concreto del Ecuador, la asistencia económica norteamericana se incrementará 2.4 veces (500 mil a 1.2 millones de dólares), elevación que en términos comparativos con el monto total de ayuda o con el estimado que se concentrará en Colombia no deja de ser una cantidad baja.

La existencia de plantaciones no está suficientemente estudiada, los organismos de control para 1999 hablan que Ecuador ha dejado de ser país de tránsito y ha pasado a ser productor, no obstante, desde la óptica de los EE.UU. en función de las cifras de ayuda y asistencia en la lucha contra las drogas, Ecuador no representa mayor problema. La existencia de cultivos de coca es marginal.

En los países de la subregión andina, la mayor cantidad de laboratorios destruidos y/o intervenidos, para 1998, fue en territorio colombiano (Cuadro 9). Esta relación de éxitos en la des-

trucción de laboratorios, la declaración de Villarroel, comandante general de Policía, refirió a dos.

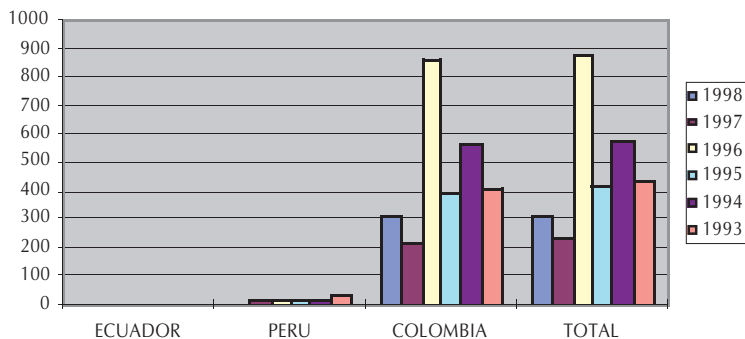
La localización estimada de los laboratorios de procesamiento de PBC/cocaína en el Ecuador son la provincias de Esmeraldas y Sucumbíos. Al parecer, estos son de pequeña escala, no obstante, se tiene referencias del desmantelamiento de un laboratorio de gran capacidad de procesamiento ubicado en Esmeraldas, con una capacidad de 500 kg. semanales.

**Cuadro 7**  
**Laboratorios destruidos: Ecuador, Perú, Colombia**

	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
<b>ECUADOR</b>									
TOTAL	2	0	1	0	0	0	0	4	1
<b>PERÚ</b>									
BASE Y HCl	-	18	14	21	21	38	88	89	151
HCl	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL	0	18	14	21	21	38	88	89	151
<b>COLOMBIA</b>									
BASE Y									
HCl	311	213	861	396	560	401	224	239	269
Morfina/ heroína	10	9	9	11	9	10	7	5	-
TOTAL	321	223	870	407	569	411	231	244	269

Fuente: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Elaboración: FIAAM

**Gráfico 7****Laboratorios destruidos(PBC/HCl) | 1993-1998****5.3. Exitos contra el narcotráfico**

Los éxitos de los programas de lucha en contra del narcotráfico son palpables en Perú y Bolivia, sin embargo, el repunte de la producción colombiana en promedio, para 1998, ha significado una reducción del 1.8% del total. A pesar, que los organismos de Naciones Unidas prevén la eliminación de los cultivos ilegales de coca para el 2010, la realidad en los países andinos es distinta. Colombia ha incrementado la extensión de las hojas de coca, se ubica como productor de opio, y exporta el 80% de la heroína que se consume en la costa noreste de los EE.UU. Las extensiones de cultivos de marihuana también se han incrementado.

Un indicador del repunte de la producción de marihuana en Colombia, es el decomiso y captura, en Ecuador, de más de 17 t. de marihuana. Por otro lado, según Castro (1997) dice que desde mediados de la década del ochenta se detectaron plantíos de amapola en Colombia, pero no es hasta 1991 cuando estos son rentables –aproximadamente 20 mil hectáreas- y que las



plantaciones de marihuana se han incrementado espectacularmente desde 1993.

A pesar de los mecanismos de interdicción implementados por Perú, los que lograron reducir el precio del kilogramo de hojas de coca secas, y consecuentemente el abandono de cocaleros e integración de campesinos en otras actividades productivas, los precios se han incrementado. Los expertos del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (1999) \* (fn) [www.state.gov](http://www.state.gov) atribuyen el incremento, entre otros factores, a:

- La guerra en Colombia entre el Ejército y las FARC y entre éstas y los paramilitares, que lleva a algunos grupos mafiosos a instalarse nuevamente a lo largo de las fronteras peruana y boliviana para comprar la producción de estos países;
- el alza internacional de la demanda, en particular debido a la apertura de nuevos mercados en Europa del Este, África austral y Asia Pacífico;
- el rápido aumento del consumo de cocaína bajo todas sus formas en varios países de América Latina;
- la apertura de nuevas rutas de transporte hacia los mercados norteamericanos y europeos; y,
- probablemente, la consolidación de una red moderna de refinamiento de cocaína en territorio peruano, en particular en Lima.

Es decir que el narcotráfico no solo se desarrolla en zonas geográficamente aisladas y alejadas del poder central del Estado, sino que esta dinámica se traslada a contextos urbanos. Y en otro sentido el repunte de los precios es atribuible al fracaso de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que no empatan con la realidad simbólica, social, económica y política de los campesinos cocaleros, quienes se enfrentan a nuevas actividades

agrícolas que choca con su comportamiento, actitud y práctica, socialmente reconocida, vinculada a la narcoindustria.

Si se compara la relación existente, para 1998, entre el total de las capturas de cocaína y PBC en los países andinos (118.62 t) y la potencial producción de estos (555 t.); el éxito de los organismos de seguridad se halla en un 21.4%, es decir una proporción de 9 a 2: por cada 9 toneladas que salen a la exportación a Europa y Norteamérica o dedicadas al consumo interno de los países latinoamericanos solo 2 son capturadas.

Los éxitos que se presentan en documentos oficiales de organismos internacionales y los esfuerzos de los cuerpos de seguridad de los distintos países productores estaría lejos de ser clasificado como eficiente, aunque la publicidad que se da a su labor si es eficaz, pues proyecta una imagen de solvencia ante la opinión pública nacional, regional e internacional, legitima flujos económicos, alianzas estratégicas, apoyos políticos, entre otros beneficios desprendidos, a los cuales se acogen los gobiernos y sistema institucional de los países productores.

Una de las previsiones del “Zar antidrogas” McCaffrey, es la reducción de la exportación del clorhidrato de cocaína hacia los EE.UU en los siguientes años debido al incremento del consumo de “drogas de diseño” y en especial derivados de la “metanfetamina”, conocidas en el mercado como “ecstasy”, “crank”, “ice”, “crystal” y otros cócteles como el “club”, etc.<sup>6</sup>. Reducción de las exportaciones hacia los EE.UU. que está acompañada por las estrategias de interdicción implementados unilateral, bilateral o multilateralmente con los países productores.

No obstante, los efectos derivados de la reducción de las exportaciones, por la sustitución de la droga consumida en EE.UU. y Europa, y por la sustitución de cultivos ilícitos por otros legales es de difícil visualización:

Primero por los efectos desprendidos de la interdicción sobre las poblaciones campesinas, el cual no está exento de situaciones conflictivas, aun cuando este cambio productivo sea voluntario, pues al interior del nuevo régimen productivo existirá un reordenamiento de la lógica productiva, nueva segmentación social en base al modelo de desarrollo asumido o impuesto, y coextensivamente, el apareamiento de distintas líneas jerárquicas y catalizadores sociales funcionales al nuevo orden socioeconómico, pues son precisamente las zonas cocaleras en donde el Estado no tiene una presencia definida o se halla deformada.

El éxito o los éxitos de aquellos programas alternativos tienen su conquista, fundamentalmente, en libros contables y en la manera como éstos se realcen a través de campañas publicitarias locales e internacionales. Ya que por la experiencia en la aplicación de programas de desarrollo, éstos se mantienen equilibrados en la medida que los recursos económicos y asistencia técnica sean constantes. Una vez que la asistencia se termine, la sostenibilidad de los distintos proyectos se verán inmersos en la crisis del mercado interno e internacional o tendrán que ser subvencionados, ¿quién pagará el subsidio?

Las denominadas Asistencias Técnicas Internacionales (ATI) han implementado una serie de propuestas y proyectos “alternativos”, con la finalidad de proporcionar al usuario de las mismas, una “real opción económica”. Pero, si al implementar, en las poblaciones meta, el cambio o mejoramiento de sus condiciones de vida con productos económicamente no rentables o ineficientes, en contraste con otros que tienen alto potencial económico, productivo, y que se hallan insertos en las posibilidades agroecológicas de la zona en concreto, las intervenciones a mediano fracasarían pues estas no serían una opción que se vincule a sus economías de subsistencia.

La mayoría de estos proyectos de las ATI, de tinte desarrollista y alternativo (¿para quién?), tanto en el mundo andino como en la amazonia se basa en el supuesto fundamental relacionado con: el fortalecimiento de la organización, el empoderamiento (género, étnicas, etc.), la acción participativa de los involucrados y la posibilidad cierta de la autogestión, premisas que serían el sustento para los cambios en el comportamiento productivo. Entonces hay que preguntarse: ¿Es esa la real dimensión de los posibles cambios?, puesto, que por lo que se conoce de estos programas, únicamente han sido exitosos en su primera fase, en tanto y en cuanto están vinculados directamente a los recursos proporcionados por los mencionados organismos.

La dotación de infraestructura, implementación de circuitos comerciales internos, vínculos con mercados internacionales, capacitación y entrenamiento para que los beneficiarios sean los que negocien e intermedien sus productos son constantes en los procesos de desarrollo. Ya que se piensa, que si los campesinos están fortalecidos organizacional y políticamente, serán conscientes de los beneficios del cambio económico, y por lo tanto las grandes fuentes de financiamiento externo empiezan ha ser retirados.

Los recursos se terminan: punto en que los circuitos comerciales entran en crisis y los campesinos retornan y retoman las anteriores lógicas de producción. Es decir, es un retroceso que les conllevaría a buscar nuevas fuentes de real ingreso económico, sean éstas vinculadas a productos ilícitos o no. Esta rápida relación se da en situaciones donde el nuevo producto y las nuevas prácticas, en teoría son más rentable que las anteriores. En el caso del cultivo de hojas de coca difícilmente se sustituirá por un producto que sea igual o más rentable.

Una de las causas más dramáticas para que los cultivos no se eliminen debido a que el mayor mercado potencial para el

consumo de cocaína es el de América Latina. Todas las capitales latinoamericanas son el espacio propicio para que se incremente el consumo de base o cocaína o el consumo de los derivados del opio o marihuana. Y si en los EE.UU. se sustituye el consumo de cocaína por otras drogas de diseño, estas, aunque en menor escala también se consumirán en los países latinoamericanos y fundamentalmente en sus principales urbes.

Finalmente, se debe señalar que los éxitos alcanzados sean por efectos de la captura de precursores, control de lavado de dinero, interdicción y/o erradicación, está mediatizada por los distintos niveles de corrupción existentes en los organismos de control estatal y círculos políticos de los distintos países involucrados, así se tiene como evidencias: el financiamiento de campañas electorales con dinero proveniente del narcotráfico (Colombia), captura de droga en buques y aviones de guerra (Perú, Bolivia), corrupción de jueces (Colombia, Perú, Bolivia), complicidad de Policía y militares (por acción u omisión), entre otras relaciones que se pueden señalar entre el tráfico internacional de drogas y los distintos aparatos de control, justicia o políticos de los estados (Soberón, 1997).

## Notas:

- 1 Esta extensión incluye aproximadamente 14 mil hectáreas destinadas al consumo tradicional de los bolivianos
- 2 Presupuesto del Plan Dignidad. Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 1999 - 2002 (en millones US\$)

Rubro	Monto	%
Desarrollo Alternativo	700	73.52
Interdicción	129	13.55
Erradicación	108	11.34
Prevención y Rehabilitación	15	1.58
TOTAL	US\$ 952	100.00

Fuente: Comisión Andina de Juristas.

- 3 Parte de los esfuerzos de erradicación del Gobierno colombiano, con auspicio norteamericano es arrojar herbicidas en las zonas cocalleras, no obstante, el éxito pro-

clamado, en la práctica las extensiones de coca se han incrementado sustancialmente, por lo que, al parecer, la aspersión de herbicidas no es efectiva, a pesar de ello Albright enfatiza que este *ítem* no es negociable dentro del Proceso de Paz (ni para las FARC ni para el Gobierno colombiano).

- 4 No hay registros confiables sobre la extensión de cultivos ilícitos, se presume que existen éstos en el territorio ecuatoriano, pero su extensión no ha sido ponderada adecuadamente ni por los organismos de control del Ecuador ni por los organismos antinarcóticos internacionales, sin embargo, en proporción a los países vecinos, el área cultivada en Ecuador no tiene mayor trascendencia. Tampoco hay reportes de plantaciones erradicadas.
- 5 En la mayoría de los casos no se diferencia entre arrestos a consumidores y a individuos realmente vinculados con el narcotráfico.
- 6 Los derivados de la metanfetamina y en especial el ecstasy o MDMA (methylenedioxymethamphetamine) pueden ser considerados como alucinógeno y estimulante, ellos inducen a la producción de serotonina. Existen otras drogas de diseño, no comúnmente usadas, las que tienen efectos parecidos. Estas drogas son conocidas como “club”, porque son frecuentemente usadas en grupo. Estas drogas incluyen en la mezcla: Rohypnol, GHB y ketamina (los dos primeros son sedativos fuertes diversos y la ketamina es alucinógeno).

51. *El león y el asno cazan juntos (Hsr. 156, Ch. 208)*  
*El león y el asno una vez que se hicieron comandita*  
*salieron de caza. Llegados a una cueva que había*  
*cabras monteses, el león se puso a la entrada para acechar a las que salieran, el*  
*asno entró y se puso a dar saltos y rebuznar para asustarlos.*  
*Y el león dijo: “Pues ten bien seguro que yo mismo habría*  
*sentido miedo de no saber que eras un asno”.*  
*Así, los que fanfarronean delante de quienes*  
*lo conocen se prestan, naturalmente, al ridículo.*  
(ESOPPO, *Fábulas*, Planeta DeAgostini, Barcelona, 1997, P: 90)

## 6. INFORMACIÓN Y PARANOIA

La región del Putumayo, en la década del noventa, ha sido relacionada con toda la problemática del narcotráfico, desde la información de prensa, a la frontera común colombo-ecuatoriana, se la prefigura como una línea vulnerable para la estabilidad social y política del Ecuador, debido a la permeabilidad de la misma, al poder económico de los narcotraficantes y la amenaza de la guerrilla, factores que en conjunto representan un fenómeno que mina la soberanía del Estado. En el lapso mencionado se identifican cuatro momentos críticos que llamaron la atención de la prensa y han condicionado el funcionamiento socioeconómico de la zona:

I) El 7 de noviembre de 1992 las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC asaltaron el puesto policial de Orito (Colombia), el saldo en vidas de la acción fue 26 policías, a partir de esto el Ejército colombiano empezó una persecución implacable a los guerrilleros. Los guerrilleros se dirigieron en dirección sur (frontera ecuatoriana, zona del Putumayo). Como consecuencia de esto el Ejército ecuatoriano se puso en estado de alerta a lo

largo de los 100 km. de frontera crítica, para impedir posibles infiltraciones de subversivos.

Los pobladores de Puerto El Carmen y aquellos asentados a lo largo de la ribera del Putumayo, también entraron en estado de alerta, ya que a partir del incremento de patrullas y control, ellos esperaban igual presión hacia sus personas y bienes. El ingreso de guerrilleros, al parecer, no se dio en la medida en que las notas de prensa anunciaban. Y si el paso de guerrilleros ocurrió, en términos de uno de los informantes (ecuatoriano) de Puerto El Carmen, quien dijo:

*[...] los manes no son tan cojudos para pasarse cuando hay bronca, además ellos siempre se pasan cuando quieren haya o no haya control [...] si están enverracados, en todo caso los de control [inteligencia militar] están conversando y hasta pegándose las cervezas [...] aquí todos sabemos lo de todos [...]*

Oficiales ecuatorianos al referirse a los pobladores de la zona admiten que en el Ecuador hay indicios de grupos subversivos armados en la región. Estos indicios son estudiados por Inteligencia militar. **“De lo que estamos seguros es que esos movimientos no buscan el desarrollo del país”** según palabras del Gral. Carlomagno Andrade (en su momento Comandante General del Ejército ecuatoriano, fallecido en un accidente aéreo), no obstante, añade que: **“los mejores aliados del soldado ecuatoriano es la población civil del lugar.”** (Pallares, Martín, *Patrullaje*, HOY, C1, 9/12/92).

Es sintomática la declaración de la cúpula militar, en ese momento, pues ellos identifican ya, elementos de fricción social que han sido generados en virtud de procesos historico-estructurales de los países respectivos. Es una zona de constante flujo migratorio que escapa al control de las instituciones respectivas.



También en todas las esferas del Gobierno existió una inminente preocupación que coincidió con la visita del ex-Presidente de la República, Arq. Sixto Durán-Ballén a los destacamentos militares de la Región Amazónica (entre ellos el de Lago Agrio) para observar las actividades tendientes a controlar el ingreso de guerrilleros colombianos a nuestro país (*Durán-Ballén visitó repartos militares del Napo y Sucumbíos*, Universo, A13, 23/11/92).

Simultáneamente en la zona nororiental del país se realizaron maniobras militares, para entrenar al personal en lucha antiterrorista y antinarcóticos, con la participación y asesoramiento de instructores norteamericanos (*Estrictas medidas de seguridad*, El Comercio, A13, 30/11/92).

Contrastando la información de prensa con los datos de campo recabados en la población de Puerto El Carmen del Putumayo. En ese momento, entre la población de la zona se percibía un ambiente de malestar debido al control militar, básicamente represivo, ejercido desde meses anteriores. Uno de los hechos conflictivos más significativos, fue el enfrentamiento de abril de 1992, entre pobladores de la zona y efectivos de la brigada B-51 Chimborazo: Varios pobladores de Puerto El Carmen y soldados de la mencionada brigada, se enfrentaron “*a puño limpio*” en una de las cantinas de la población. Los militares estaban “*quitándoles y vacilando a las novias*”, de esta riña resultaron agredidos varios militares. Luego de algunas horas, llegó un piquete militar y con “*lista en mano*”, procedieron a sacar de las casas a varios habitantes que participaron en la riña, quienes fueron encarcelados y golpeados.

Esta agresión generó el rechazo e indignación de la población. La disputa se convirtió en un serio conflicto que fue mediado por la Misión Carmelita, obligando a los militares a reconocer los abusos y firmar el denominado “Acuerdo de amistad

y respeto entre los pobladores de Puerto El Carmen del Putumayo y el Ejército Ecuatoriano”.

Esta época corresponde a un momento boyante del negocio del narcotráfico en donde especialmente Puerto El Carmen era un punto de mercado, especializado en la venta de servicios, a salvo de la “peligrosidad” relativa de la ribera norte del Putumayo (Colombia). Una nota de prensa afirmaba: El 96% de colonos ubicados dentro de perímetro de 50 km. de la frontera con Colombia son de nacionalidad colombiana, datos arrojados por un censo realizado por el Ejército y la Armada ecuatorianos; **“Puerto El Carmen vive de las prostitutas, las cantinas y los prostíbulos, los viernes y sábados llegan alrededor de dos mil colombianos para abastecerse de víveres”**. (El Universo, A1, 15/11/92). El artículo fue sensacionalista, no menciona específicamente las fuentes y especuló con las mismas, los datos presentados deben tomarse con mucha reserva, pero son elementos que matizaban la problemática, no obstante, es la visión del mal pernicioso que se adentra en territorio ecuatoriano.

II) Otro momento crítico es aquel ocurrido el 16 de diciembre de 1993 en el punto conocido como Peña Colorada (río Putumayo), las FARC, se atribuyeron el ataque a una patrulla de policías y militares ecuatorianos, en esa acción fueron abatidos 8 policías y 3 militares. Al margen de este suceso, se montó un enorme operativo de búsqueda y control en la zona, que terminó con el apresamiento de 11 campesinos e indígenas Sionas, en su mayoría de nacionalidad colombiana.

Ellos fueron acusados de subversivos y narcotraficantes y el entonces ministro de Defensa del Ecuador Gral. (sp) José Gallardo (posteriormente candidato a la Presidencia de la República del Ecuador; Gerente del Banco del Estado, administración Alarcón; Ministro de Defensa en el gobierno de Mahuad, 1999), en un arresto de mala interpretación del fenómeno social, político

y económico y de la dinámica de la frontera los acusó de **guerrilleros de finca**, categoría ficticia que pretendió justificar frente a la opinión pública el despliegue de fuerza y la necesidad imperiosa de buscar culpables. Acto orientado, más que todo, a demostrar la capacidad de acción y la eficacia en el control de la frontera.

Seis de los detenidos, acusados de guerrilleros y narcotraficantes, fueron apresados mientras realizaban labores domésticas en una casa de habitación y los cinco restantes mientras se transportaban en un bote de línea por el río Putumayo. El operativo perturbó a todas las comunidades asentadas a lo largo del Putumayo, debido al despliegue de tropas, embarcaciones, sobrevuelos rasantes de helicópteros.

Estas comunidades son Cuembí, Santa Rosa, San José del Wisuyá, Santa Elena, Restrepo Alto, Restrepo Bajo, Lorenzo y Nueva Esperanza. En su momento estas comunidades eran conformadas en su mayoría por colombianos desplazados y refugiados por la violencia de Colombia, así mismo, estos habitantes eran, en su mayoría, indocumentados.

Estos individuos prejuizados como sediciosos fueron conducidos a Quito en un espectacular operativo anti subversivo. Según Gallardo, las fuerzas del orden ecuatorianas habían encontrado a los asesinos de los policías y militares abatidos en el Putumayo. Fueron presentados ante los medios de comunicación ecuatoriana, los que cubrieron el suceso con lujo de detalles y difundieron las declaraciones de los supuestos subversivos, quienes admitían pertenecer a las FARC y su participación en la emboscada, declaración obtenida bajo amenaza y tortura.

Este suceso no tuvo precedentes desde el incidente armado entre “guerrilleros” y el Ejército ecuatoriano ocurrido a fines de 1990, luego del cual hubo represalias en contra de los colombia-

nos residentes en Lago Agrio (Nueva Loja), donde aparecieron carteles, los que llevaban escrito un *ultimátum*, dando treinta días de plazo, a los colombianos, para que salgan del territorio ecuatoriano (Comisión Andina de Juristas, 1993: 132).

Según los pobladores de la zona, los antecedentes a la emboscada, se debieron a que los policías cometían muchos abusos: allanamientos injustificados, acoso a los pobladores (sobre todo a los indocumentados), requisas no declaradas, abordaje a las embarcaciones, entre otras. Para la población de Puerto El Carmen, como para aquella asentada en la ribera asumieron como algo esperado la emboscada. Entre la información más representativa se obtuvo el testimonio de un campesino de la zona quien dijo:

*Nosotros no podemos meternos ni con la Policía, ni con la guerrilla ni con nadie, siempre vamos a salir perdiendo, armas no tenemos, las escopetas y carabinas sirven para cazar animales y los machetes no hacen calor a los fierros grandes [fusiles automáticos]. Pero, existe la Ley del Monte y a ellos les agarró la Ley [...] La Ley del Monte: a la primera les avisan, a la segunda les advierten y a la tercera se actúa, por eso aquí se hacen las cosas para que no le avisen, para evitar que le maten a uno [...] A ellos ya les dijeron y no hicieron caso, seguían virando las quillas hacían perder la carga.*

En este episodio de “los 11 del Putumayo”, las organizaciones de Derechos Humanos y en especial el Obispo del Aguarico, monseñor López Marañón, lucharían porque se esclarezca lo ocurrido. Luego de casi 2 años de apresamiento, los supuestos “guerrilleros de finca” fueron liberados, puesto que no se les encontró indicios de su participación en los hechos señalados.

Sin embargo, este enfrentamiento armado entre las fuerzas guerrilleras de las FARC y miembros del orden público ecuatoriano, cambiarían de forma definitiva el accionar de los habitantes de la zona y de las Fuerzas Armadas en la región. El poblado de Puerto El Carmen del Putumayo se convertiría en un pueblo con una economía deprimida, y con una población reducida, la cual contrasta luego de la boyante bonanza que mantuvo hasta 1992, rígidos controles militares se mantenían como regla para ingresar a la zona, lo que conllevaba a promover tensiones entre pobladores locales y las fuerzas del orden ecuatorianas.

Posteriormente a la emboscada, Puerto El Carmen deja de ser el punto de convergencia de los actores vinculados a la narcoindustria y el poblado se deprime rápidamente, la frontera se refuerza con el incremento del número de efectivos, sin embargo, esto no modifica en su esencia la dinámica del narcotráfico y la guerrilla. Por un lado la guerrilla afirma sus posiciones militares y el control territorial de amplias zonas del sudeste colombiano, por otro lado, los narcocultivos se incrementan en extensión y calidad, a pesar de la aspersión de biocidas para la eliminación de los mismos; y, el Estado colombiano y la percepción de éste, entre los pobladores de la frontera, se debilita.

El auge de los cultivos de coca a lo largo del periodo 1993-1998, trae consigo el incremento de mano de obra para estos menesteres. En base a los datos obtenidos en la zona, al parecer, las vías de migración se invierten, ahora son ecuatorianos los que cruzan la frontera para nutrir la fuerza de trabajo necesaria para fortalecer este eslabón de la narcoindustria. Existe evidencia de campesinos ecuatorianos, trabajadores estacionales, quienes participan activamente en la recolección y procesamiento de las hojas de coca hasta PBC. No se tiene datos del número, tiempo y frecuencia con la que estos individuos cruzan la frontera, no obstante, esta no es una situación hipotética ni aislada, pues

existen testimonios que la avalan esta red económica, uno de ellos será descrito en la siguiente sección.

La población asentada en la ribera sur del Putumayo se especializa en la producción agrícola necesaria para abastecer a la población colombiana, quienes casi exclusivamente se encuentran dedicados a la producción y cuidados de cocaes, el mercado por excelencia para la producción agrícola de la frontera es Colombia pues allá se pagan mejores precios y en “*moneda fuerte*” (pesos).

Red comercial que incluye a individuos como indígenas otavaleños que negocian “*esteras*” en La Hormiga (Colombia), supuestos médicos que prestan atención, simultáneamente, a hombres y animales, comerciantes quienes venden ropa y utensilios domésticos a los asentamientos de ambas riberas del Putumayo. Es decir, una red comercial que se sirve del efecto multiplicador de la narcoindustria.

En el caso de los indígenas asentados en la zona de frontera: quichuas, cofanes y sionas. Por un lado estos tres grupos étnicos están asentados tanto en Colombia como en Ecuador, ellos están vinculados a los dos lados de la frontera por redes de parentesco, y por la movilidad social resultante de las distintas migraciones. Caso específico es el de los quichuas amazónicos ecuatorianos que se asentaron en el valle del Guamués (Comisión de Superación de la Violencia, 1992: 225), a diferencia de sionas y cofanes, para quienes la zona del Putumayo ha sido parte de su territorialidad formal en los últimos treinta años.

El caso de los quichuas, es un caso especial en la amazonia ecuatoriana. El quichua es una lengua en expansión y como tal integra a nuevos individuos, hay evidencia que los quichuas orientales están insertándose en otros grupos étnicos, a través, de vínculos de parentesco y elementos de presión política, al

cooptar a la población, como los recursos que los otros grupos poseen, “proceso de quichuización” (Hudelson, J., 1987).

En el caso del Putumayo, los quichuas mantienen relaciones de parentesco y comerciales con indígenas y campesinos asentados a lo largo de la ribera sur del Putumayo y con los de la ribera norte (Colombia). Los asentamientos quichuas de la zona, son relativamente recientes en comparación con los de las sionas y secoyas, coincidentes con la reforma agraria de 1974. Un ejemplo de la red social a los cuales tienen acceso es el caso de un indígena quichua de la zona del Tena (Ecuador), militar retirado de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con residencia en una comunidad quichua del río San Miguel, casado con una indígena siona colombiana.

Este individuo mantiene residencia, relaciones económicas, políticas y sociales con sus parientes del Tena; residencia, tierra y acceso a los recursos en la comunidad quichua del río San Miguel; tierra en territorio colombiano, a través de su mujer y acceso a los recursos manejados por sionas ecuatorianos en virtud de las redes parentales de ella con los miembros de su etnia asentados en Ecuador (sean o no ecuatorianos); relaciones parentales con los quichuas del valle del Guamués; además mantiene un *status* de privilegio en las distintas comunidades indias y campesinas (ecuatorianas) por ser militar retirado y por las relaciones, que él tiene, con otros militares en servicio activo en una zona de alta conflictividad. Este, si bien representa un caso muy particular, el mismo grafica las redes de intercambio social de los grupos indígenas, en particular la de los quichuas, en una zona en la cual la dominante económica es aquella vinculada y/o desprendida de la narcoindustria.

III) Un tercer momento que marca la dinámica socioeconómica de la zona del Putumayo es a partir del inicio de las conversaciones o Proceso de Paz (1999) entre las FARC y el gobier-

no de Andrés Pastrana, las cuales revelan plenamente la situación de extrema conflictividad en la que vive aquel país, así como las zonas estratégicas a ser conquistadas o reconquistadas en su confrontación interna: Entre ellas el Departamento del Putumayo y Nariño y la asociación de estas con el narcotráfico y la actividad guerrillera.

Desde la interpretación de los analistas, generadores de opinión, de la prensa escrita y otros medios de comunicación de masas del Ecuador, la situación en Colombia y en la frontera es altamente preocupante, debido a la amenaza que la subversión colombiana representa para el territorio ecuatoriano: población, sistema político, economía, e incluso para la “moral” del ecuatoriano promedio, quien está alejado de aquel contexto de violencia y sistema delictivo que amenaza al Ecuador como una suerte de contaminante alta y peligrosamente virulento.

Al respecto de esta situación, se tiene como el artículo tipo, el editorial publicado por Alfonso Espinosa de los Monteros –*La República de Marulanda*, *El Comercio*, A5, 05/02/99-: En el mencionado artículo se expresan argumentos estomacales, ideologizados, segados y con una alarmante falta de conocimiento debido de las actuales condiciones del proceso político colombiano.

La mencionada columna asoció, como una sola: la contes-tación armada, narcotráfico (su sistema industrial y de seguridad anexo) y a las fuerzas paramilitares (al servicio del narcotráfico, ganaderos, cafetaleros, transnacionales, banca y hombres de empresa en general, etc.). Visión errada desde todo punto de vista que, la cual en la práctica representó un argumento que contribuyó a deformar los fenómenos que se desarrollan en el Putumayo y que afectan a la amazonia ecuatoriana en su conjunto. Pues esta es parte activa del complejo económico regional y no víctima de las perversas condiciones en que viven los colombianos. Sensación de acorralamiento que las autoridades y algunos



desinformados periodistas han generado alrededor de la situación de conflicto que vive y ha vivido la zona de la frontera colombo-ecuatoriana.

Esta posición se explicaría por la pérdida de identidad del ecuatoriano genérico frente al referente de alteridad, el Perú y sus insaciables apetitos expansionistas, que sancionó positivamente la vida social y política del Ecuador en las últimas seis décadas. La aceptación definitiva del Protocolo de Río de Janeiro y el acuerdo de límites alcanzado entre Ecuador y Perú acarreó: La pérdida del referente narrativo (el conflicto armado con el Perú), el cual legitimaba determinadas instituciones, acciones de Estado y sobre todo percepciones colectivas.

El resultado: redefinir el tema de seguridad externa e interna del Ecuador y los grandes argumentos de *interés nacional* o *unidad patriótica*; replantearse el concepto de guerra y paz y toda la concepción maniquea, la que justificó el conflicto, los ecuatorianos buenos que se enfrentaban al malo; sensación de aislamiento en el sistema internacional debido a la debilidad del país frente a los intereses de Estados que orillaron al Ecuador a la aceptación del Protocolo el cual se considera y se consideró “perjudicial” para el *interés nacional*. Elementos que convergieron en un contexto en el cual la crisis financiera y fiscal del Ecuador se evidenció dramáticamente (marzo 1999).<sup>1</sup> Simultáneamente los índices de criminalidad y delincuencia son el *leitmotiv* de radio, prensa y televisión.

Es en este escenario, donde las instituciones, las más sólidas y de mayor credibilidad pierden su razón de ser, no obstante, la dignidad y el orgullo institucional tienen que ser rescatados. En el artículo citado de Espinosa de los Monteros, se menciona que, solo las Fuerzas Armadas pueden salvar la institucionalidad del país y la amenaza de la perversa guerrilla colombiana que ha destruido Colombia y se acerca al país cada vez más. La priori-

dad son las acciones policiales y militares en detrimento de las acciones diplomáticas.

El problema de la frontera toma protagonismo y pasa a ocupar supuestos espacios de reflexión en todos los medios. Un sinnúmero de producciones televisivas sensacionalistas –todas en mayor o menor proporción, con mayor o menor nivel de análisis– presentaron reportajes, los que contenían una versión errónea y bastante sesgada de los acontecimientos que se han suscitado en estos últimos años en la zona del Putumayo. Reportajes vinculados, a legitimar una mayor presencia de las fuerzas del orden ecuatorianas, como una única solución para evitar que la violencia se propague como mancha de petróleo en el Ecuador.

En cuanto al frente diplomático, este deja de ser profesional, ya no hay razón para que la Cancillería sea ocupada por un diplomático de carrera. Este Ministerio después de la renuncia de Ayala Lasso toma un perfil político, puesto que es ocupado por Benjamin Ortiz, ex director del diario Hoy, periódico que mantiene una línea de apoyo irrestricto al gobierno de Mahuad. El papel de la Cancillería se minimiza y si bien éste es el ministerio de más alta jerarquía en el orgánico del Ejecutivo sus funciones ya no son las más importantes como lo fueron desde el conflicto de 1995.

IV) Finalmente, el Proceso de Paz que vive Colombia ha evidenciado el poder de los grupos armados no articulados a la institucionalidad del Estado. Drogas y guerrilla son un punto espinoso que involucra a: Colombia, todos los países limítrofes y a Norteamérica. Y como se mencionó anteriormente involucra la seguridad nacional de los EE.UU., a quienes no les interesa que se lleguen a verdaderos acuerdos de paz, debido a que esto afectaría negativamente en su posicionamiento hemisférico. Esto queda para el análisis de los expertos en relaciones internaciona-

les: si el interés de EE.UU. es destruir el sistema del narcotráfico o a las guerrillas y su sistema social de reproducción ya que difícilmente se podrán atacar a los dos frentes simultáneamente.

El rumor de una posible intervención militar de los EE.UU. en Colombia o la implementación de una fuerza multinacional de los países latinoamericanos, representa una real amenaza para la legitimidad de los sistemas democráticos en América Latina, en el subcontinente o en los países andinos en particular, pues esto traería secuelas que desequilibrarían el orden político y económico e incrementaría la violencia en la zona.

A pesar que, la intervención militar EE.UU. o la conformación de una fuerza multinacional no es probable, aunque no imposible, existen elementos que anuncian el incremento de las estrategias militares y represivas. Las declaraciones de McCaffrey en el Congreso norteamericano anuncian este hecho: **“La guerrilla colombiana representa una amenaza para toda la región, porque está cruzando las fronteras con incursiones en Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú”** (El Comercio, A6, 8/8/1999). Este funcionario maneja la categoría de narcoguerrilla, la que legitima toda la parafernalia en torno al incremento sistemático de la violencia como único recurso para la guerra contra las drogas.

Para Ecuador y Perú la frontera común con Colombia redefinen el “teatro de operaciones” en cuanto a seguridad externa. El sobredimensionar la amenaza implicaría a corto y largo plazos recibir apoyo económico y político del Gobierno norteamericano. Ecuador está inserto dentro de la red con las facilidades que se construirán en el aeropuerto de Manta y con la colaboración de los militares en las incursiones antinarcóticos en la zona de frontera realizadas conjuntamente con los EE.UU.

Para los habitantes de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca), son evidentes la presencia periódica de

militares norteamericanos, quienes realizan ejercicios conjuntos en la amazonia ecuatoriana durante los últimos años acciones que, no son nuevas ni improvisadas.

Después del fin de la guerra fría fue el narcotráfico el *ítem* de control, sumada a la condición de crimen de lesa humanidad, los editorialistas pontificaron la violencia generada desde el Estado. Después del fin de la guerra Ecuador-Perú, el papel de las Fuerzas Armadas pierden su tradicional razón de ser. Con información escasa y no argumentada se puede estar generando un ambiente para legitimar una nueva escalada de terror. Terror que no se orienta a eliminar las causas que lo producen, sino, que está dirigida a las poblaciones atrapadas en ese fuego cruzado entre las fuerzas estatales y paraestatales. El Ecuador en su plena inserción en el sistema coca-cocaína sería víctima de esta escalada, principalmente, la población fronteriza y de la amazonia.

**Nota:**

- 1 Sobre el tema de redefinición de la Agenda de Seguridad del Ecuador en el tercer milenio ver las preclaras afirmaciones de Raúl Carrera (1998), la cabeza más visible de una innovativa forma de ver las relaciones internacionales.

*Los que no hayan visto a un marciano vivo, se imaginarán difícilmente el horror extraño de su aspecto, la singular boca en forma de V en el labio superior puntiagudo, la ausencia de barba por debajo del labio inferior, que es una especie de rincón, el temblor incesante de esta boca, el furioso grupo de tentáculos, la tumultuosa respiración de los pulmones en atmósfera distinta a la habitual [...]; todo esto me produjo una sensación parecida a la náusea.*

(Herbert George Wells, *La guerra de los mundos*, Bruguera, Barcelona, 1981, P: 26)

## 7. LAS FRONTERAS DE LA VIOLENCIA SOCIAL

El narcotráfico, paramilitares, Ejército, guerrilla, traficantes (esmeraldas, marihuana, cocaína), grupos de autodefensa, sicariato, violencia delictiva han contribuido a que la situación de seguridad y respeto a los Derechos Humanos en Colombia se hayan deteriorado enormemente durante los últimos años. La espiral abarca cada vez más zonas, y los modos de resolverla aparecen como más lejanos conforme pasa el tiempo.

La zona del Putumayo se ha convertido en una verdadera geografía de la violencia. Espacio donde condensa una complicada trama social construida por diversos actores (altamente violentistas), quienes luchan por controlar la zona, cooptar poder económico y simbólico, en definitiva por constituirse como “*dominadores*”. Esta complicada problemática ha afectado a las poblaciones ecuatorianas en la frontera colombiana desde hace muchos años, sin embargo, en la actualidad toda la región parece que se encuentra en una singular situación explosiva debido a la guerra no declarada que incluye consciente o inconscientemente a todos los habitantes de la zona.

Las FARC son el grupo armado de mayor presencia (en la zona del Putumayo colombiano), pero su accionar varía en intensidad dependiendo de las zonas, en especial en las denominadas como de alto riesgo, en donde se encuentran otros grupos guerrilleros, efectivos militares del Ejército y los grupos paramilitares autodenominados como “autodefensas campesinas”. Zonas que son controladas por estos actores de manera parcial o total. No es extraño que en esta zona se pase por diferentes controles: de la guerrilla, del Ejército y de los paramilitares, todos legitimando estas fronteras con la presencia de contingentes armados. Por ejemplo, en La Dorada (Departamento del Putumayo) indicaron que:

*[...] hasta las 6 de la tarde es tiempo de la Policía y del Ejército [...] después de las 6 es tiempo de la guerrilla, son ellos los que mandan ahí [...] La Policía no puede hacer nada porque quienes mandan son los guerrilleros. Ellos no hacen nada por aquí, ganan mal y se les ve mal, ellos solo aparecen para controlar y mandar, queman casas, queman las plantaciones, llevan presos, se toman fotos con los gringos y se van. En cambio la guerrilla protege, también abusan, pero tenemos amigos y parientes ahí dentro y a muchos de ellos ya nos dieron matando [...] Yo tengo más confianza con los compañeros que con la Policía, de los militares ni les cuento [...] (La Dorada, Departamento del Putumayo, Colombia, 1996).*

Desde finales de 1987 hasta mediados de 1991, la acción de grupos armados, vinculados directamente a las fuerzas de control del narcotráfico, fue el elemento de violencia más activo en el Putumayo. Los grupos paramilitares denominados como los “Combos” y los “Masetos”, estuvieron directamente vinculados como fuerzas privadas para la defensa de narcotraficantes y como fuerza de coerción y control poblacional.

Estos no tuvieron su origen en Movimientos de Autodefensa Campesina, sino que nacieron como aparatos armados con el fin de controlar zonas de laboratorios y de producción de hoja de coca (Comisión Andina de Juristas, 1993). Al momento en la zona del Putumayo colombiano no se evidencia la presencia o control de un cartel de droga específico, después de la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha alias “*El Mejicano*” y la expulsión de su fuerza paramilitar denominada “*Los Masetos*” (Castillo, F., 1991 y Comisión de superación de la violencia, 1992).

El movimiento económico, social y político que genera la narcoindustria es evidente, como también las fuerzas de carácter paramilitar que apuntalan esta actividad. En el Ecuador no se tiene evidencia cierta, de actividades de grupos paramilitares al servicio de la narcoindustria, pero sí se conoce de grupos armados bandolerizados, que se presume están al servicio del narcotráfico, actuando como “*asaltantes*” con una estrategia itinerante entre las dos fronteras; y también se conoce que las empresas mayores tienen a su servicio una “*guardia bien puesta*” para su protección.

Como resultado de la radicalización de la violencia política, a primera vista la población campesina e indígena se aglutina de una manera pasiva a las distintas órbitas del poder; pues el aparato estatal ecuatoriano y colombiano; como el andamiaje violentista armado por la narcoindustria, se sirve de ellos para validar su acción. Encontrándose al interior condiciones de indiferenciación, producida por los grupos que ejercen coacción sobre estos (estado, guerrilleros, narcotraficantes, comerciantes, etc.) provocando relaciones conflictivas al tratar de acceder y competir por los recursos de cualquier índole, conflicto que podría violentizarse para retroalimentar un eventual enfrentamiento de características societales.

Quizá se dé un enfrentamiento contestatario frente al Estado y a la narcoindustria, como resultado de la división de “soberanías” (Páez, A., 1990, 11/91) en esta región. O, que el Estado intente integrar al campesino en forma efectiva a su funcionamiento, como resultado de esta cooptación el colono podría ser un instrumento, quien dirigirá la violencia hacia los actores políticos afuncionales al aparato estatal.

También se puede dar el caso que la “cooptación” sea por parte de la narcoindustria, la cual en su faena por acumular poder político tanto en Colombia como en las zonas de su influencia (región del Putumayo) induzca a la violencia hacia los “otros”.<sup>1</sup> El “otro” considerado como instrumento de validación de una identidad, producto de un proceso discursivo y, procesos de autoadscripción y/o adscripción.

Al parecer la violencia de los distintos actores políticos (militares, como legítimos representantes del Estado; narcoindustria y el conjunto de actores sociales que ella condensa y los movimientos oponentes catalogados como guerrilla y/o subversión) se encuentran en una competencia por legitimar sus posiciones mediante la lucha armada, como mecanismos para presentar y tratar de ejecutar sus propuestas ante la sociedad en general. Aceptación pasiva de la violencia, la cual hace ocupar a los individuos un espacio de reconocimiento sea por reivindicaciones de sus Derechos Humanos básicos, por las organizaciones vinculadas a su defensa y denuncia de violación o por los actores violentistas, quienes se sirven de ellos para construir sus sentidos, sentidos pasivos desesperanzadores.

La construcción de la identidad es una cuestión procesual, cuajándose en la praxis misma del proceso político y social, en el cual el actor no se constituye como un dato previo “objetivo”, que se arranca de posiciones dadas en la estructura económica o social. En este sentido se hace necesario indagar acerca de las lla-



madas ‘posiciones de sujeto’ y diversas modalidades de articularlas discursivamente, en el proceso de producción del actor; esta articulación discursiva implica la definición procesual de un “interior” y un “exterior” en un contexto situacional dado, y asimismo, la elaboración del sentido relacional que establece el actor con otros actores en un mismo espacio simbólico (amigo-enemigo, “el otro”). Así, la cuestión de identidad se complejiza, y las nociones meramente instrumentales pueden ser pensadas en otros términos de contenido simbólico.

En otras palabras el conflicto se da en un contexto de afirmación de identidad y de cómo proyectar y refuncionalizar esta identidad frente a los “otros” en los distintos planos que va desde lo económico hasta lo simbólico pasando por todas las instancias sociales, políticas y culturales.

Aparentemente la violencia política es unidireccional desde el Estado y narcoindustria (también es probable desde los movimientos de contestación) hacia los campesinos colonos pues estos se encuentran subsumidos ante una maquinaria que supera su capacidad de organización. No obstante al interior del sistema social existe una competencia que genera conflicto recreando acciones violentistas entre grupos organizados o no, y entre etnias y/o poblaciones que luchan por un espacio de identidad, integración y autonomía con respecto a la sociedad nacional de la cual son parte; y, sin embargo, son rechazados, en una táctica marginación social como física.

Es posible que la idea de conflicto pasivo que existe entre las autoridades, el resto de la sociedad nacional y muchos de los habitantes, es producto de las condiciones de segregación y extrema tensión que viven los habitantes del sector, los medios de comunicación que no existen o son deficientes contribuyen a estancar las diferencias entre colonos. El problema surgirá y de esto están muy conscientes los colonos, cuando llegue la carretera

Palma Roja-Puerto El Carmen *“ahí han de venir los conflictos [...] ahí hasta ustedes han de venir a vivir aquí”*.

A decir de las monjas de la misión carmelita, la inexistencia de carreteras, el aislamiento de la zona provoca en los pobladores un estado de frustración que se expresa en formas de violencia (Asistencia social a la comunidad, PSP # 6729, 1990). Para 1988 solo la población económicamente activa urbana de la provincia de Napo (hoy Napo, Orellana y Sucumbíos) tenía acceso al transporte el resto de la población que sumaba el 80% no lo tenía o tenía un acceso muy limitado (Diagnóstico de la provincia de Napo, Tomo I, 1988).

Juego de identidad que en su caso es dinamizado por la violencia social, la misma que induciría a la violencia política, cuando estos logren acumular el poder suficiente como para contestar a las políticas policiales impuestas por el Estado en su guerra contra la narcoindustria y los movimientos catalogables como guerrilla y/o subversión; mediante una relativa autonomía o una inclusión en cualesquier grupo de los otros actores políticos.

Junto a la violencia social y política en la cual están envueltos los colonos y, que les provoca situaciones de suma tensión al interior de sus unidades domésticas y relaciones interpersonales tienen que convivir con la violencia doméstica.

Lo doméstico, lo social y lo político son factores que intervienen para construir y reproducir una verdadera “cultura de la violencia” que les esta construyendo un “horizonte simbólico” con referentes violentistas, el mismo que está delimitando: el patrón de identidad de sí mismos, la percepción de sus elementos culturales y la percepción del “otro”.

**Nota:**

- 1 La narcoburguesía colombiana estaría buscando acumular poder político en todas las instancias del funcionamiento político, ya sea buscando controlar las estructuras partidistas tradicionales como creando nuevos movimientos políticos como el Movimiento Latino, para captar simpatizantes en base a un clientelismo político que está profundamente insertada en la cultura política colombiana, a más de este recurso legítimo a través del incremento sistemático y selectivo del terror, dirigido a sus opositores que básicamente es representado por el Estado y los grupos elitarios que se sienten desplazados por la irrupción de actores relativamente nuevos y que cuentan con ingentes medios de presión, sobre todo económicos que se vierten a todo nivel de la sociedad aumentando el poder de acción de la narcoburguesía a través del soborno y la corrupción que ha llegado a todas las esferas, incluso policiales y militares (Páez, 1990, 11/1991, 1992).



*Y aquellos ojos hondos y ansiosos, aquella boca tan desdeñosa, aquella mezcla de pasiones contradictorias que se sospechaban en sus rasgos (de ansiedad y de fastidio, de violencia y de una suerte de distraimiento, de sensualidad casi feroz y de una especie de asco por algo muy general y profundo), todo confería a su expresión un carácter que no se podía olvidar.*

(Ernesto Sábato, *Sobre héroes y tumbas*, Oveja

Negra, Bogotá, 1984, P. 20)

## **8. OTRA FRONTERA: AMAZONAS Y AMAZONIA**

En esta sección se presentan algunos extractos de testimonios proporcionados por Trabajadoras Sexuales (TT.SS.) residentes en la amazonia ecuatoriana. La pertinencia se da porque los mismos grafican un circuito de relaciones sociales, exclusiones e idealizaciones en torno a la violencia, evidenciando que la fenomenología de la violencia no solo se da en el enfrentamiento armado o en la eficiencia narrativa de los actores en conflicto, sino que esta atraviesa otras esferas del comportamiento social, desapercibidas o no muy evidentes, que, sin embargo, están y son profundamente dolorosas para aquellos individuos que la soportan.

Este punto debería abarcar un estudio por sí solo pues no es claro y no admitido el papel de las TT.SS. en la conformación de las redes sociales y la conformación de las estructuras familiares en la amazonia, sobre todo a partir de la década del sesenta y el auge petrolero. En este sentido se ha seleccionado fragmentos de una larga historia de vida que empatan con las necesidades del texto. Las TT.SS. son llamadas amazonas, el término está en desuso en la medida que la industria petrolera dejó de ser

la actividad caracterizada por la aventura y que las políticas de las compañías extranjeras que operan en el país ejercen un control casi total de sus trabajadores y limitan al mínimo necesario el contacto de estos con las poblaciones circundantes.

La exclusión, marginación y utilización de la mujer es evidente, en zonas, como la amazonia, donde el desbalance poblacional entre hombres y mujeres es evidente. En este sentido la proliferación de casas de tolerancia es un hecho que acompañó la colonización pionera, la industria petrolera, actividades anexas y en general la dinámica migratoria del oriente ecuatoriano.

*Junto a cada campamento de Petroecuador, y antes de este, junto a las otras compañías había los chongos [...] esos /cabaretes/ [prostíbulos] que se llaman. Allá llegaban bastantes colombianas, costeñas y hasta nativas, indias guapas habían. A ellas les decíamos las Amazonas.* (Tara-poa, 1989).

Las décadas del setenta y ochenta es el inicio de la explotación petrolera a gran escala en el Ecuador.<sup>1</sup> La exploración y posterior explotación de yacimientos petrolíferos en esta región, proporcionó nuevas fuentes de empleos con atractivos niveles de remuneración. Con el auge de la industria se implementa una estrategia de colonización en la amazonia ecuatoriana impulsada desde el Estado a través de la Ley de Reforma Agraria y Colonización.

Estos dos fenómenos sinérgicos (petróleo y colonización) provocaron un desbalance entre población masculina y femenina. En primer lugar el trabajo petrolero es una actividad en la cual el personal es marcadamente masculino. Y otra, porque la colonización pionera atrajo a hombres, principalmente, debido a las condiciones ecológicas consideradas como duras (Salazar, 1986).

Los lugares con mayor índice de masculinidad en la amazonia ecuatoriana coinciden con las áreas de actividad petrolera. (Envirotec, 1996: 194). Estos datos tienen como fuente el censo de 1990 (INEC, 1990). Sin embargo, al no existir más datos oficiales al respecto; se estima, que este desbalance, si bien persiste, tiene tendencia al equilibrio,<sup>2</sup> salvo la ocurrencia de nuevos fenómenos migratorios todavía no previstos.

El trabajo petrolero por ser clasificado como “de hombres”, atrajo a una gran cantidad de población migrante de diferentes zonas del Ecuador. Se conformaron rápidamente grandes campamentos articulados a la industria, los mismos que posteriormente se convirtieron en poblados.<sup>3</sup>

La población asentada en la amazonia ecuatoriana independientemente de su actividad productiva dependía de los insumos y hasta de la producción agrícola proveniente de la Costa y de la Sierra. En este contexto se ubican las trabajadoras sexuales (TT.SS.), quienes migraron desde diferentes puntos del país para ofrecer sus servicios al personal petrolero y aquellos colonos que iniciaban su campesinización.

De esta forma llegaron “las amazonas”, mujeres TT.SS. quienes migraron a la amazonia articulándose a la industria petrolera. Los móviles eran básicamente económicos, el precio por coito es más elevado<sup>4</sup> y tuvieron la posibilidad de “ahorrar”, no obstante, en la amazonia el índice de precios es más elevado que en otras regiones del Ecuador.

Los procesos de generación de identidad se construyen mediante oposiciones al otro, a decir de Barth, la identidad es un juego de oposiciones en donde los grupos se autodefinen y afirman en virtud de la existencia de otros grupos y otras fronteras étnicas (Barth, 1986). Los diferentes grupos, por lo tanto, construyen y desarrollan procesos simbólicos y elementos subjetivos

para generar estrategias a la alteridad. La cultura se convierte en el instrumento generador de categorías clasificatorias.

Las fronteras étnicas son construcciones simbólicas imaginarias que desarrollan los grupos sociales para racionalizar y reordenar sus *habitus*. Las fronteras y los grupos étnicos son instituciones imaginarias, son invenciones para generar autorreconocimiento y autoadscripción grupal (Ibid, 1996).

Dentro de esta perspectiva, la construcción de nuevos actores sociales, se configura en un complicado juego de poder, en donde la identidad genera actores valorados y revestidos de nuevos perfiles sociales y de obtención de ciudadanía (Guerrero, 1996). De esta forma las fronteras étnicas, son trasladadas por los nuevos grupos y recreadas en microcosmos que legitiman y afirman su autorreconocimiento y valoración. Microcosmos que catalizan una serie de procesos sociales de características más amplias, en este caso muchas de las relaciones sociales, políticas y simbólicas de la sociedad amazónica la cual redefinía sus referentes discursivos.

Para el grupo de Trabajadoras Sexuales, el chongo se convierte en el espacio simbólico y ritual en donde sus *habitus* reordenan estrategias para insertarse socialmente, reconocidas como nuevo grupo y nuevas ciudadanas. El probable origen lingüístico del término “chongo” es del quichua es “chunku”, la cual tiene las acepciones de: manada, cariño.<sup>5</sup>

Los juegos de poder que se generan en este microcosmos hace posible que las mujeres obtengan un nuevo status valorado, pasan a formar parte del grupo estelar, de lo deseado. Por lo tanto se convierten en un símbolo de status (Eco, 1988), en ciudadanas necesarias para cumplir con roles específicos dentro de este microcosmos.



*[...] A nosotras siempre nos han dicho putas, cabareteras, malas mujeres, chongueras, pero ahora estamos luchando por nuestra dignidad para ser mejores, por eso decimos que no somos putas sino trabajadoras del sexo o sexuales lo mismo creo da [...] Muy putas, pero somos nosotras las que hemos parido a hijos e hijas, antes hubo mejor trabajo, algunas ahorraron y compraron tierras, se casaron se alejaron del lugar y ahora son campesinas. Ahora no más nos insultan pero antes mujer que llegaba al oriente era puta y venía a trabajar como puta.*

Los trabajadores petroleros de la amazonia norte, si bien estuvieron alejados de la dinámica de violencia o del narcotráfico, estos de una u otra forma estuvieron vinculados al consumo de sustancias sicotrópicas, a través, de los “chongos” y las TT.SS. Y su relación con Colombia se vinculaba con la presencia de trabajadores petroleros colombianos, TT.SS. de origen colombiano y para aquellos trabajadores petroleros que tenían posibilidades ir hasta Pto. Asís (Colombia) por vía aérea o terrestre, sobre todo en la primera mitad de la década del setenta.

*Ellas eran las únicas mujeres por estos lugares, las únicas para desahogarse [...] Usted sabe, aquí metidos 22 días nos cogía el monte. Salíamos locos por ver mujeres, por ver a las cariñosas, por tomar trago, algunos se fumaban una que otra cosa, por aquí abunda el cocoroco [pasta básica de cocaína], marihuana, eso parecía que solo consumían los gringos dañados, pero, aquí más gente que la que se imagina se metía esos humos. Usted ve aquí en todo el oriente hay los campamentos petroleros y al lado de cada campamento están las cariñosas, amazonas. Unas colombianas buenotas, ellas son las mejores, no tenían prejuicios y son a todo dar, no ve que ellas en el monte desde bien chiquitas tienen sexo, no ve que allá entre tanto malo y dañado todo les pasa, pero eso sí aprenden bien.*

En otro sentido, el anterior testimonio presenta el estereotipo que se manejaba en la frontera sobre la mujer colombiana y de la violencia en Colombia, criterios que están atravesados por criterios sesgados, el desconocimiento de la dinámica social y política.

En otro punto este mismo entrevistado aclaró que antes se pensaba así de los colombianos y colombianas sobre todo en los inicios de los ochentas cuando hasta Lago Agrio llegaban los “masetos” a “*emborracharse y armar bronca*”, pero que ahora como él tiene más relación comercial con colombianos se ha dado cuenta que ellos son bien trabajadores y a pesar de los problemas en que viven si hay mujeres buenas.

La migración y colonización en la amazonia norte del Ecuador, se ha complejizado por la disputa de la zona entre narcotraficantes (y todos los elementos que integran la narcoindustria), fuerzas contestatarias y Fuerzas Armadas. Considerando, que la disputa planteada, más que excluir a uno u otro actor que interviene en la zona, puede presentarse como una presencia tolerante variable. Hasta aquí una visión de cómo son percibidas las TT.SS. por parte de la población masculina y algunos elementos de la autopercepción de ellas frente a su contexto social.

Independientemente del trabajo sexual, las TT.SS. colombianas se articulan a los niveles de violencia colombiana de distinta forma y su residencia en Ecuador se debe a la necesidad de alejarse de la violencia de *huir del país*.

*Yo salí de mi país por la violencia, porque a muchos nos mataron, trabajábamos recolectando café, yo soy de cerca de Medellín, del lado de Antioquia, vivía con mi familia y con ellos [los paramilitares], pero comenzaron a perseguirnos [los paramilitares] nos decían que éramos ayuda de los guerrilleros. Allí había un frente de las FARC.*

*Ellos sinceramente nos ayudaban, apoyaban al campesino, al pobre pues, pero también cuando les daba la gana eran unos abusivos hijueputas. Por los unos y los otros tuvimos que salir volados de allá, nos fuimos al Caquetá a seguir recolectando café, pero como venía de lejos desconfiaban de mí, no servía ni para guerrillera ni para campesina, por eso mejor me hice puta.*

Esta mujer es un ejemplo de cómo los diversos momentos y espacios de violencia generan formas soterradas de exclusión social, no se sabe si esta mujer hubiera sido o no TT.SS. si la violencia y las disimetrías y asimetrías que esta desencadena no existiere, sin embargo, representa una expresión particular de lo violento y la violentización.

Violencia a la cual no pueden escapar, a pesar de estar algo más seguras que en Colombia.

*[...] Nos enteramos por unos compadres de lo del Putumayo, nos dijeron que había plata allí, que nadie jodía y nos fuimos [...] trabajamos en los bares de Puerto Asís [...] bastante movimiento hay ahí, la gente gasta bastante plata en trago, pasamos bien [...] pero también nos cobraron, nos pegaron y hasta nos violaron [...] Esa es la vida en esos lugares apartados olvidados, por eso vine a parar en estos chongos miserables de tu país, allá el riesgo que me maten en el trabajo es alto y más para mí que vine huyendo desde el norte, cualquier rato alguien me decía que ayudaba a paramilitares o que era espía.*

El trabajo sexual en la zona petrolera ecuatoriana, es un complejo sistema de oferta y demanda, en donde los “chongos” son los microespacios que reproducen las disimetrías sociales existentes y los juegos de identidad-alteridad. Referentes de au-

toafirmación que presentan a un nuevo grupo social, excluido, marginado y violentado por diferentes instancias de poder.

*Nosotras somos siempre utilizadas, golpeadas, pegadas, nos dicen “putas”, pero esa es nuestra forma de vida, nosotras trabajamos con el sexo, con nuestro cuerpo, somos trabajadoras sexuales, y lo que pedimos es que se nos respete, se nos atienda en nuestras necesidades básicas, en nuestros Derechos Humanos”.*

## Notas:

- 1 La exploración petrolera empezó desde la década del treinta con la compañía inglesa Shell (ESEN—AMBIENTEC, 1990; Trujillo J., 1992). En la década de los años cincuenta en la zona del Putumayo exploró la compañía Texas Petroleum Company (Chávez, 1994).
- 2 En el Ecuador la población femenina representa el 50.3% de la población total (INEC, 1990)
- 3 Este es el caso de Lago Agrio (entre otros casos similares) que fue el primer gran campamento petrolero, el mismo que se constituyó en poblado y ahora es la capital de provincia llamada Nueva Loja.
- 4 En las ciudades como Quito, Guayaquil el precio base por coito está alrededor de 25 mil sucres (US\$ 2 aproximadamente); en ciudades menores como Machala, Quevedo, Esmeraldas, etc. Se puede tener relaciones sexuales por 1,5 dólares. En Lago Agrio y otras ciudades amazónicas el precio mínimo por coito es de 3 dólares, aunque en Lago Agrio (Nueva Loja) existen lugares orientados para trabajadores petroleros de nivel gerencial, militares de rango, militares extranjeros, y personas con posibilidades económicas en general en donde el precio está por los 35 dólares.
- 5 Esta grafía es tomada del diccionario de Glauco Torres (1982)

*La sociedad tiende a reestructurarse a sí misma transformado la desesperación en esperanza por tres vías: por la predicación de un mensaje escatológico, considerado purificador y aglutinador del grupo en torno a nuevas opciones que solidarizan (es la reacción mesiánica o mesianismo), por una respuesta en la frustración a través de conductas extáticas, la crisis de estar poseso, de la posesión, la mística y el anarquismo; y por la salida de la historia mediante la proyección fantástica de la construcción de la utopía.*  
(Luis Maldonado, *Religiosidad Popular Nostalgia de lo mágico*, 1975).

## **9. CAMINAR POR LA TIERRA DEL COCOROCO**

Las avanzadas migratorias de colonización a la zona del Putumayo colombiano, rompen los esquemas tradicionales, que como por ejemplo, en la zona del nororiente del Ecuador, básicamente fueron originadas por el descubrimiento y la explotación de grandes campos petroleros. Este fenómeno, permitió una gran demanda de mano de obra de grupos que por constricciones económicas, territoriales y ecológicas abandonaron sus sitios de origen. A todos los colonos les acompañó el ideario de una mejor perspectiva salarial y sobre todo la certeza de convertirse en propietarios de una extensión de tierra.

En cambio, para el grupo de colombianos, la migración es originada por motivos vinculados a procesos de desplazamiento efectuados por la violencia y conflictos internos del país, una colonización armada (Molano, 1988; Jaramillo, 1989) en donde no se tiene la certeza de optar por la tierra, en las mismas condiciones que la población colona ecuatoriana. Generalmente los procesos de colonización han estado relacionados directamente a los desplazamientos provocados por la inestabilidad del orden

socio político, conjuntamente con el apareamiento de los circuitos comerciales del narcotráfico. Los colonos no se sienten dueños de la tierra, puesto que la misma es controlada abiertamente por las fuerzas guerrilleras, de narcotraficantes o de paramilitares.

Por otro lado, muchos de los colonos colombianos “huyen” hacia la frontera de Ecuador, de la fricción social generada por la guerra a la narcoindustria y a los movimientos guerrilleros, movidos por la estrategia anti comunista del Ejército colombiano. Si bien no todos los migrantes están en la condición de cuasi refugiados, al parecer acogerse a la violencia creciente en el departamento de Putumayo como causa de migración, facilitaba permanecer en Ecuador y realizar algún tipo de explotación de recursos.

Los colonos colombianos como estrategia para optar por la tierra buscan contraer matrimonio con mujeres ecuatorianas, ya que ellas, las potenciales esposas son las que realizan los trámites de rigor ante las instituciones adjudicatarias, así el matrimonio es utilizado como recurso legal (para el colono colombiano y quizá también para la mujer). De esta situación se desprende una competencia por mujeres ecuatorianas y tierra: al interior del grupo de colombianos indocumentados, entre colombianos y ecuatorianos, y entre ecuatorianos, pues, tierra y mujeres son considerados como recursos escasos para su reproducción vital (mujeres de cualquier condición social o clasificación étnica).<sup>1</sup>

Como podemos observar, el panorama en la frontera del Putumayo colombo-ecuatoriano es complicado, más aún cuando se han consolidado rápidamente redes y circuitos de colonización armada vinculados directamente con la guerrilla y la narcoindustria. Estos circuitos se han convertido en los nuevos focos de colonización, relacionados a las zonas cocaleras del Putumayo colombiano, donde se ha logrado cooptar una gran canti-

dad de mano de obra barata, especialmente de colonos ecuatorianos e indios amazónicos, quienes al ingresar en este circuito económico, han encontrando muchos beneficios económicos, lo que ha hecho que el trabajo en las zonas cocaleras permita una bonanza en la región.

El testimonio que se presenta a continuación evidencia estos circuitos comerciales coca-campesinos, pero además grafica la complicada inserción de estos actores dentro de una geografía caracterizada por una guerra violenta no declarada, lo que ha provocado la generación de espacios físicos y simbólicos relacionados a la configuración de una cultura de la violencia.

*“Yo soy de Loja, lejísimos de aquí, soy de por allá más lejos que Calvas, un poblado lejano, ¿usted conoce Loja? [...] se hace 24 horas en este bus [...] es la primera vez que voy por aquí, por Quito. Yo siempre me vengo por el Puyo... allá ya saben la movida y los caminos...”*

La mayoría de los colonos que llega a las zonas nororientales de la amazonia ecuatoriana, poseen un conocimiento previo de las ecologías a colonizar. Generalmente se vinculan a redes de parentesco que funcionan como fuentes de solidaridad muy estrechas entre los diversos grupos de colonos.

*[...] yo vivía con mi mamacita, con mi familia, la vida era durísima. Allá no llueve nada, no hay cómo sembrar como aquí [...] aquí es todo verde, allá es solo un desierto [...] yo huí de mi casa y me fui a viajar. Es que los lojanos somos bien andariegos, nos gusta ir por todas partes. Salí de la tierra y llegué hasta Machala, ahí comencé a ser bien andariego, tenía 13 años [...] Bueno, al principio es feo estar solo, pero uno se encuentra con muchos paisanos, allá nos encontramos con otros lojanos, todos de por aquí y otros de más lejos. Comenzamos a unirnos en gru-*

*pos, todos amigos, trabajamos en Machala [...] Hacíamos de todo: albañiles, peones, cargadores, vendíamos chicles en los buses, limpiando zapatos, hacíamos mandados. Todos los días de alguna forma nos ganábamos el pan aunque sea poco.*

Vastas zonas del nororiente ecuatoriano han sido colonizadas por grupos humanos llegados de la provincia del Loja, esto ha configurado microrregiones en donde se ha intentado resignificar o recrear sus zonas de origen. Los colonos lojanos se caracterizan por su alta movilidad y sus amplias redes de parentesco en diferentes zonas lo que les permite mantenerse como poblaciones flotantes por muchos años hasta encontrar un adecuado sitio de asentamiento.

En la actualidad muchos de estos colonos se encuentran trabajando en las plantaciones de coca en el Putumayo y en el Guaviare colombianos, sin embargo la vinculación de estos grupos con el trabajo de la coca se puede remontar a mucho años antes del boom de la coca en esta zona. Se conoce por el trabajo de campo que muchos colonos lojanos han mantenido cercanos vínculos con los circuitos de trabajo cocalero en zonas tan alejadas como el Huallaga peruano.<sup>2</sup>

*Después fuimos a Huaquillas, en la frontera, allá conocimos a otros paisanos, ellos nos llevaron al Perú, ellos ya habían trabajado antes y tenían amigos y compadres. Trabajamos en una zona bien lejos -Huallaga decían que se llamaba, como también cómo se llega allá-, si me pregunta no le sabría decir.*

En este punto si bien se estableció una relación de confianza con el informante se negó a contestar cuáles fueron las vías de acceso a la región, aunque es previsible en función de la entrevista que hasta cierto punto de la sierra peruana llegaron en bus



de línea comercial y posteriormente fueron llevados al interior de transportes de carga, por lo que se presume que realmente el individuo no supo exactamente dónde estuvo.

*Trabajamos recolectando [...] ¡usted sabe! [...] hojas de coca, allá hay por montones, pero no pagan bien, el trabajo es duro y joden mucho los militares, además, estaba puro natural al lado de uno, allá no son como los indios de aquí, solo hablan raro y bien mala gente son. Ahí trabajé por dos años de ahí me regresé. En el Perú siempre le ven a uno como enemigo [...] por lo de la guerra, no nos trataron bien, así que salimos, aunque algo de platita quedó. De ahí nos dijeron que aquí en el Oriente hay bastante trabajo [...] aquí también encontramos harto lojano, todos tenemos parientes, cuando se conoce gente es más fácil. Llegué en 1993 yo tenía 16 años [...] Llegué a la finca de un tío por Sacha, allá trabajé con él por unos meses, el trabajo es durísimo desmontar y sembrar pasto casi no se gana nada, solo el plato de comida y alquito más para irse a divertir con mujeres en el “chongo”.*

La vinculación con el circuito comercial guerrilla-narcotráfico, por parte de los colonos ecuatorianos es conocido por la mayoría de habitantes del nororiente de la amazonia ecuatoriana. Curiosamente, quienes niegan conocer estas relaciones son las autoridades del Estado ecuatoriano y las fuerzas del orden. Esto configura una conflictiva trama de intereses entre autoridades y grupos armados, los primeros por cooptar dinero para que no “vean nada” y los segundos para facilitar la mano de obra tan necesaria para las plantaciones de coca y para los batallones guerrilleros.

*Allá [en el norte de la amazonia ecuatoriana] todo el mundo sabe que al otro lado [Colombia] hay harto trabajo, una vez me cabrié de tanto trabajo mal pagado y me*

*fui con unos panas hasta Lago Agrio, de allí usted habla con unos señores que vienen todos los sábados a coger gente para trabajar. Ellos [la gente de la población] decían que son guerrilleros pero allá nadie les decía nada, pasaban al lado de los policías y nada pasaba, hasta se saludaban, entonces preguntan: ¿quién quiere irse a trabajar con buenos sueldos y comida? Nos metimos y nos fuimos. Pasamos la Punta y nos fuimos hasta Orito de ahí nos distribuyeron a unas veredas para bien adentro, en carro y a pie. A unos mandaron por un lado, a otros nos metieron por aquí cerquita de la frontera [...]*

El nuevo boom económico generado por el trabajo de los colonos e indios amazónicos en los circuitos de la coca y guerrilla, han generado una nueva y constante migración de grupos humanos quienes con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida trabajan en los sembradíos, como recolectores o como pisadores de hoja de coca (para lograr que se desprenda el alcaloide de la hoja de coca, esta es rociada de productos químicos y pisada, hasta obtener la denominada Pasta Básica de Cocaína PBC, esta labor es cumplida por trabajadores cocaleros en laboratorios pequeños, en los grandes laboratorios esta fase del proceso se lo realiza mecánicamente).

Para muchos colonos el trabajo en sus fincas ya no resulta rentable y el esfuerzo que se dedica les resulta poco atractivo para los pequeños beneficios que se obtienen. Este panorama se complementa con una sistemática persecución de las autoridades locales, sobre todo en lo que se refiere a la legalidad de las tierras que poseen y en muchos casos a ser tratados como delincuentes o “ayuda guerrilleros”.

Entre los colonos campesinos de la frontera se ha generalizado un sentimiento de no pertenencia al Estado ecuatoriano, precisamente porque la presencia del Estado ha tenido una

constante de marginalidad en la amazonia ecuatoriana. El Estado tradicionalmente ha delegado funciones a otros actores (misioneros, petroleros, militares, organismos de ayuda internacional), para que sean ellos los que doten de las necesidades más básicas a las poblaciones amazónicas: salud, educación, desarrollo comunal.

*Yo trabajo pisando coca [...] Hay harto ecuatoriano trabajando allá, harto lojano [...] Nosotros nos llevamos bien con los colombianos, aquí es diferente que en Perú, el trato es bueno y la paga es buenísima [...] ¿sabe cuánto gana uno al mes trabajando 8 horas al día? 1'900.000 pesos eso en plata nuestra es más de 8.500.000 sucres [cinco sucres por peso] Hay virgen santísima ¿cuándo aquí en el Ecuador vamos a ganar eso? Allá ganamos bien, uno trabaja tranquilo y nadie jode [...]*

Todas las regiones de la amazonia han sido consideradas como fronteras, este imaginario de “far west” recrea diversos sentimientos de olvido y desesperanza entre los pobladores. Sus referentes de ciudadanía se encuentran difusos, siendo una de las razones para que muchos colonos-campesinos e indios amazónicos se vinculen con cierta facilidad a las diferentes labores extractivistas (oro, caucho, petróleo, coca) que en diferentes espacios se han desarrollado en este ecosistema.

*[...] El trabajo en las veredas no es como aquí [Ecuador], donde por todo joden. Por eso somos pobres nosotros, porque no nos dejan trabajar en nada. Joden los militares, joden los policías, tratan mal [...] ¡Acá no! [...] Yo le voy a decir la verdad [...] Aquí y allá se dice cualquier cosa de la guerrilla, del trabajo nuestro, que nosotros somos viciosos basuqueros, marihuaneros, de todo nos dicen [...] Yo le digo amigo, aquí la guerrilla es taita y mama nuestro, ellos nos cuidan que no seamos viciosos, borrachos ni mujerie-*

*gos, nos cuidan que no trabajemos más de 8 horas y que nos paguen bien [...] Si uno no puede tomar nada, peor darse al vicio [...] Si le encuentran en el vicio, al principio le aconsejan que no sea tonto. Eso es la primera vez. La segunda, si no cambia le amenazan y si no cambia ¡pum pum! [...] Al otro día muerto de un pepazo y todo se acabó [...]*

Los referentes de ciudadanía están contruidos en base de clasificaciones identitarias a partir de las fronteras étnicas. Estas instituciones imaginarias legitiman o deslegitiman a individuos o a grupos dependiendo de los momentos socio políticos, étnicos o económicos. Por ejemplo, la casi totalidad de trabajadores cocaleros son sistemáticamente relegados como ciudadanos para las autoridades del Estado, están más bien en la margen de la delincuencia y de la ilegalidad, por lo tanto no cumplen los requisitos para ser llamados ciudadanos. En cambio el trato que reciben de la guerrilla, sobre todo en lo referente a la obtención de trabajo y relativa seguridad labora, genera un sentimiento de pertenencia al grupo, de sentirte ciudadanos de la guerrilla o “ciudadanos del monte”.

El discurso utilizado por la guerrilla en esta geografía de frontera tiene mucho de mesiánico, de reivindicativo para grupos que siempre y constantemente han sido violentados en sus mínimos derechos humanos como grupos y como individuos.

*Nosotros somos agradecidos con la guerrilla, ellos nos protegen, nos dejan trabajar, no importa que no tengamos papeles, se preocupan que nos paguen completo y tengamos vacaciones. Cada domingo descansamos en las veredas donde nos meten, podemos comprar cosas: radios, linternas, golosinas [...]. Tan remontados y aquí tenemos todo [...]*

La frontera amazónica es resignificada por estos grupos como un espacio donde se puede “*ganar dinero*” se “*puede trabajar*”. La construcción de su nueva ciudadanía se fortalece cuando luego de su trabajo, logran “ahorrar” dinero y regresar a sus lugares de origen, demostrando a todos su relativo éxito (la misma relación tienen los migrantes que viajan a España y a los EE.UU.).

*Ahora estoy saliendo, me regreso a Loja a ver a mi mamá, llevo un poquito de plata para hacerle una casa a la vieja y a mis hermanas. Voy unos meses y me regreso a seguir trabajando, aquí el puesto esta seguro, me voy a la tierra, me llevo este ponchito [ruana] para que me vean, ¿si ve?, está pintado para que todos vean y se den cuenta dónde trabajo [...] A mí que chucha lo que digan, yo regreso y voy a trabajar unos meses más, porque tengo ahorrado plata en el banco y estoy pensando comprarme unas hectáreas y sembrar hoja también: aquí o allá. Ese es un buen trabajo, yo si estoy decidido a meterme en eso, cultivar hoja eso que aquí dicen el COCOROCO*

Toda esta complicada trama de conflictos, violencia y deseos frustrados, ha generado en estos grupos sociales una especial y característica cultura de la esperanza, en una paranoica búsqueda de nuevos “Mesías salvadores” (Laplantine, 1977). Ello también les conduce a reflexionar y negar su pertenencia como grupos humanos autoadscritos a un país, a una nación, a una etnia, grupo político, etc.

Estos elementos apuntan a la comprensión de las múltiples facetas de la violencia que ocurre en este sector del Putumayo. Se percibe que el juego social está regulado por un patrón de violencia constante (en sus diversas manifestaciones); que explica la fragilidad social de estos grupos humanos. Todo lo anterior describe un sistema generado por una trama socio-económica, cul-

tural y política de la región, que se retroalimenta en términos de constricción del medio y diaria aceptación del conflicto y la violencia, lo que condiciona y conforma un patrón de crisis, forjado en las continuas tensiones inherentes a la violentización.

Problema grave de solucionar en términos inmediatos, pues se corre el riesgo que la violencia en general se la tome y perciba como una regla. Al mismo tiempo esta, en su cotidianidad sea por lo más normal. Se teme que el maltrato físico: intrafamiliar, de género, grupal, extragrupal, etc., sea aceptado sin ningún reparo. Así también que, los efectos de la violencia formen parte de su sistema clasificatorio.

Por lo dicho, a través de esta visión de la zona, se puede ver que el desenvolvimiento de estos pobladores, se presenta peculiar, pues a su interior los fenómenos generadores de violencia se encuentran magnificados. También lo están las condiciones que pueden propiciar un incremento de la misma, hasta niveles que atenten en forma radical a la condición de seres humanos de los individuos ahí asentados.

Finalmente, estas redes de solidaridad articula microrregiones que al mismo tiempo son excluyentes entre sí. Los procesos de exclusión se evidencian en la sistemática relegación política y económica del Estado, de las elites políticas y figuras cacicales en las microrregiones frente a los migrantes, pauperizados y con acceso a limitado a la tierra.

Todo el anterior proceso genera roles específicos de los individuos en las diferentes zonas. Una vez introducidos en el sistema del narcotráfico asumen para sí el modelo político. Sin embargo, si salen de la zona, se convierten en sujetos que han sufrido una transformación, no política, sino de carácter económico. Tienen un discurso ambivalente, por un lado hay una crítica al Estado y por otro tienden a reproducir el rol tradicional del Es-

tado en su lugar de origen o en la nueva zona de asentamiento alejado del sistema narcoproductivo.

### Notas:

- 1 En las zonas rurales del cantón Putumayo hay un desnivel demográfico entre sexos, siendo extremo en la parte rural de la parroquia de Puerto El Carmen. Dentro de los pobladores de más de 15 años existe una relación de 3.1 hombres por mujer (INEC,1990), cifras oficiales que pintan un panorama crítico, agravado por la presencia de migrantes colombianos, que no constan en muchas estadísticas, pero, de cuya presencia no se puede prescindir. Lucha por mujeres que endurece el funcionamiento de los distintos sistemas sociales.
- 2 La inmigración campesina al Alto Huallaga tiene su punto más alto a inicios de la década del ochenta. Se estima que ingresaron a la zona más de 300 mil individuos, impulsados por la demanda de mano de obra para la recolección de hojas de coca y por la crisis económica que el Perú atravesaba. (Eastman y Rubén, 1992)





## 10. A MODO DE CONCLUSIONES

La constante de la colonización y poblamiento de la amazonia en general y la ecuatoriana ha tenido el signo de la violencia. La época del caucho, los inicios de la explotación petrolera y las características industriales de la narcoindustria son momentos en los cuales se ha utilizado la fuerza como elemento fundamental para el control social, político y simbólico de ese espacio.

Las relaciones sociales entre colombianos y ecuatorianos es de larga data. La articulación del Ecuador a la dinámica económica del caucho configura las bases sociales que se integran al proceso colonizador de la década del setenta y a la actual dinámica de la narcoindustria y a la internacionalización de la guerra interna de Colombia.

El Ecuador al igual que en la época cauchera, en el actual contexto de la narcoindustria se especializa en el abastecimiento de víveres y elementos logísticos necesarios para dinamizar el complejo económico regional. Su vinculación no es espontánea, sino, integrada a la dinámica socioeconómica de la región que va mucho más allá de hechos coyunturales y tiene que ser leída desde una perspectiva histórica y con alcances regionales que van mucho más atrás que la época cauchera.

Las vías de comunicación por excelencia en la zona son los ríos principales y todo el sistema hídrico anexo. La zona del Putumayo colombiano y ecuatoriano, tiene mayores vinculaciones con poblaciones ubicadas en los cursos bajos de la cuenca amazónica que con los poblados integrados a la esfera del sistema andino y de piedemonte.

El Ecuador en el contexto regional del narcotráfico tiene una participación limitada y marginal, la paranoia informativa y la paranoia inflacionaria sobre las dimensiones de la narcointustria en el país viabilizan salidas que se integran a la represión y al uso de la fuerza como instrumento sistemático para atacar el problema. La guerra contra las drogas es una guerra, en la cual los perdedores son los pobladores de aquellas zonas alejadas del Estado con estatutos de paraestado.

Los distintos niveles de violencia y conflicto se plasman en símbolos, representaciones y actividades de los individuos; manifestaciones que se articulan a una red causal que involucra: una lucha por acumular poder y de cómo ejercerlo; lucha por el manejo económico, que al mismo tiempo involucra el uso del espacio, el manejo de la tierra y el mantenimiento de la ecología.

¿Es posible que la violencia generalizada que viven las zonas del Putumayo colombiano se traslade a las zonas de la frontera ecuatoriana? Para los miembros de las Fuerzas Armadas es una posibilidad cierta, por lo que se ha trasladado grandes contingentes militares hacia la frontera norte, la mayoría de estos efectivos se encontraba en la frontera sur. A raíz de la firma de la paz los militares asentados en las guarniciones fronterizas del sur, debían ser reubicados. Esto ha provocado un clima de tensión en las zonas del Putumayo y en las provincias de Carchi y Esmeraldas, pues la presencia de efectivos militares con la misión de detener el posible avance de la guerrilla y el narcotráfico, ha provocado una escalada de posibles nuevos espacios de guerra, que incluirían a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Curiosamente, este clima de tensión no existió con intensidad antes de la firma de la paz.

Más bien, el clima vivido por los habitantes de la frontera con Colombia ha sido de relativa tranquilidad (si se compara con sus vecinos de frontera), eso explica que solo ha existido un

incidente armado en la frontera norte (los 11 del Putumayo), por lo que resulta curioso que se redoblen las guarniciones en zonas donde las Fuerza Armadas ecuatorianas no han tenido incidentes con la guerrilla colombiana, la misma que controla la región y se encuentra en una abierta guerra con paramilitares y el Ejército colombiano.

¿Se nos esfuma la isla de paz? Los niveles de violencia que vive en la actualidad el país, han generalizado un ambiente de zozobra y de incertidumbre. La inseguridad política, la inestabilidad económica y la crisis general del Ecuador han contribuido para que se establezcan niveles de violencia doméstica, política y delictiva antes no vistas. Toda esta complicada trama de conflictos, ha sido continuamente incitada por los medios de comunicación, quienes en una forma morbosa han visto que publicar cotidianamente noticias y reportajes sobre asesinatos, robos y secuestros han subido sus niveles de sintonía a nivel nacional. En otras palabras las condiciones estructurales para el apareamiento de la violencia en el Ecuador están dadas, su dinámica es independientemente de la existencia de esta en Colombia

Al Ecuador se lo ha caracterizado por su relativa paz en todos los ambientes, la efervescencia de violencia se elevaba cuando en las esporádicas guerras con el Perú, sentimientos patrioterros incitaban a la toma de las armas y a la defensa de la heredad nacional. Son hasta en la actualidad muy raros y esporádicos los acontecimientos que vinculan asesinatos o muertes violentas.

Sin embargo, las zonas de frontera como la amazonia, siempre han sido consideradas como violentas, lugares de refugio en donde se huye para escapar de la ley y la violencia se generaliza. Estos imaginarios de refugio, se complementan con la historia de ocupación de la zonas de bosque húmedo tropical, relacionadas a la extracción de recursos y a la conformación de

enclaves económicos, en donde se generaliza la pobreza, la falta de recursos y la negación de los individuos como ciudadanos.

Esta violencia presente en la cotidianidad de los individuos y dirigida desde todos los actores y grupos de poder, han generalizado ese sentimiento de abandono, olvido y desesperanza entre los pobladores. Con los nuevos roles que las FF.AA deben asumir luego de la definitiva firma de la paz y demarcación territorial con el Perú, se ha empezado una sistemática campaña de búsqueda de enemigos internos y externos que legitimen la real presencia de los militares en este nuevo panorama.

En lo que se refiere a la seguridad externa del Ecuador los militares ya tienen el escenario en el cual desenvolverse. Esta es la zona del Putumayo y en general la frontera norte. Sin embargo, no queda clara cuál será su reorientación al interior del país. Pues si esta no se redefine adecuadamente y se reduce el aparato militar con la consiguiente desocupación de soldados profesionales a mediano plazo se tendrá una delincuencia altamente entrenada con una sofisticada capacidad estratégica y operativa.

Las guerrillas de tipo comunista o de izquierda nunca han representado un real peligro de inestabilidad al orden público en el Ecuador, más bien han sido utilizadas como ejes para legitimar la represión y la violencia ejercida desde los aparatos de control del Estado a los ciudadanos. Desde este análisis, en los momentos actuales es muy difícil que algún tipo de contestación armada surja en el Ecuador, que represente un real peligro. Creemos, sin embargo que toda esta paranoia informativa montada desde hace más de un año, ha servido de base para legitimar la presencia sistemática de militares en las regiones fronterizas del norte.

Ahora las autoridades descubren que la frontera norte y los niveles de violencia y desestabilización política que vive Colom-

bia, representan un real peligro para el Ecuador y su seguridad interna, ¿es que acaso la guerrilla colombiana y los grupos paramilitares están luchando desde hace dos años en la zona? ¿Por qué antes de la firma de la paz no se veía como una prioridad militar a las zona norte del país?

Definitivamente la vinculación del Estado ecuatoriano en los planes globales de control militar y de la lucha internacional contra el narcotráfico que ha desarrollado EE.UU., han permitido un espacio de búsqueda de legitimación a las FF.AA. ecuatorianas quienes habían perdido su razón de ser al no tener ya como “enemigo” al Perú. Ahora, entonces redescubren que mantienen peligrosos enemigos al norte.

La isla de paz, se nos está acabando, sin embargo, los nuevos frentes de violencia que se han creado en la frontera norte, representan antiguos espacios de conflicto en donde por razones no esclarecidas el Ecuador y su Ejército siempre mantuvieron una posición expectante y nunca de actor directo.

¿Cuáles serían las implicaciones internacionales al ingresar a la producción de cocaína en la región? El Ecuador ha mantenido niveles marginales dentro de la inserción al mercado y los circuitos internacionales del narcotráfico. Como se ha explicado en este ensayo la vinculación del Ecuador se ha dado en los niveles de país de paso de precursores químicos, nunca se han mantenido evidencias ciertas sobre producción o siembra de productos ilícitos. En este sentido, la dinámica de país y su vinculación a los circuitos del narcotráfico no le han significado al Estado reales e importantes ingresos económicos dados por los EE.UU. a diferencia de Colombia, Bolivia y Perú.

Resulta sumamente extraño, que ante la crisis tan profunda que viven todas las instituciones del Estado y con ellas las de seguridad interna, las actuales autoridades presenten al Ecuador ya

no como un país de tránsito, sino más bien como un punto más dentro del complicado engranaje económico del narcotráfico.

La presencia de una base norteamericana en la ciudad de Manta permitirá controlar toda la región, convirtiendo al Ecuador en una importante base de apoyo para la lucha internacional en contra del narcotráfico y/o la guerrilla, lo que directamente les proporciona nuevos roles de función y de poder a las fuerzas militares ecuatorianas, poder que lo estaban perdiendo o que por primera vez en la historia republicana del Ecuador era cuestionado.

# 11. ANEXO

## INDICADORES ESTADÍSTICOS SOBRE EL NARCOTRÁFICO (ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ Y BOLIVIA)

### ECUADOR

ANEXO ESTADÍSTICO  
FUENTE: BUREAU OF INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW AFFAIERS,  
actualizado a febrero 29 de 1999.<sup>1</sup>

#### ECUADOR

TABLES for CY		1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
COCA										
Harvestable Cultivation	[ha]	0	0	0	0	0	0	0	40	120
Eradication*	[ha]	0	0	0	0	3	5	3	80	30
Cultivation	[ha]	0	0	0	0	3	5	3	120	150
Seizures										
Cocaine	[mt]	3.17	2.16	9.80	4.40	2.186	1.039	3.750	0.858	0.561
Base, paste	[mt]	0.690	1.605	0.530	0.250	0.192	0.335	0.505	0.305	0.707
Cannabis	[mt]	17.730	0.022	0.200	0.200	0.131	0.183	0.631	0.171	0.404
Total Cocaine products	[mt]	3.9	3.8	10.3	4.7	2.4	1.4	4.3	1.2	1.3
Heroin	[mt]	0.053	0.034	0.070	0.053	0.024	0.027	0.003	0.000	0.000
Arrests										
Nationals		3,596	3,346	2,075	1,858	2,872	2,775	1,810	2,794	3,147
Foreigners		292	346	204	2,214	201	213	165	198	220
Total Arrests		3,888	3,692	2,279	4,072	3,073	2,988	1,975	2,992	3,367
Cocaine Labs Destroyed		2	0	1	0	0	0	0	4	1

<sup>1</sup> Para mayores detalles consultar el sitio:  
[www.state.gov/www/global/narcotics\\_law/1998\\_narc\\_report/index.html](http://www.state.gov/www/global/narcotics_law/1998_narc_report/index.html)

## 152 / Salomón Cuesta y Patricio Trujillo

### COLOMBIA

TABLES for CY		1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989
<b>COCA*</b>											
Potentially harvestable	[ha]	36,264	13,964	1,664	50,900	44,700	39,700	37,100	37,500	40,100	42,400
Eradication	[ha]	-	19,000	5,600	8,750	4,910	793	959	972	900	640
Estimated cultivation	[ha]	-	32,964	7,264	59,650	49,610	40,493	38,059	38,472	41,000	43,040
<b>Leaf</b>											
Potentially harvestable	[mt]	15,864	63,600	53,800	40,800	35,800	31,700	29,600	30,000	32,100	33,900
Potential HCl**	[mt]	165	125	110	80	70	65	60	60	65	
<b>OPIUM</b>											
Potentially harvestable	[ha]	6,100	6,600	6,300	6,540	20,000	20,000	20,000	1,344	-	-
Eradication	[ha]	-	6,972	6,028	3,760	3,906	9,821	12,858	1,156	-	-
Estimated cultivation	[ha]	-	13,572	12,328	10,300	23,906	29,821	32,858	2,500	-	-
Potential opium gum	[mt]	61	66	63	65						
<b>CANNABIS***</b>											
Harvestable Cultivation	[ha]	5,000	5,000	5,000	4,980	4,986	5,000	2,000	2,000	1,500	2,270
Eradication	[ha]	-	-	-	20	14	50	49	0	500	130
Cultivation	[ha]	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,050	2,049	2,000	2,000	2,400
Theoretical Potential Yield	[mt]	4,150	4,150	4,150	4,133	4,138	4,125	1,650	1,650	1,650	2,800
<b>Labs Destroyed</b>											
Cocaine and Base		311	213	861	396	560	401	224	239	269	452
Morphine/Heroin		10	9	9	11	9	10	7	5		-
<b>Seizures</b>											
Heroin/Morphine Base	[mt]	0.317	0.261	0.183	0.419	0.181	0.261	0.05			
Opium	[mt]	0.100	0.120	0.036	0.078	0.128	0.261	0.43			
Cannabis	[mt]	69	136	235	166	200	549	206	329	664	708
Base and Basuco	[mt]	29.30	10.00	17.50	19.50	32.00	10.40	5.81	9.28	5.80	
Cocaine HCl	[mt]	54.70	34.00	23.50	21.50	30.00	21.76	31.92	77.07	47.27	
Total HCl/Base Seized	[mt]	84.00	44.00	41.00	41.00	62.00	32.16	37.73	86.35	53.07	37.30
<b>Domestic Consumption</b>											
Cocaine (rough estimate)	[mt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Marijuana (rough estimate)	[mt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Arrests /a</b>											
Nationals	persons	1,879	1,478	1,482	1,646			-	-	3,574	
Foreigners		82	68	79	99			-	-	-	33
Total Arrests	persons	1,961	1,546	1,561	1,745	2,154	2,562	1,700	1,170	6,150	3,607

\* The estimated leaf-to-HCl conversion ratio is 500:1. A yield study underway suggests leaf yield may be considerably higher.

\*\* Colombian leaf-to-cocaine conversion ration under review.

\*\*\* Reported cannabis cultivation has not been confirmed by USG survey.



PERU

TABLES for CY		1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
<b>COCA /a</b>										
Harvestable Cultivation	[ha]	51,000	3,264	28,864	49,764	43,064	43,264	63,564	55,264	55,764
Eradication*	[ha]	7,825	3,462	1,259	0	0	0	0	0	0
Cultivation	[ha]	58,825	6,726	30,123	49,764	43,064	43,264	63,564	55,264	55,764
Potentially harvestable leaf	[mt]	30,064	65,064	43,628	52,528	34,228	24,428	27,292	26,092	292
Potential Cocaine HCl	[mt]	240	325	435	460	435	410	550	525	490
<b>Seizures</b>										
Coca Leaf	[mt]	132.9	146.8	99.1	33.4	25.2	-	25.0	5.95	38.52
Paste	[mt]	**	**	**	**	**	7.7	0.75	1.07	-
Cocaine HCl	[mt]	1.70	2.30	1.01	7.65	0.10	0.47	0.23	0.76	-
Cocaine Base	[mt]	19.70	8.80	18.68	15.00	10.60	5.3	6.7	4.41	-
Total Cocaine HCl/Base/Paste**	[mt]	21.40	11.10	19.69	22.65	10.70	5.77	6.93	5.17	8.50
Aircraft	item		11	7	22	4	13	7	10	-
<b>Arrests</b>		17,067	13,947	11,916	9,694	6,586	4,824	3,707	2,055	-
<b>Labs Destroyed</b>										
Base		18	14	21	21	38	88	89	151	
HCl		0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		0	18	14	21	21	38	88	89	
<b>Domestic Consumption</b>										
Coca leaf	[mt]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>Users (thousands)</b>										
Coca		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Cocaine		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Coca		-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* In 1997, Peruvian authorities also report destroying 96 square meters of seedbeds, equal to six hectares of mature cultivation.

\*\* Since 1994, Peruvian National Police statistics have not distinguished between coca paste and cocaine base. The most common form of coca leaf processing in Peru, characteristic of 70 percent or more of all coca leaf, results in cocaine base of varying purity. Most of the product seized annually is cocaine base. This figure probably includes trace amounts of paste, but for statistical purposes is almost exclusively cocaine base.

- (a) Hectareage data for previous years has been corrected to reflect more accurately calendar year rather than fiscal year data. Some adjustments in hectareage were also necessary to correct previous errors in displaying gross rather than net cultivation.
- (b) Production data for previous years has been recalculated at the rate of 1:1.14 metric tons/hectare rather than 1:1.0 or 1:0.3 metric tons per hectare. Conversion ratios for leaf-to-HCl range between 322:1 and 345:1. Not broken down into Base and HCl in previous years.
- (d) The Peruvian National Police also destroyed 40 coca leaf maceration pits in 1997.

## ASISTENCIA ECONÓMICA A PAÍSES LATINOAMERICANOS

### ASISTENCIA ECONÓMICA DE EE.UU. PARA FINES ANTINARCÓTICOS

	FY 1998 ACTUAL	FY 1999 PLAN	FY 1999 EM. SUPP.	FY 2000 REQUEST
<b>NARCOTICS PROGRAMS</b>				
<i>Latin America</i>				
Bahamas	500	1,000		1,000
Bolivia	35,000	40,000	14,000	48,000
Law Enforcement	—	—		
Alternative Development	—	—		
Brazil	500	1,200		1,500
Colombia	43,000	30,000	42,088	40,000
Blackhawks	—	0		—
Ecuador	500	1,200		1,200
Guatemala	2,000	3,500		3,000
Jamaica	600	800		800
México	5,000	8,000		10,000
Perú	32,000	45,000	31,940	48,000
Law Enforcement	—	16,000		
Alternative Development	—	15,000		
Venezuela	600	700		700
Latin America Regional	4,000	11,000	13,500	10,000
Subtotal	123,700	142,400	101,528	164,200

### ASISTENCIA ECONÓMICA DE EE.UU. PARA FINES ANTINARCÓTICOS

	FY 1998 ACTUAL	FY 1999 PLAN	FY 1999 EM. SUPP.	FY 2000 REQUEST
<b>NARCOTICS PROGRAMS</b>				
<i>Asia/Africa/Middle East Regional</i>				
Laos	3,500	3,700		4,000
Pakistan	1,500	2,200		2,500
Thailand	2,000	2,700		3,000
Turkey	500	500		500
NIS/EUR Regional	0	0		0
Asia/Africa/ME Regional	683	3,000		5,500
Subtotal	8,183	12,100		15,500
<i>Interregional Aviation Support</i>	38,000	51,000		50,000
<i>Total Country Programs</i>	169,883	205,500		229,700
<i>International Organizations</i>	4,517	9,200		12,000
<i>Law Enforcement Training and Demand Reduction</i>	9,000	8,000		9,000
<i>Systems Support/Upgrades</i>	—	4,500		5,000
C - 26 Support	4,000	—		—
Huey Upgrades - Colombia	14,000	—		—
Total Systems Support/Upgrades	18,000	4,500		5,000
<i>Program Dev. and Support</i>	8,600	8,800		9,300
<b>TOTAL NARCOTICS PROGRAMS</b>	<b>210,000</b>	<b>236,000</b>	<b>101,528</b>	<b>*265,000</b>

\* The Congress provided \$232.6 million in Emergency Supplemental funding in FY 1999.

## 12. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

### BIBLIOGRAFÍA GENERAL

APEP (Asociación Peruana de Estudios e Investigaciones para la Paz),  
1990 *Violencia estructural en el Perú: marco teórico*, APEP, Lima.

ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO EL CARMEN,  
1990 *Plan de ordenamiento y manejo de las cuencas de los ríos San Miguel y Putumayo PSP, # 6729*, MAG, copias mecanografiadas.

BAGLEY, Bruce Michel,  
1991 *Entrevista: El presidente César Gaviria Trujillo, en: Norte-Sur: La revista de las Américas*, University of Miami, junio/julio.

.....  
1992 *After San Antonio*, en: *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Volume 34, Number 3, University of Miami, Miami, fall.

BAGLEY, Bruce; BONILLA, Adrián; PAEZ, Alexei (editores),  
1991 *La Economía Política del Narcotráfico: el caso ecuatoriano*, FLACSO-North-South Center (University of Miami), Quito.

BARSKY, Osvaldo,  
1988 *La Reforma Agraria en el Ecuador*, Corporación Editora Nacional—INFOC, Quito.

- BARTH, Frederik (comp),  
1976 *Los grupos étnicos y sus fronteras*, Fondo de Cultura Económica, México.
- BAUDRILLARD, Jean,  
1981 *El sistema de los objetos*, Méjico.
- BONILLA, Adrián,  
1993 *Las sorprendentes virtudes de lo perverso*, FLACSO—Ecuador, Quito.
- BOURDIEU, Pierre,  
1991 *El sentido práctico*, Taurus, Madrid.
- CABODEVILLA, Miguel Angel,  
1994 *Los Huaorani en la historia de los pueblos del Oriente*, CICAME, Coca.
- .....,  
1996 *Coca. La región y sus historias*, CICAME, S/L.
- .....,  
1998 *Los fantasmas errantes de la selva*, CICAME, S/L.
- CARVAJAL Gaspar, de  
1942 *Relación del Nuevo Descubrimiento del Famoso Río Grande que descubrió por muy gran ventura el Capitán Francisco de Orellana*, Biblioteca Amazonas, Volumen I.
- CARRERA, Raúl,  
1997 *Los temas de seguridad en la política exterior del Ecuador: Fragmentación de la nación, el Estado y el sistema internacional*. Ponencia presentada ante el Seminario Academia Diplomática—AFESE: Relaciones Internacionales del Ecuador: la Acción de la Cancillería, Quito, 6-7 de noviembre .

- CASSIRER, Ernst,  
 1974 *El Mito del Estado*, Fondo de Cultura Económica, México.
- CASTILLO, Fabio,  
 1991 *Coca Nostra*, Editorial Documentos Periodísticos, Bogotá.
- CASTRO, Alfredo,  
 1997 Colombia: mitos y realidades económicas del narcotráfico, en: *Comercio Exterior*, volumen # 47, Número 4, México, abril.
- CHAVEZ, Blanca,  
 1994 *El caso de Santa Elena y San José de Wisuyá—Sucumbíos*, Monografía de peritaje presentada en la Universidad abierta de Loja, Quito, 14/01.
- CHERNICK, Marc,  
 1990 Challengers, Multiple Sovereignty and the State in Colombia: A response to Alejandro Reyes, en: *Selección de textos publicados sobre proceso político latinoamericano*, Maestría en Ciencias Políticas, FLACSO—Ecuador, julio.
- CASSAMENT, Roger,  
 1988 *Putumayo, caucho y sangre. Relación al Parlamento inglés (1911)*, Abya-Yala, Quito.
- COMISION ANDINA DE JURISTAS,  
 1993 *Putumayo*, Comisión Andina de Juristas, seccional Colombia, Bogotá.
- COMISION DE SUPERACION DE LA VIOLENCIA,  
 1992 *Pacificar la paz*, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional-CINEP-Comisión Andina de Juristas-Cecoin, Santafé de Bogotá.

CORSETTI, Giancarlo, TOMMASOLI, Massimo, VIEZZOLI, Maura,  
1987 *Migrantes y colonos de la sierra en la selva tropical colombiana*, Bulzoni editores, Italia.

DEGREGORI, Carlos Iván,  
1990 *Ayacucho 1969-1979. El surgimiento de Sendero Luminoso*, IEP, Lima.

DEGREGORI, Carlos Iván; GROMPONE, Romeo,  
1991 *Elecciones 1990: Demonios y redentores en el nuevo Perú. Una tragedia en dos vueltas*, IEP, Lima.

DESROCHE, Henry,  
1976 *Sociología de la esperanza*, Herder, Barcelona.

DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO,  
1988 *Tomo I: Recursos naturales y económicos*, Abya-Yala-Secretaría General de la OEA, Departamento de Desarrollo Regional, Quito.

.....  
1988 *Tomo II: Aspectos demográficos y sociales*, Abya-Yala-Secretaría General de la OEA, Departamento de Desarrollo Regional, Quito.

.....  
1988 *Tomo III, Aspectos Regionales*, Abya-Yala/Secretaría General de la OEA (Departamento de Desarrollo Regional), Quito.

DIAGNOSTICO REGIONAL,  
1989 *Plan de ordenamiento y manejo de las cuencas de los ríos San Miguel y Putumayo PSP*, Unidad técnica colombiana/Unidad técnica ecuatoriana/OEA, Departamento de Desarrollo Regional, Bogotá.

- ENVIROTEC,  
 1996 *Actualización selectiva del Plan de Manejo Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera (PIMA). Aspectos socioeconómicos*, CAAM—Banco Mundial—Petroecuador, Quito.
- EASTMAN, Jorge; RUBEN, David,  
 1992 *El narcotráfico en la región andina*, Parlamento Andino/ONU/UNDCP, Bogotá.
- ECHEVERRIA, Julio; MENENDEZ—CARRION, Amparo,  
 1994 *La Violencia en los Andes. El caso Ecuador*, FLACSO.
- ESSEN—AMBIENTEC,  
 1991 *Plan Integral de Manejo Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera. Aspectos socioeconómicos*, Volumen IV, Tomo I, Petroecuador.
- GIRARD, Rene,  
 1983 *La violencia y lo sagrado*, Anagrama, Méjico.
- GORRITI, Gustavo,  
 1990 *Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú*, Editorial Apoyo S.A., Lima.
- HENMAN, Antony,  
 1992 *Mama coca*, hisbol-VBD, La Paz.
- HUDELSON, John,  
 1987 *La cultura quichua de transición: su expansión y desarrollo en el Alto Amazonas*, Abya-Yala, Quito.
- INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC),  
 1990 *V Censo de población y IV de vivienda*, INEC, Quito.
- INFORME MISION SUCUMBIOS,  
 1992 Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI-Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU-

Consejo Danés para Refugiados/Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos CDR/CPRL-Servicio Universitario Mundial SUM, Quito-Ecuador.

- JARAMILLO, Jaime; MORA, Leonidas; CUBIDES, Fernando,  
1989 *Colonización, coca y guerrilla*, Alianza editorial, Bogotá.
- KALMANOVITZ, Salomón,  
1990 *Violencia y narcotráfico en Colombia: Conference papers*, Columbia University Press, Nueva York.
- LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal,  
1987 *Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la Democracia*, Siglo XXI Editores, México.
- LAPLANTINE, Françoise,  
1977 *Las voces de la imaginación colectiva: mesianismo, posesión y utopía*, Barcelona, Gedisa.
- LEYES DE REFORMA AGRARIA Y REGLAMENTO,  
1991 *Colonización de la Región Amazónica*, actualizado a noviembre de 1991, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito.
- MOLANO, Adolfo,  
1987 *Selva Adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare*, El Ancora editores, Bogotá.
- MURILLO, Gabriel; OREJUELA, Luis Javier; BARRERA, Cristina,  
1991 "Narcotráfico y Política en la década de los ochenta: entre la represión y el diálogo, en: ARRIETA et.al., *Narcotráfico en Colombia: dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales*, Universidad de los Andes — Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991
- PAEZ, Alexei,  
1990 *narcotráfico y violencia en los países andinos*, Tesis de Maestría en Ciencias Políticas con mención en Políticas



Comparadas de los Países Andinos, FLACSO-Ecuador, Quito.

.....)

1991 Narcotráfico y Amazonia: el desarrollo y la violencia, en: RUIZ, Lucy (comp), *Amazonía nuestra*, CEDIME-Abya Yala, 4.

.....)

1991 *Violencia y sistema político: una perspectiva comparada*, FLACSO—Ecuador, copias mecanografiadas, Quito, noviembre .

.....)

1992 *La internacionalización de la Amazonia: una perspectiva desde el narcotráfico y la violencia*. Ponencia para las Segundas Jornadas Internacionales sobre la Amazonia, copias mecanografiadas, enero

PALACIO, Germán (Comp),

1990 *La Irrupción del Paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*, CEREC—ILSA. Bogotá.

PALACIO, Germán, ROJAS,

1990 Fernando, Empresarios de la cocaína, Parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano: narcotráfico y contrainsurgencia en Colombia. En: PALACIO, Germán, *La Irrupción del Paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*, CEREC-ILSA. Bogotá.

PIZARRO, Eduardo,

1990 *Insurgencia crónica, movimiento guerrillero y proceso de paz en Colombia: Conference paper*, Columbia University Press, Nueva York.

.....)

1995 La insurgencia armada: raíces y perspectivas, en: SANCHEZ, Gonzalo; PEÑARANDA, Ricardo (editores), *Pasado y Presente de la Violencia en Colombia*, CEREC- IEPRI, Bogotá.

REYES, Alejandro,

- 1988 Conflictos agrarios y luchas armadas en Colombia contemporánea, en: *Análisis político* # 5, Instituto Nacional-Bogotá.

.....,

- 1995 Paramilitares en Colombia: Contexto, Aliados y Consecuencias, en: SANCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo, *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, CEREC—IEPRI, Bogotá.

RIVERA, José,

- 1987 *La vorágine*, Oveja Negra, Bogotá.

ROMERO, Nelson,

- 1990 *narcotráfico y deuda externa las plagas de America*, CAP-CETCA-CER,G-CIUDAD, Quito.

ROSSI, Adriana,

- 1996 *Narcotráfico y Amazonía Ecuatoriana*, Abya Yala, Quito, 1996.

SOBERON, Ricardo,

- 1997 Corrupción, narcotráfico y Fuerzas Armadas. Una aproximación para América Latina, en: JELSMA, Martín (Ed.), *Crimen uniformado. Entre la corrupción y la impunidad*, Transnational Institute (Amsterdam)/Acción Andina/ Centro de Documentación e información de Bolivia, Cochabamba, 1997.

TILLY, Charles,

- s/f *From Mobilization to Revolution*, Copias mecanografiadas (FLACSO—Ecuador).

.....,

- 1992 La amazonia en la historia del Ecuador, en: AYALA, Enrique (Editor), *Nueva Historia del Ecuador. Ensayos ge-*

*nerales I*, Volumen 12, Corporación Editora Nacional-  
/Grijalbo, Quito.

URBANO, Enrique (Comp.),

1991 *Poder y violencia en los Andes: apuntes para un debate*,  
Bartolomé de las Casas, El Cuzco.

URIBE, María Victoria,

1996 *Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la violencia en el Tolima 1948-1964*, CINEP, Bogotá.

UPRIMMY, Rodrigo; VARGAS, Alfredo,

1990 La palabra y la sangre: Violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia. En: PALACIO, Germán (Comp.), *La Irrupción del Paraestado, ensayos sobre la crisis colombiana*, CEREC-ILSA, Bogotá.

VILLAMAR, Darío

1991 *Colombia: narcotráfico parte de un todo*, en Lucy Ruiz (Comp.) CEDIME-ABYA-YALA-ILDIS- Quito, 4.

#### Fuentes internet

[www.cajpe.org.pe/NARCO.HTM](http://www.cajpe.org.pe/NARCO.HTM)

[www.state.gov/www/global/narcotics\\_law/1998\\_narc\\_report/index.html](http://www.state.gov/www/global/narcotics_law/1998_narc_report/index.html)

[www.semana.com/](http://www.semana.com/)



# INDICE

PRESENTACIÓN .....	5
Segundo Moreno Yáñez	
ANTECEDENTES .....	11
1. INTRODUCCIÓN .....	19
2. EL PUTUMAYO .....	27
2.1. El colono-campesino de la amazonia norte ecuatoriana .....	35
3. COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR ASPECTOS RELEVANTES .....	41
3.1. Colombia .....	42
3.2. Perú .....	50
3.3. Ecuador .....	53
4. VIOLENCIA Y PODER EN LA CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS .....	61
Elementos preliminares .....	62
Representaciones colectivas .....	66
La violencia y sus símbolos .....	69
5. NARCOTRÁFICO .....	73
5.1. Plantaciones de coca .....	76
Bolivia .....	79
Colombia .....	82
Perú .....	85

Ecuador .....	88
5.2. Ecuador en los volúmenes de la narcoindustria	89
5.3. Éxitos contra el narcotráfico .....	96
<b>6. INFORMACIÓN Y PARANOIA .....</b>	<b>103</b>
<b>7. LAS FRONTERAS DE LA VIOLENCIA SOCIAL ...</b>	<b>117</b>
<b>8. OTRA FRONTERA: AMAZONAS Y AMAZONIA ..</b>	<b>125</b>
<b>9. CAMINAR POR LA TIERRA DEL COCOROCO ...</b>	<b>133</b>
<b>10. A MODO DE CONCLUSIONES .....</b>	<b>145</b>
<b>11. ANEXO .....</b>	<b>151</b>
<b>12. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>155</b>